

*Hacia un nuevo orden deseado*

**Fundación REDES**

**Documentos de Investigación y Ensayos Políticos**

**Hacia Un Nuevo Orden Deseado en Bolivia:**

**La Revolución Nacional De 1952 Como Presencia Permanente**

**Y Como Irresolución Para Construir Nuestra Modernidad**

**Franco Gamboa Rocabado**

**Consultor en el Área de Gobernabilidad y Democracia**

**La Paz, septiembre de 2007**

## ÍNDICE

- **Introducción**
- **El contexto inicial: de los conflictos entre el Estado y las regiones, a la crisis del modelo liberal**
- **El modelo liberal: contradicciones y agotamiento**
- **La formación de clases políticas y la búsqueda de una identidad político-ideológica para transformar la sociedad**
- **La crisis del Estado, las reivindicaciones regionales y la situación revolucionaria**
- **La Revolución Nacional y las fases del nuevo Estado**
- **Reordenamiento del Estado y centralismo político después de 1952: : hasta dónde llegaron las reformas estructurales**
- **Estado Totalizador y persistencia de conflictos regionales**
- **Del Estado totalizador revolucionario al Estado neoliberal**
- **Los desafíos en el mediano plazo: ¿problemas del desarrollo regional o problemas del desarrollo nacional?**
- **La Revolución Nacional como el péndulo que baila entre la búsqueda y el derrumbe de la modernidad**
- **La modernidad se hizo añicos de todos modos**
- **¿Hacia donde brincan las astillas del derrumbe?**
- **El momento contemporáneo de modernización neoliberal: la trayectoria del *gonismo***
- **El camino hacia el poder**
- **La ausencia de hegemonía**
- **El comienzo de las dudas**
- **La renuncia de Blattmann y el choque entre liderazgos**
- **El fracaso del MNR en las elecciones de 1997**
- **Política del avestruz y desprecio del compromiso**
- **El péndulo desencajado: 2002, cincuenta años de la Revolución Nacional de 1952**
- **Conclusiones: ¿entonces hacia dónde va la búsqueda de un nuevo orden deseado?**

# Hacia Un Nuevo Orden Deseado:

## La Revolución Nacional De 1952 Como Presencia Permanente

### Y Como Irresolución Para Construir Nuestra Modernidad

Por Juan Santafé

#### Introducción

La Revolución Nacional o Revolución de Abril de 1952 constituyó el acontecimiento histórico más importante de la segunda mitad del siglo XX. No sólo porque fue un hecho político de masas sin parangón hasta la actualidad, sino porque terminó destruyendo toda una estructura de poder que se desarrolló desde la fundación de la República, extendiéndose, además, como un proyecto de largo plazo hasta bien entrada la década de los años ochenta, momento en el que se agotó y entró en decadencia.

Como lo afirman algunos analistas, la Revolución del 9 de abril fue un acto moderno y como todo acto moderno va a ser continuamente reinterpretado en la historia porque los momentos históricos tratan de buscar sentido a su acontecer regresando una vez más a lo que sucedió antes. La Revolución Nacional como un hecho moderno en la historia de Bolivia nos permite comprender aquellos horizontes por los cuales transitaron nuestros anhelos de modernización a través de diferentes procesos de *ruptura*. La modernidad traída por la Revolución abrió un período de *escisión*. Por un lado se dio paso al trauma y la violencia como los principales recursos para dejar de ser una sociedad atrasada, rural y oligárquica; por otro lado, la Revolución se vio frente a las exigencias por construir un porvenir inédito. Asimismo, el tiempo de la Revolución Nacional fue también el de los efectos perversos o no previstos, el tiempo político de la discordia irreconciliable, personalismo, prebendalismo, autoritarismo, degeneración militar y turbios hábitos en el manejo del poder que todavía se practican hasta ahora.

Este concepto de la Revolución como acontecimiento moderno y como escisión nos obliga a mirar de frente las condiciones socio-políticas y económicas que llevaron a determinados actores políticos a actuar de determinada manera, a provocar consecuencias específicas y, por lo tanto, a transmitir una herencia histórica que nos estimula a resignificar constantemente nuestro pasado. Las características y efectos que tuvo la Revolución Nacional permitirán resignificar lo que entendemos por modernización, desarrollo y transformación de la sociedad boliviana, así como poner atención a nuestras frustraciones y errores cuyo impacto aún marcan nuestra perspectiva para proyectarnos hacia el futuro.

Al volver a mirar la Revolución Nacional es importante partir de la descomposición del modelo liberal que imperó en Bolivia a comienzos de 1900. De esta manera, se hace un análisis político sobre las condiciones en que fueron socavadas las bases de modernización liberal, para dar paso a una nueva estructura de poder y a un nuevo rediseño del Estado boliviano caracterizado como *centralista* y *totalizador*. Con la Revolución de abril, los conflictos políticos fueron reorientados hacia una nueva mirada nacional, instaurándose un Estado providencial y autoritario. En consecuencia, se responderá a las siguientes interrogantes: ¿cuáles fueron los desequilibrios entre el Estado boliviano y sus regiones, desde los comienzos de siglo hasta el advenimiento de la Revolución de abril de 1952? ¿Cómo pueden caracterizarse los conflictos entre el Estado y los municipios o poderes locales del país, a partir de una visión donde imperaban diferentes reivindicaciones autonomistas que reclamaban las regiones? Finalmente, ¿cuáles fueron las condiciones políticas que estableció la Revolución de abril para rearticular un nuevo centralismo nacional que hiciera posible la refundación del Estado, abriendo el paso para la posibilidad de construir una nueva élite económica y política?

La Revolución Nacional se impuso como un *peso controlador* sobre todo el país y conformó una situación de “*colonización estatal*”<sup>1</sup> bajo la égida del nacionalismo revolucionario, ideología y práctica políticas que, con sus contradicciones y aciertos, dominó toda la estructura del poder en Bolivia entre 1952 y la década de los 80.

La gestación, desenvolvimiento y contradicciones que tuvo la Revolución de abril, representan un momento de modernización en la historia cultural del país, porque al mismo tiempo que se combatió contra la dominación de una oligarquía de carácter señorial y orientada hacia un capitalismo extractivo<sup>2</sup>. La Revolución Nacional se conectó con otros tres actos modernos de nuestra historia: en primer lugar, con las reformas liberales de principios del siglo XX; en segundo lugar, con la crisis de hegemonía y legitimidad de la oligarquía estañífera-feudal; y en tercer lugar, con la búsqueda de una industrialización acelerada cuya crisis desembocó en la democracia de los años 80, volcando la mirada una vez más hacia las reivindicaciones de los poderes regionales. El análisis de los resultados de la Revolución permitirá ver cómo nuestros proyectos de desarrollo estuvieron sometidos al vaivén entre **desarrollo nacional** subordinado a un Estado centralista, y **desarrollo regional** orientado hacia una descentralización y demandas por mayor democratización del poder.

En la parte final de este estudio se analiza el surgimiento y caída del *gonismo* que representó un momento de modernización contemporánea denominado por muchos como *neoliberal*. Los circuitos políticos por donde se desplazó el *gonismo* señalaron un periodo de vida que fue de exactamente diez años. Subió al poder en 1993, su partido perdió las elecciones presidenciales de 1997, como oposición padeció de una seria debilidad constructiva y, finalmente, ganó nuevamente las elecciones generales del año 2002 pero terminó cayendo en el despeñadero del autoritarismo, de la falta de visión tolerante y, como una especie de embrujo maldito, Sánchez de Lozada y el MNR cosecharon lo que se había sembrado desde la revolución histórica de 1952; tal revolución fue capaz de destruir el viejo orden pero sin crear un verdadero Estado democrático; la revolución social del año 1952 atacó las estructuras enmohecidas de la sociedad boliviana pero no produjo, ni en lo social ni en lo económico, una sociedad nueva; la revolución económica que el *gonismo* quiso instaurar embelezando a los medios de comunicación y a muchos intelectuales, trató de acelerar la modernización del país a partir de una serie de políticas neoliberales pero no consiguió un verdadero desarrollo económico, no creó

un vasto mercado interno y prosiguió con la corrupción, una gangrena que, junto a la violencia en la ciudad de El Alto, encendió protestas masivas hasta echarlo del poder en octubre de 2003<sup>3</sup>.

El contexto inicial: de los conflictos entre el Estado y las regiones, a la crisis del modelo liberal

Desde que se fundara la República, las tensiones entre el nuevo Estado boliviano –sometido a una serie de ambiciones de poder provenientes de distintos caudillos militares– y las demandas autonomistas emergentes de las identidades regionales, fueron una marca que atravesaría la historia nacional hasta nuestros días. Los diferentes caudillos que habían peleado junto a los ejércitos libertarios, pronto se vieron enfrentados con una heterogeneidad enorme al interior de la nueva República de Bolivia. En estas circunstancias, los caudillos eran mediadores, *intermediarios entre dos mundos*, entre aquel que configuraba la tradición colonial con su sistema político de referencias grupales, fuertemente vertical y orientado hacia un linaje aristocrático, y la *modernidad de igualdad de ciudadanía* a la que aspiraban las élites ilustradas, por lo menos en teoría, según los postulados de la ilustración francesa o la democracia norteamericana que se irradiaron con cierta fuerza luego de la independencia<sup>4</sup>.

El Estado boliviano era débil y las pugnas entre republiquetas permanente, de tal manera que la única estrategia política de estabilidad en los primeros años después de la independencia fue la lógica del *pacto o tregua* a la que podían llegar los líderes militares; sin embargo, tal estrategia no tardó en ser contradictoria y vacilante. O se sancionaba una constitución política que configurara un Estado centralista y enérgico, o se instauraba un *poder disociado* donde las autonomías regionales asumirían una administración independiente en lo económico y político, tal vez de una manera similar al modelo federal norteamericano.

Entre 1910 y 1920 se optó por la primera alternativa: construir la nación y el Estado, tratando de centralizar el poder al máximo, lo cual daba lugar a un fenómeno con dos características. Primero, “un Estado que para responder a su mayor estratificación interna y creciente diferenciación cualitativa en sus tareas, demandaba funciones más abarcativas”<sup>5</sup>.

Segundo, surgió una nueva complejidad que, poco a poco, iba adquiriendo notoriedad política: la *gestión municipal* que, al mismo tiempo, todavía no se diferenciaba de la administración regional.

El Estado, a escala central, debía otorgar, sobre todo, articulación geográfica para explotar las riquezas naturales en beneficio de un desarrollo integral y moderno. Entretanto, en el ámbito local o municipal cobraban fuerza las voces que buscaban consolidar un sistema urbano donde la participación política de las élites letradas sea el principal instrumento de acción, puesto que solamente una minoría letrada podía orientar el desarrollo de la República, sobre la base de fuertes vínculos con la naciente economía minera del estaño y con la expansión de las haciendas rurales. De ahí que las haciendas apoyaran a un Estado fuerte que no cuestione la servidumbre indígena, ni tampoco la posibilidad de considerar derechos civiles y políticos para grandes sectores de la sociedad boliviana considerados ignorantes y subordinados al poder de un patrón. Así se iba construyendo una visión sobre el manejo del poder y la configuración del Estado que siempre promovió la exclusión de las masas indígenas, hecho que al mismo tiempo impedía conformar un proceso de unidad nacional.

Luego de la Guerra Civil de 1898, el Estado quedó bajo el control de los liberales quienes, contradictoriamente, se negaron a poner en práctica sus propuestas federalistas, asumiendo más bien una concepción *centralista del poder*, con cierto temor para reconocer las demandas municipalistas de orientación autónoma. Durante las primeras dos décadas y media del siglo XX, los ferrocarriles fueron aquella expresión práctica del centralismo y la modernización propugnados por los presidentes José Manuel Pando e Ismael Montes. Por un lado, los ferrocarriles constituyeron el proyecto moderno más importante llevado a cabo por el Estado y, por otro, la manifestación de un desequilibrio entre diferentes regiones, ya que tales ferrocarriles se convirtieron en la llave de *acceso* o *encierro* que tenían diversos departamentos bolivianos para conectarse con el mercado interno y externo; por lo tanto, el ferrocarril acabó siendo el centro de la disputa interregional. Mientras La Paz y Oruro pugnaban por vincularse con el mercado mundial para exportar con mayor facilidad sus minerales, Cochabamba y Santa Cruz,

hacían lo propio tratando de enviar su producción agrícola a las zonas andinas. Dentro de este nuevo molde de dominación liberal, el sur y oriente del país quedarían postergados hasta la llegada de la revolución nacional que, como se verá más adelante, presionarían para abrir otra posibilidad de vertebración caminera, sobre la base de otro proyecto económico articulado al desarrollo de una burguesía agroindustrial en Santa Cruz.

## **El modelo liberal: contradicciones y agotamiento**

Lo que en Bolivia se conoció como la dominación oligárquica, debe entenderse como aquel proceso de transformación e influencia según los criterios puestos en marcha por los liberales para la modernización del país. A comienzos del siglo XX, el Estado se organizó como un conjunto de estructuras oligárquico-liberales donde tuvo lugar un proceso de modernización bastante contradictorio. Como sostiene Irma Lorini, “el nuevo modelo estaba afincado en el surgimiento de enclaves productivos capitalistas, como fue el caso de la explotación de la plata; años más tarde, la de la goma y la del estaño, que permitieron el desenvolvimiento de nuevas fuentes y fuerzas productivas en la economía boliviana, a la vez que viabilizaron la incorporación de Bolivia al mercado internacional y la modernización de la infraestructura referida al sistema de comunicaciones y transportes; asimismo, el avance de la estructura latifundista mantuvo muchas características no capitalistas en su trato con la tierra y el indígena”<sup>6</sup>. El proceso de modernización estuvo subordinado a estructuras feudales, a enclaves capitalistas apenas eficientes y a una discriminación racial que claramente dividía a Bolivia en dos: blancos e indios.

El modelo liberal en Bolivia buscó abolir la comunidad indígena y el ayllu para dar lugar al avance del mercado y, a la vez, favorecer la expansión de la hacienda. Todo este conjunto de fenómenos estuvo acompañado por la formación de una élite de poder conservadora, alrededor de la cual se organizó la élite política y el sistema tradicional de partidos, como el conservador, liberal y republicano.

El Partido Liberal se desarrolló en Bolivia de 1899 a 1920. Sus pilares de sustentación fueron la producción y exportación de materias primas, construcción de infraestructura de comunicación y transportes, además del fomento de la educación general y la doctrina según la

cual debía crearse un Estado Constitucional con una eficiente administración pública. Las bases económicas para el desarrollo del programa liberal boliviano estuvieron dirigidas a la producción de minerales, especialmente del estaño, así como a la estimulación del sector exportador en este rubro. El desarrollo de esta forma monoprodutora incidió en la economía boliviana para que se iniciara un proceso de dependencia del mercado internacional, el cual determinaba el alza o baja de los precios. Sin embargo, la historia fiscal de la época se caracterizó por una estructura deficiente de ingresos, por un sistema desordenado de gastos y por una ausencia o mala dirección de las inversiones públicas.

Es así como la política fiscal boliviana de los gobiernos liberales se caracterizó por el desorden, la agravación en la situación presupuestaria llena de déficits, el aumento del gasto público, y la aparición de la deuda externa. Estos factores negativos no crearon un ambiente propicio para las inversiones y, por lo tanto, la economía boliviana quedó reducida a su actividad monoprodutora y monoexportadora de minerales. En este sentido, las aspiraciones por crear un Estado moderno y federal bajo principios liberales –que promueva la participación de todas las clases sociales en Bolivia– en la práctica quedó en simples enunciados porque persistió una dominación oligárquica y excluyente. La tradición conservadora en el pensamiento de la élite boliviana había demostrado, una vez más, estar más arraigada que todos los principios y la doctrina liberales, de tal modo que cualquier discusión sobre la modernización boliviana representaba algo inútil y por demás incomprensible.

Este tipo de pensamiento de la élite gobernante boliviana no cambiará la forma de hacer política en el país, a pesar de la formación de nuevos partidos políticos. El liberalismo boliviano no concretó la federalización del país, ni tampoco modernizó la estructura productiva porque su discurso quedó atrapado en los rezagos históricos de la explotación indígena y la incapacidad para ampliar la ciudadanía política y democratizar las estructuras sociales.

El fervor minero que mostraron los liberales ante el crecimiento de la producción de estaño en las regiones del norte, centro y sur de la Cordillera de los Andes, se convirtió solamente en una ambición para consolidar el poder económico y la administración estatal para las élites del occidente del país, cuyo enclave de dominación y de burocracia estatal estaba situado en el departamento de La Paz. Finalmente, la misma élite gobernante se quebró en dos fracciones al interior de las filas liberales: los llamados “doctrinarios” o “pacifistas” a la cabeza de Ismael Montes, y los “federalistas” o “puritanos” a la cabeza de Lucio Pérez Velasco.

El principal error de los liberales estuvo en continuar con la política conservadora de comienzos de la república, en seguir con las actividades comerciales e industriales bajo los mismos indicadores del nepotismo feudal, y en no haber podido abrir las puertas del desarrollo a los intereses de la Nación como una comunidad pactada entre blancos e indígenas.

A pesar de que la política ferroviaria en el país trató de estimular un Estado integrado, persistió una distribución desigual de privilegios y recursos entre todas las regiones de Bolivia. Si bien la minería del estaño adquirió una importancia financiera internacional, el ingreso boliviano hacia el mercado internacional fue desfavorable por la casi primitiva política comercial con la que contaba el país, y por la subordinación de enormes masas indígenas al poder los terratenientes, lo cual hacía que el propio mercado interno del país sea demasiado estrecho y sin un funcionamiento real como lo exigía un modelo capitalista de producción.

La pérdida del Litoral boliviano tuvo una enorme incidencia en la economía del país. Sin una salida hacia el océano Pacífico las exportaciones mineras tenían que someterse a las exigencias chilenas por la nueva situación de mediterraneidad. Por consiguiente, durante la administración liberal en Bolivia, los presupuestos del gobierno llegaron a cifras inferiores a los 10 millones de bolivianos, cifra menor a la fortuna de algunos industriales y mineros; es decir, el Estado no podía acumular riqueza. De esta incapacidad proviene el surgimiento de políticas latifundistas donde el problema agrario adquirió una importancia relevante porque así se podían cargar los déficits del Estado liberal sobre las espaldas de los indígenas sometidos a través del cobro de impuestos<sup>7</sup>.

Este conjunto de visiones parroquiales, conservadoras y antidemocráticas fue lo que llevó a debilitar la unidad e influencia política de los liberales. El empobrecimiento del Estado sobrevino y el descontrol gubernamental también porque la política liberal no logró conformar una burocracia estatal acorde con la doctrina, apareciendo muy pronto la evasión impositiva, que equivalía a la práctica de contrabando y a la falta de control estatal sobre la minería.

Los magnates mineros y aquellos políticos instalados en el centro del país, disponían no sólo de las ricas minas de estaño, sino también del privilegio del poder. Por esta razón no tuvieron ningún interés en ordenar y construir un Tesoro General de la Nación a través de disposiciones tributarias, la reducción de las patentes mineras y el reconocimiento social a los trabajadores. La corrupción burocrática se encontraba en todas las oficinas de recaudaciones para el Estado<sup>8</sup>. Asimismo, había empresas privadas con capitales chilenos y norteamericanos que, desde 1905, no pagaban impuestos sobre utilidades, ni sobre derechos de exportación. En consecuencia, las empresas extranjeras, la débil estructura institucional del Estado, la exclusión social y la desarticulación regional en Bolivia, postergaban permanentemente la modernización boliviana, dejando una dura derrota para el país y los gobiernos liberales hasta 1920.

Asimismo, es importante llamar la atención sobre los conflictos entre el Estado y sus regiones de 1900 a 1950, así como sobre la consolidación hegemónica de los mineros del estaño. Nuestra República nació sobre una estructura económica, social y cultural profundamente heterogénea, acrecentada todavía más por las condiciones de dispersión geográfica del poder, razón por la cual algunos intelectuales como Badia Malagrida calificaron a Bolivia como un **absurdo geográfico**. Esta tesis, antes de ser una crítica geopolítica, era una tajante observación sobre la vocación que debería tener el nuevo Estado boliviano: imponer su poder contra viento y marea o, inevitablemente, desaparecer frente al potencial autónomo regional que hablaba con propia voz al interior del país. Este fue –y todavía es– el dilema de nuestra Nación, que se

expresa como la posibilidad de consolidar un *Estado fuerte*, pero también urgido por mantener sus específicas *autonomías regionales*.

El proyecto de modernización liberal había dado los principales pasos en la configuración estatal, instalando una estructura de poder cuya sede política era La Paz y articulando todos sus cimientos económicos en torno a la minería productora de estaño. El primer eje del nuevo proyecto estatal y económico del liberalismo boliviano había confiado su suerte en el sistema basado en la extracción y exportación de estaño. Los nuevos jerarcas pusieron todo su empeño para apostar por el mercado libre, la iniciativa privada y el Estado centralista, sobre todo cuando se trataba de defender los intereses de las regiones mineras, constituyéndose en una estructura de dominación y en una nueva oligarquía: los barones del estaño.

Un segundo eje del proyecto modernizador liberal ensambló la economía minera estañífera con un sistema agrícola que funcionaba basándose en cultivos de subsistencia, o bien poniendo en marcha una actividad comercial regionalizada bajo el poder de la gran hacienda terrateniente, cuyo funcionamiento poseía un régimen de *castas* muy estricto, asentado en la explotación del indígena convertido en pongo de hacienda, en la medida que el indio era comprado o vendido como parte de toda la tierra, llegando a ser parte del patrimonio que ostentaba el patrón terrateniente.

El país se había definido claramente como un Estado liberal orientado hacia el mercado mundial, a través de un capitalismo extractivo monoprodutor de estaño, al mismo tiempo que se centralizaba en su interior para consolidar el poder de las élites paceñas. Dichas élites pactaron con el poder feudal del mundo rural para estructurar un *dominio colonial interno* sobre las masas indígenas y definir un Estado que trate de imponer su soberanía “conquistando” el noroeste y todo el este del país. Esto equivalía también a “civilizar la República” a partir de criterios positivistas europeos y mediante una política de colonización señorial; es decir, solamente las castas superiores blancas podían construir la modernización nacional. Así, el país se había conformado sobre la base de un molde partido entre dos: la Bolivia minera que

manipulaba a la burocracia estatal, y la Bolivia feudal de piel blanca que controlaba las haciendas.

El eje geográfico compuesto por las regiones de La Paz, Oruro y Potosí, mantenía vínculos funcionales con las regiones de Cochabamba y Santa Cruz. El resto territorial estaba subordinado al modelo económico minero, al poder verticalista y a una subsistencia según sus capacidades regionales o de acuerdo con las potencialidades de los patrones feudales. “En estas circunstancias, cuando la escasez de recursos exigía una maximización de los mismos, los Concejos Municipales hicieron entre 1906 y 1925 las veces de portadores de las demandas regionales, principalmente de los departamentos ubicados fuera del radio de acción minera. Sus voces airadas, en un papel que hoy atribuiríamos a los Comités Cívicos, sirvieron para frenar y torcer el curso netamente centralista y exportador del Estado, dominado por los intereses mineros afincados en La Paz, obligándole a mirar al *interior* depauperado que él mismo había contribuido a crear. Quizá entonces como nunca antes se corroboró aquella máxima que tanto había gustado a los mentores del poder local decimonónico: *descentralización equivalía en la Bolivia de los 10's ó 20's a régimen municipal fuerte y autónomo*”<sup>9</sup>.

Si bien la nueva estructura de poder liberal gozó de buena salud con los dividendos de la minería, no pudo construir un Estado lo suficientemente legitimado como para incorporar a todas las regiones o a todos los estratos sociales dentro del proyecto de modernización. Dicho proyecto era entendido solamente como una sociedad de corte occidental con la mirada puesta en los usos y hábitos europeos favoreciendo, además, al mercado internacional, en la medida que, supuestamente, los réditos económicos del liberalismo generarían, después, posibilidades adecuadas para el resto del país. Sin embargo, la mentalidad modernizadora no cedía un milímetro cuando se trataba de considerar a las masas indígenas del área rural como ciudadanos de segunda categoría, porque el modelo liberal de sociedad, Estado y mercado, era exclusividad de la raza blanca, las regiones mineras y los ciudadanos varones, con una renta determinada, según sus derechos censitarios. La educación comenzó a ser una prioridad para el Estado pero como una estrategia para purificar al país de las influencias indígenas; así, la educación a cargo

del Estado supuestamente transmitiría los cánones de modernización de las naciones exitosas como las europeas o norteamericana. Por lo tanto, el Estado debía contratar a expertos extranjeros como el belga Georges Roumá con el propósito de sustituir la “barbarie” por una “civilización”.

Por otra parte, el Estado liberal continuó asediado por los municipios urbanos que condensaban las identidades regionales y, por lo tanto, nunca fue visto como el poder omnímodo al cual todos debían someterse sin contemplaciones. Todo lo contrario, fue interpelado y amenazado en su poder e influencia por el poder municipal. Si bien a comienzos del siglo XX el régimen municipal no podía ser considerado como un sucedáneo efectivo de la descentralización para que el ámbito departamental cobre fuerza contundente, es reconocible que las tendencias federalistas buscaban un verdadero autogobierno, en una escala mayor que la localidad o provincia para construir poderes regionales, pues constataban que el poder del Estado nacional moderno no significaba sino la imagen de una institución débil e ineficaz.

Empero, la visión liberal “(...) tuvo el paradójico precio de desechar en la arena política lo que habían conseguido con las armas en la mano después de la Guerra Civil de 1898. El tema del federalismo prácticamente se archivó y los conflictos entre el Ejecutivo y las regiones del interior desfavorecidas, fueron mediados por los Municipios, convertidos nuevamente en factores de resistencia frente a los avances centralistas y a la desidia de su poder”<sup>10</sup>.

Como lo sostiene el historiador boliviano Gustavo Rodríguez, en casi toda la historia nacional, desde su fundación hasta la crisis del modelo oligárquico minero que desemboca en la Revolución de abril, es muy clara una íntima y persistente conexión entre poder local y poder regional, o mejor dicho, entre los Municipios y Asambleas Departamentales o Estados Federados, que se convierten en los prototipos político-administrativos a los que invocaban las élites de corte descentralista y federado para romper con el monopolio del departamento de La Paz o minero de dominación, caracterizado por su exclusión y una visión política que en el fondo era incapaz de modernizarse. Simultáneamente, toda la pompa doctrinaria liberal quedaba

seriamente cuestionada con sólo mirar las condiciones del indígena y las demandas regionales por mejores oportunidades.

Así persistieron las discusiones sobre cómo modernizar el Estado boliviano con vocación descentralizadora. Uno de los principales propagadores del municipalismo fue el militante republicano Daniel Salamanca –que después asumiría la presidencia de la República entre 1931 y 1934– junto con el liberal Ismael Vásquez; ambos fueron férreos propagandistas de la autonomía municipal y la descentralización administrativa o el federalismo. “Salamanca llegó incluso a presentar en 1921 (...) una enmienda constitucional descentralizadora, la misma que con leves modificaciones fue aprobada en el Referéndum de 1931, que estableció una reforma que transfería a las Asambleas Departamentales y Prefecturas designadas por el Presidente a propuesta de la Asamblea, parte del poder antes en manos del gobierno central”<sup>11</sup>.

La estructura de poder liberal no fue capaz de superar los conflictos entre el Estado y las regiones. Su identidad más uniforme, que habría de prolongarse hasta la reforma agraria de 1953, estaba plantada en un arraigado *racismo*, pues junto a las pugnas regionales y al desequilibrio de poderes e influencias en el ámbito nacional, la explotación del *indio* –término cargado de menosprecio– hacía que toda división de la sociedad en clases sociales correspondiera, en los hechos, prácticamente a las divisiones de raza, determinadas fundamentalmente por el lenguaje materno y la fisonomía. La vestimenta y ocupación también eran otros factores de discriminación donde se destruían las propuestas de modernización liberal y occidental, permitiéndose más bien que una minoría de la población sea considerada blanca por residir en las ciudades principales, hablar español y vestir ropa europea<sup>12</sup>.

La cultura de raza blanca era susceptible de manipulación, haciendo referencia, sobre todo, a la élite gobernante o a la pretensión de establecer una herencia europea. Esta cultura estableció una distinción, con mano de hierro, entre masas indígenas y élites blancas, ocultando el mestizaje hasta en los estratos más altos del sistema social. La estructura del poder había partido de principios intransigentes, tanto desde el punto de vista económico, como de la administración del Estado y la propia cultura, alimentando un peligroso darwinismo social,

concepción ideológica donde los indígenas eran considerados como seres de menor capacidad mental, moral y humana<sup>13</sup>.

Los primeros diez años del siglo XX habían transcurrido en medio de expectativas de modernización y una fragmentación del territorio nacional, lo cual hacía que se refuerzan los particularismos locales que se convertirían en un intenso regionalismo asentado en una economía bastante heterogénea, sobre todo de subsistencia, mientras que el mayor empuje estaba anclado en la economía minera. Al ingresar al siglo XX, Bolivia contaba con una población de 1.600.000 habitantes y una superficie territorial de 1.822.331 kilómetros cuadrados. En estas condiciones, la densidad demográfica por kilómetro cuadrado era sumamente baja porque alcanzaba a 0.87 habitantes. La preponderancia de población rural daba lugar a un dominio de la gran propiedad donde los terratenientes producían para un mercado interno muy pequeño. El país era, sin duda, una nación joven y casi vacía, concentrando la mayor densidad en la zona occidental y matizada por pequeños centros mineros y urbanos. El 20 por ciento vivía en áreas urbanas de más de 5.000 personas, totalizando 321.027 habitantes, de los cuales 160.000 habitaban en las capitales<sup>14</sup>.

La población económicamente activa llegaba a 1.060.000 habitantes que, de acuerdo con la labor económica, se dividía de la siguiente manera: 530.128 habitantes (lo que significa el 50.1 por ciento) se encontraban en la agricultura; 353.041 personas (es decir, el 33,3 por ciento) representaban la mano de obra artesanal; sin embargo, es muy probable que muchos de éstos combinaban su oficio con tareas agrícolas en el área rural; 32.921 pobladores (un 3,1 por ciento) estaban dedicados al pastoreo, mientras que 3.753 trabajaban como arrieros. A esto deben agregarse 55.521 tenderos, de los que, probablemente, 300 eran al por mayor o pertenecientes a grandes casas comerciales.

En el fondo, Bolivia no había modernizado su aparato productivo con el que nació a la vida republicana en 1825 y, por lo tanto, estaba aún en un período de transición de los viejos resabios arcaicos hacia la articulación de un mercado interno y de nuevos sectores económicos que hicieran del país una nación integrada y capitalista. El término *moderno* se identificaba con una meta gubernamental y económica: la construcción de ferrocarriles. El ferrocarril constituía la ambición de modernidad más notoria, sobre todo, cuando se hablaba del Presidente Aniceto Arce, al propio tiempo que los ferrocarriles eran una pieza fundamental para el traslado de mineral hacia el océano pacífico, por lo que los intereses mineros –de la plata primero y después

del estaño— alentaban con rigor la construcción de vías férreas, inclusive antes que una modernización de sus propias estructuras productivas e industriales.

Lo destacable de la actividad económica fue que el sector artesanal, algo que se acercaba a una especie de proto-industria, daba ocupación al 33,3 por ciento de la población económicamente activa, destacándose las hilanderías e hilanderos con el 39,4 por ciento, de 353.041 artesanos.

Las tejedoras concentraban al 31,5 por ciento y las costureras al 13,5 por ciento<sup>15</sup>.

El sector minero tenía alrededor de 12.000 asalariados junto a cerca de 200 propietarios. A esto deben añadirse 6.538 profesionales y 18.732 propietarios quienes vivían solamente de sus rentas. La tasa de escolaridad era muy baja, pues sobre una población en edad escolar de 204.475 niños, sólo estaban matriculados 23.558; es decir, apenas el 11,5 por ciento. A esta cifra se suman 2.347 estudiantes en el ciclo secundario y 743 en la universidad pública.

Paralelamente a la extracción de plata también se producía estaño, bismuto, cobre, bórax y, por supuesto, goma. Más tarde se incorporaron el wólfram y zinc; la minería continuaba siendo el sector más requerido desde la colonia, en tanto que la actividad agrícola siempre fue una economía al margen de la contabilidad republicana, lo cual no quiere decir que las haciendas tenían poco peso específico en la configuración económica o en el monopolio de enormes masas indígenas dominadas por una estructura de poder discriminatoria.

A comienzos del siglo XX, el ahorro interno era escaso, pues los depósitos bancarios solamente llegaban a la suma de 16 millones de bolivianos. Solamente existía un camino para obtener crédito: hipotecar bienes inmuebles o tierras. Las inversiones, con excepción de las realizadas en la empresa minera Huanchaca en la década de los años 70 del siglo XIX, se estancaron a comienzos del XX y, por lo tanto, las utilidades mineras fueron transferidas a la compra de tierras, bienes inmuebles y artículos suntuarios con la finalidad de proteger el capital y obtener diversos créditos. La estructura productiva boliviana seguía siendo estrecha en la primera parte del siglo XX, pues no había muchas opciones de inversión. Al mismo tiempo, se carecía casi completamente de una mentalidad de inversión y riesgo para capitalizar muchas empresas; la clase oligárquica que concentraba la riqueza siempre se quejaba de la falta de capital y trabajo. La mano de obra existente provenía de las comunidades siendo estacional y barata, además de presentar muchas barreras para su proletarización. A pesar de una mano de obra barata, los

costos de producción en la minería eran sumamente altos; aún así, el sector minero representaba el único rubro del que el aparato estatal podía obtener utilidades e intentar redistribuir la escasa riqueza en todo el país.

En los primeros diez años del siglo XX, la posición privilegiada del estaño era indiscutible en la escala de las exportaciones. Teniendo al ferrocarril y a minerales de alta ley como los provenientes de la Mina del Balcón en el departamento de Oruro, no había necesidad de concentrar el mineral. Similar situación ocurría en la mina de Patiño donde los concentrados del nuevo magnate tenían una ley del 20 por ciento. Así, Bolivia no tenía otra cosa que exportar los minerales, sobre todo hacia Europa, su principal mercado.

Haciendo un balance de los logros y fracasos en la gestión administrativa y en los cambios que se produjeron en la sociedad, podemos decir que durante los primeros treinta años del siglo XX, el país había conseguido instalar un ferrocarril con destino a los puertos del Pacífico; sin embargo, este ferrocarril no pudo integrar al conjunto de regiones geográficas, por lo cual se mantuvieron las desigualdades regionales, así como la incapacidad del Estado para establecer una sólida legitimidad. Se desarrollaron servicios en algunas ciudades, lo que equivalía a modernizar las urbes con una imitación de estilo europeo. Hubo crecimiento urbano, se establecieron caminos en una red de 1.500 kilómetros para coches y carretas; se tendieron 3.630 kilómetros de telégrafo, de los cuales 2.800 pertenecían al sector privado. En cuanto a la instalación de capitales, se puede afirmar que en Bolivia había cinco compañías inglesas, cuatro francesas y tres pacañas dedicadas a la extracción del oro; cuatro empresas tenían intereses en el cobre de Corocoro y dos centenas en el estaño y la plata<sup>16</sup>.

Pese a la existencia de adversidades como la pérdida de una salida al Pacífico, las oligarquías del estaño y de las haciendas estaban convencidas de que los, supuestamente, abundantes recursos naturales de diferentes regiones geográficas del país (muchas de las cuales eran inexploradas) habían de llevar a la República por el camino de la civilización y que, además, lo único que debía hacerse era poner *orden* con el objeto de que el capital extranjero llegue al país.

Asimismo, había una especie de euforia por la llegada del ferrocarril, abrigando la esperanza de que el estaño escalaría precios expectables llevando a Bolivia hacia una situación incomparable en relación con los demás países del continente. De esta manera, el proyecto liberal debía estimular las exportaciones, instalar servicios y adquirir todo lo necesario para satisfacer a la

población urbana. Sin embargo, el gran obstáculo fue que los liberales no pretendieron, para nada, brindar atención a las regiones o abrir la posibilidad de su desarrollo local. —

A su vez, los liberales de comienzos del siglo XX no comprendían —o entendían mal— la lógica del capitalismo, los ciclos económicos tendientes a las crisis que tenían lugar en la economía mundial, los problemas o exigencias que planteaba la industrialización y tampoco poseían una comprensión cabal sobre el papel que desempeñaba la formación de una bolsa de valores. La acumulación de riqueza era entendida como explotación única de estaño, manutención rígida de una fuerza de trabajo indígena como servidumbre, y la ostentación de modos de vida occidentales o patrones de consumo suntuarios que caracterizaban a las ambiciones de la clase alta.

El gran error del proyecto liberal de los primeros veinte años del siglo XX, fue observar muy poco la realidad interna, pensando que las influencias venidas del extranjero habrían de estimular a las fuerzas internas. Por lo tanto, la lógica económica y política estaba sometida a una suerte de inercia o falta de proyección futura a través de un *objetivo propio* y nacional. En gran medida, la mirada hacia el exterior que caracterizó a la oligarquía del siglo XX era un criterio imitativo y a-crítico en cuanto a la adopción de leyes, políticas públicas, corrientes literarias, tendencias ideológicas o giros idiomáticos.

La crisis y los años de depresión que marcaron profundamente la década de los años treinta, pusieron en vilo al proyecto liberal y a la economía del estaño. El exceso de confianza en los recursos mineros destapó una vulnerabilidad desde todo punto de vista local, regional y nacional. Sin embargo, la posterior y lenta recuperación de los precios internacionales del estaño borraron todo recuerdo de tal advertencia o, más bien, hizo que la oligarquía se convirtiera en una “élite intransigente”, pues al convivir con los problemas estructurales del país se negaba a reconocerlos para instaurar reformas estructurales.

¿Qué fue lo que no pudo resolverse hasta la entrada de una nueva crisis como la Guerra del Chaco? Primero, el latifundio improductivo y la servidumbre bajo la forma del pongueaje, la aguda pobreza indígena y la mala distribución del ingreso. La oligarquía no tenía interés en

superar las relaciones serviles. Todos los esfuerzos estaban volcados hacia la minería; sin embargo, en este sector los salarios también eran magros entre los trabajadores y, por lo tanto, la capacidad de consumo de las grandes mayorías del país era sumamente pequeña, lo cual daba lugar a un mercado interno pequeño y de poca importancia para dar un salto hacia un capitalismo real o para alcanzar una verdadera industria.

De esta manera, puede decirse que la población boliviana vivía, al mismo tiempo, al margen de la minería estañífera, a pesar de ella y sometida a la misma. Las regiones continuaron aisladas porque el Estado difícilmente podía controlar sus fronteras, existiendo grandes sectores de la población que desconocían su identidad nacional como bolivianos. A esto podemos sumar que dicho Estado gastaba más del 70 por ciento en una burocracia civil-militar, quedándole muy poco para atender sus requerimientos inmediatos como servicios, gastos sociales, deuda interna y otros. Inclusive no había adquirido la capacidad de construir su legitimidad manteniéndose a distancia del influjo de una serie de grupos de presión que intentaban dar golpes de Estado y sembrar el caos político. Por lo tanto, el Estado mantenía una debilidad institucional y política sin lograr un reconocimiento interno. Su poder centralista era utilizado para controlar las reivindicaciones regionales, someter a la población indígena pero no para evitar la fuga de capitales. Lo poco que quedaba de los réditos mineros controlados por los barones del estaño, se destinaba a los salarios del proletariado minero. Bolivia no había conseguido construir un Estado nacional, por el contrario, su dependencia se acentuaba y su crisis política amenazaba con terminar en una desintegración, quedando como única opción de control, el empleo de la fuerza para contrarrestar las asonadas golpistas.

Sin embargo, es importante citar a otros historiadores como Manuel E. Contreras C., para quien la economía minera hizo los mejores esfuerzos por modernizarse y escapar a la crisis política, las amenazas de la depresión internacional o los golpes de la Guerra del Chaco. La depresión de 1929 requirió de un cambio en la política monetaria y fiscal del país. Ya en 1931, después de que los británicos abandonaran el patrón oro, Bolivia también lo desestimó suspendiendo, además, el pago de su deuda externa. Por una parte, el Estado boliviano debía fijar la tasa de cambio y, por

otra, al no poder recurrir al crédito externo, debía encontrar la manera de solventar sus constantes déficits presupuestarios. Además, financiar la Guerra del Chaco fue un estímulo adicional para una mayor intervención del Estado en la economía<sup>18</sup>, lo cual acrecentó enormemente la desesperación de sectores políticos radicales para demandar un aparato burocrático de corte militar pues, se decía, había que enfrentar la guerra con dignidad, así como asumir posiciones de suma cero para imponerse en el orden interno.

La minería estañífera se perfilaba hacia un horizonte importante a pesar de todo y su comportamiento estuvo sujeto al escrutinio público. Aún cuando los grandes barones del estaño monopolizaban todo movimiento económico, oficialismo y oposición debatían públicamente las funciones estatales respecto de la economía, las orientaciones de la política estañífera y las ambiciones de ciertos grupos de presión nacionalistas que buscaban acceder a puestos de poder. En la década de los años treinta, Bolivia respondió a las nuevas tendencias de la demanda internacional con una imagen de Estado interventor en la economía. El desarrollo de la economía, además de descansar sobre el crecimiento de la industria del estaño, se amplió hacia el sector de pequeñas empresas industriales, estructurándose de tal manera que logró salir airoso de los problemas que trajeron la Gran Depresión y la Guerra del Chaco. A pesar de las visiones pesimistas y apocalípticas en la mayoría de los casos, a finales de 1930, el sector minero ingresaba en la década de los cuarenta con grandes posibilidades. Si bien había decaído la ley de los yacimientos, la mano de obra se había hecho mucho más cara y la situación impositiva era más exigente que a principios de siglo. La minería estañífera esperaba que, a través de un tipo de cambio adecuado pudiera mejorar su situación. Contrariamente a lo que algunos historiadores sostienen, Contreras afirma que se había llevado a cabo importantes inversiones en minería y, en la medida en que hubiera seguridades sobre el destino de las inversiones y la demanda internacional lo permitiera, existía la posibilidad de un nuevo despegue con fuerza, como luego lo demostró la influencia y demandas provenientes de la Segunda Guerra Mundial.<sup>19</sup> Si bien la Segunda Guerra Mundial alimentó una recuperación de la economía del estaño, Contreras no sopesa bien la turbulencia política que el país sufrió entre 1940 y 1951, pues la

descomposición del sistema político mantuvo en zozobra la ejecución de inversiones estratégicas, además de que los gobiernos desde Germán Busch hasta Gualberto Villarroel, se debatían entre el desconcierto y la búsqueda de un orden político sólido que nunca llegó. La crisis política en el ámbito interno, sistemáticamente terminó promoviendo acciones violentas como la única manera para imponer voluntades contradictorias de todo tipo.

Las acciones llevadas a cabo por los barones del estaño tampoco cambiaron en nada la disposición de estas condiciones, pues reorientaron su proyecto económico con la mirada puesta en el ámbito internacional. Además, como lo afirma precisamente el politólogo James M. Malloy, los ingredientes simbólicos de un supuesto Estado nacional moderno se contradecían con su dependencia del estaño y del mercado mundial. Paralelamente, Bolivia estaba fracturada en dos ámbitos sobre los que se estructuró el proyecto de modernización liberal: un *sistema nacional* contrapuesto a otro *sistema local*<sup>20</sup>.

El sistema nacional se afincaba en lo que llegó a constituir el Super Estado minero. Dicho sistema fue creando dos ejes que chocaban entre sí. Por una parte despuntaba el eje donde predominaba la industria estañífera que representaba, a su vez, a la tecnología de punta en aquella época con una organización urbana y una orientación internacional. “Durante la década de 1920 la propiedad se consolidó bajo el control de tres consorcios gigantes: Simón Patiño, Carlos Aramayo y Mauricio Hochschild, a quienes correspondía más del ochenta por ciento de la producción y, entre ellas, la empresa Patiño era de lejos la más grande. El veinte por ciento restante estaba en manos de una serie de compañías pequeñas y medianas cuyo funcionamiento utilizaba un limitado nivel de tecnología moderna. El elemento verdaderamente moderno de la industria estaba controlado por los Tres Grandes”<sup>21</sup>.

Por otra parte, y en oposición al sistema nacional del estaño, aparecía el eje o sistema local sustentado en un régimen feudal, atomizado en su organización y regional en su orientación. Esta estructura atomizada se distinguía por una sólida identificación regional y por la presencia de circuitos locales de mercado, factores que contribuyeron a reforzar con mayor rigidez el aislamiento entre las haciendas, así como entre éstas y las minas. Este sistema local

era, en el fondo, el sistema de desequilibrios regionales que después pasarían a ser los centros del debate político.

El resultado inmediato de esta estructura de poder apuntó hacia una dirección problemática: la industria estañífera boliviana afianzó sus lazos e intereses más fuertemente con el ámbito internacional –fruto de la demanda y las condiciones de mercado transnacionales– dejando de lado otro tipo de contacto con el resto del país o con las demandas regionales. Simultáneamente, el sistema nacional de los barones potentados, no sólo se diferenciaba del sistema local, sino que lo hacía a su costa, pues el retraso de éste se debió en gran medida al tipo de desarrollo del primero. El modelo de desarrollo, por lo tanto, era profundamente desigual; a esto se sumó, a finales de la década de los años treinta, el hecho de que las grandes minas se estaban agotando. “Las compañías no exploraron nuevas fuentes de mineral y la tasa de inversión en las plantas existentes disminuía. Para Bolivia el costo de producción se hizo muy alto y su posición competitiva fue deteriorándose rápidamente”<sup>22</sup>. El modelo liberal, su estructura de poder minero y su sociedad de castas habían llegado al límite de sus alternativas.

Lo que agravó mucho más esta situación de exclusiones permanentes, fue que el modelo económico solamente de carácter extractivo, estuvo demasiado supeditado a las crisis y fluctuaciones del capitalismo mundial, pues la bonanza económica, junto con los ensueños liberales a veces extremadamente ingenuos, mostró indicadores de estancamiento después de la debacle mundial de 1929, causando problemas en la estructura social boliviana donde, quienes habían logrado mayor estatus o mejores condiciones de ascenso social para asegurarse una posición, encontraban desde 1929 serios obstáculos recesivos y pocas opciones de cambio<sup>23</sup>. El país estaba totalmente a merced de su industria minera y, por lo tanto, quedó muy evidente que “en Bolivia *nunca hubo una modernización generalizada y tampoco se alcanzó base alguna para un desarrollo autosuficiente*. El resultado (...) fue un inmovilismo histórico y un país dividido que no era ni totalmente moderno ni totalmente tradicional, pero tampoco estaba pasando por un período de transición, pues no iba a ninguna parte. Estaba inmóvil, petrificado y

en franco retroceso. Estas contradicciones generaron presiones internas, las que, a su vez, condujeron a demandas de cambio cada vez más fuertes”<sup>24</sup>.

Las raíces del régimen liberal oligárquico, minero y terrateniente, confrontaban serios problemas agrupados en los siguientes núcleos críticos:

1. Incapacidad para promover la creación de un capitalismo de Estado que pueda desarrollar una burocracia estatal, encargada de la gestión de nuevos procesos productivos para diversificar la economía boliviana a fin de evitar los golpes del mercado mundial.
2. Incapacidad para redistribuir los beneficios económicos del modelo productivo, y para ordenar el conjunto de las relaciones sociales del país, caracterizadas por la inmovilidad social y la negativa para ampliar las bases de legitimidad del Estado y de sus élites.
3. Centralización del poder en un empresariado minero situado en el occidente del país, con altos niveles de productividad y altas tasas de ganancia, invertidas en su mayor parte fuera de Bolivia.
4. Incapacidad para promover la generación de una burguesía agrícola que modernice el área rural. Absoluto control terrateniente, explotación colonial indígena sin posibilidad de estimular procesos de transformación.
5. Estructura agraria con el predominio de la servidumbre para el señor feudal dueño de la tierra, y manifiesta incapacidad para liberar fuerza de trabajo que posibilite modernizar las haciendas.
6. Desde el punto de vista de la estructura social, el proletariado minero creció con la incorporación de un subproletariado semicampesino, sectores sociales donde la politización socialista comenzaba a radicalizarse. Esta radicalización fue fundamental cuando se gestaba la situación revolucionaria, sobre todo entre 1946 y 1952.
7. Deterioro del artesanado tradicional y emergencia de un subproletariado urbano, orientado hacia las pequeñas empresas familiares por cuenta propia, producción de servicios e inserción en el sector fabril.

8. La identidad nacional y el conjunto de tensiones entre el Estado y las regiones, se van configurando de acuerdo con exigencias que demandaban el reconocimiento de un *referente plural* que respete a las regiones. La forma de intervención del Estado en las sociedades regionales estaba condicionada por el centralismo que, hasta la Revolución del 52, seguirá presente como una pugna estratégica ligada a las características socio-espaciales de cada región.

En resumen, la estructura del poder oligárquico de 1900 a 1950 ya no podía responder a las necesidades nacionales respecto a quién o quiénes podrían ser los actores sociales con posibilidades de enfrentar los desafíos que planteaban los procesos de modernización de acuerdo con un nuevo sentido histórico. La modernización liberal no pudo construir un consenso político en torno a la estabilidad e institucionalidad. El régimen había llegado a una crisis del Estado y a la destrucción de toda una época cultural.

La formación de clases políticas y la búsqueda de una identidad político-ideológica para transformar la sociedad

La crisis política que estaba afectando a tres sectores de la sociedad: terratenientes, mineros e indios. De los cuales los dos primeros estuvieron comprometidos con los errores cometidos en las diferentes gestiones gubernamentales. La legitimidad del poder de los liberales se había puesto en duda por cómo manejaban el sistema electoral en el país –del 100% de población, sólo sufragaban el 1%, quedando al margen un 80 a 90% de analfabetos (indios), que no tenían el derecho al sufragio<sup>25</sup>— y cómo habían enfrentado la frustrada modernización económica. Desde comienzos de 1915 los sectores que habían estado involucrados con los negocios del magnate minero Simón I. Patiño, y que eran miembros del Partido Liberal, se vieron en la necesidad de organizar Convenciones Nacionales para contrarrestar la oposición de su disidencia, convertida ahora en Partido Republicano.

La ideología de los republicanos no era distinta a la de los liberales, pero sí contaban con una propuesta programática electoral diferente, como la recuperación del voto, la restitución de una abstracta dignidad nacional, la independencia de los poderes legislativo y judicial, la reducción de la deuda pública, la reducción del peso impositivo, y la lucha contra la corrupción.

Al mismo tiempo, debido a la expansión de las haciendas en la segunda década del Siglo XX, empezaron a organizarse grupos de sectores mestizos e indios que trataron de enfrentarse

contra la ocupación de sus territorios, produciéndose grandes conflictos y revueltas que más adelante desembocaron la formación de sindicatos.

En este período también surgieron partidos minoritarios quienes por primera vez discutían problemas sobre el conflicto de clases en Bolivia. Asimismo, llegaron influencias del marxismo latinoamericano que estimularían la formación de movimientos comunistas en América de Sur, recurriendo, sobre todo, al apoyo de fracciones universitarias.

Así surgió una clase media urbana que se formó alrededor de los antiguos artesanos y comerciantes de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro. Fue el crecimiento de las importaciones de manufactura lo que favoreció un desarrollo del comercio intermedio y pequeño afincado en la nueva “clase media” boliviana que debió su participación política gracias al apoyo del Partido Liberal; sin embargo, la clase media también demandaba mayor coherencia y renovación al liberalismo, expresando descontentos políticos.

No obstante, la sociedad republicana de la década del 20, sostiene Juan Albarracín, fue la prolongación horizontal de la sociedad liberal. Los partidos liberal y republicano que cubrieron la primera mitad del Siglo XX no habían fomentado la ruptura del sistema social boliviano en su base productiva minera y en su estructura política, sino que practicaban la persistencia del status quo, sobre todo para evitar una democratización plena de la estructural social liberando al indio de la dominación hacendística<sup>26</sup>.

Para Albarracín, la época republicana vivió una sociedad convulsionada por las desiguales relaciones entre la minería nacional y la internacional, además de un crecimiento perverso de la dependencia que el Estado boliviano tenía respecto de la voluntad política de los grandes mineros del estaño. Los gobiernos republicanos que administraron la nación durante tres décadas en precarias situaciones financieras y políticas, fueron regímenes institucionalmente inestables que tuvieron que acudir al uso de la violencia legítima e ilegítima. Aparentemente, afirma Albarracín: “los republicanos representaban a los intereses de la oligarquía rural y también de los mineros bolivianos. En realidad, los partidos republicanos no eran estrictamente mineros ni terratenientes, sino políticos vinculados a ellos”<sup>27</sup>.

Esta “clase política” que intermediaba al país con los mineros, terratenientes y comerciantes ocasionó una fragilidad política y gubernamental que condujo el destino de la nación por caminos totalmente inciertos. La burocracia republicana, bajo las modalidades políticas en las que se organizó el país, subsistió con el 3% de los derechos de exportación que pagaban las empresas mineras para su sustento. Una base económica ínfima que hacía imposible cualquier política específica en materia de desarrollo y modernización.

Formalmente, la elección de presidentes constituía el único instrumento para asegurar la legalidad republicana; sin embargo, todos los presidentes eran elegidos en eventos electorales donde “el constitucionalismo republicano no era limpio, sino sujeto a la visa minera (...) que organizaba el gobierno usando procedimientos electorales poco transparentes”<sup>28</sup>. En realidad, los procesos electorales en los primeros 50 años de la historia de Bolivia no pueden ser considerados como eventos democráticos, sino solamente como prácticas políticas que trataban de organizar una nación sobre la base de una minoría letrada y en medio de mucha incertidumbre sobre los fundamentos económicos y políticos para consolidar al país.

Las elecciones entre 1920 y 1950, dieron lugar a los gobiernos republicanos integrados por una “clase política” al servicio de la minería, capaces de aglutinar dentro de la burocracia al funcionarismo, comerciantes, religiosos, militares, artesanos, etc. a través de procesos de estratificación alrededor de negocios con el Estado. El tráfico de puestos públicos, manejo de influencias y el establecimiento de una partidocracia temerosa de cambiar el orden de cosas, en el fondo, no logró superar los problemas más profundos del país.

Si bien la vida política del país se hizo mucho más compleja, los conflictos entre los sectores sociales dominantes y aquellos dominados, se multiplicaron. Dentro de los sectores medios, uno de los grupos que más se destacó por su intensa participación en la vida política de esos años fue el estudiantil universitario. Su movilización empezó a tomar cuerpo, especialmente en la segunda mitad de la década de los años veinte. Sin embargo, una vez que los universitarios tomaron conciencia de lo que significaba la débil administración gubernamental, el movimiento estudiantil empezó a manifestar una posición altamente radical en la cual se condenaba la

política intervencionista de la hegemonía norteamericana en el ámbito internacional, expresando una mezcla de ideologías altamente beligerantes con propuestas marxistas de transformación social en el ámbito interno boliviano.

En el centro del movimiento estudiantil se encontraron representadas tendencias políticas que iban desde la posición liberal hasta posturas comunistas. La tendencia liberal estuvo representada, en esos años, por la Federación de Estudiantes de Sucre. En La Paz coexistía una actitud nacionalista que en un principio no estaba muy diferenciada de las posiciones del sistema tradicional boliviano. Así fue surgiendo el nacionalismo como reacción ideológica frente a las influencias externas, organizado alrededor de tendencias indigenistas y socialistas antisistema. En Cochabamba, la actuación estudiantil estuvo, de principio más definida, además de que sus miembros se organizaron alrededor de un núcleo marxista, entre los que figuraban Ricardo Anaya, Arturo Urquidi, José Quiroga y José Antonio Arze.

Para 1928, en Bolivia se gestó el movimiento de reforma universitaria, diez años después del movimiento en la Argentina. El primer Congreso de la Federación Universitaria Boliviana (FUB) se realizó en 1928 en Cochabamba. El movimiento estudiantil se caracterizó por ser radical. Los estudiantes proclamaron una efectiva alianza entre proletarios manuales e intelectuales, crearon comités obreros y estudiantiles de solidaridad, apoyaron la emancipación del indio, la gremialización de maestros y la institucionalización de universidades populares. En realidad, los estudiantes pensaban que la universidad debía ser la antena más sensible a las causas renovadoras. Por otro lado, la FUB condenaba las campañas políticas partidistas, oponiéndose a la política caudillista. En cuanto a la modernización de la estructura económica y financiera en Bolivia, los universitarios proponían socializar la propiedad privada, nacionalizar las minas y el petróleo, el fraccionamiento obligatorio del latifundio y la dotación de tierras a los indios, el fomento de la industria suprimiendo monopolios, la reglamentación completa del trabajo, y una estatización progresiva de las fuentes de riqueza.

Para la década de los 30, el conflicto político se orientó hacia la discusión sobre cómo resolver el problema del indio utilizando el recurso de la reforma agraria. En cuanto a la gestión

constitucional y legislativa, los universitarios exigían separar la Iglesia del Estado, el funcionamiento de un parlamento gremial que limite el absolutismo del poder ejecutivo, la autonomía del poder judicial, además de la autonomía del poder universitario. Así, el movimiento estudiantil al radicalizarse en su conjunto, jugó un rol político importante de oposición total al status quo. Es importante destacar que en el seno del movimiento estudiantil participarían los futuros dirigentes socialistas, marxistas y nacionalistas de la izquierda boliviana que habrían de actuar intensamente a partir de la década de los 40 y durante la Revolución Nacional.

La universidad boliviana y el movimiento socialista embrionario, levantaron consignas destinadas a crear una conciencia colectiva para la lucha contra la servidumbre indígena, la unión de proletarios e intelectuales, la lucha contra el imperialismo y la quiebra definitiva de todo el sistema creado por los liberales, sobre todo a través de un instrumento que después pasó a ser la principal medida de cualquier movilización: la violencia.

El movimiento socialista embrionario y la aparición de una nueva corriente ideológica llegaron a Bolivia basándose en corrientes europeas como el anarquismo y el marxismo, ideologías que calaron muy profundo en algunas élites intelectuales bolivianas, alcanzando influencia política y social en diferentes organizaciones de artesanos y en la conformación de partidos políticos modernos, sobre todo porque ansiosamente buscaban alternativas para salir del modelo liberal. Las corrientes como el anarquismo, socialismo y comunismo, incidieron en la vida política y social boliviana, convirtiéndose en pensamiento radical y a la vez utópico de la época liberal.

Las distintas corrientes ideológicas al interior del movimiento estudiantil ayudaron bastante para la formulación de actitudes nacionalistas radicales, elaboradas por intelectuales con formación universitaria, quienes después conformarían el núcleo central del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), a través de una mezcla entre activismo violento, radicalización de trabajadores mineros y el empuje de una propuesta ideológica: la “alianza de clases” que, después, súbitamente articuló todas las acciones de protesta para romper con el sistema. El hecho de interpelar a los sectores descontentos de la élite intelectual, los trabajadores mineros y las masas indígenas mediante la alianza de clases, posibilitó el embrión político que desembocaría en la Revolución de 1952; obviamente luego de que el terreno estuviera abonado por el fracaso de las élites gobernantes y el desplome de un sueño modernizador cuyas raíces se pudrieron dentro del proyecto liberal.

### **La Crisis del Estado, las reivindicaciones regionales y la situación revolucionaria**

Esta sección desarrollará las explicaciones a partir de lo que se denomina los “aceleradores” de la situación revolucionaria, haciendo un diagnóstico sobre la crisis del Estado

oligárquico y el nacimiento de una nueva política de masas que asumió a la violencia como el método político para abrir una nueva brecha histórica.

El viejo orden político, social y cultural no tardó en ser precipitado al fango con un nuevo error de la oligarquía: la Guerra del Chaco contra el Paraguay. Teóricamente, la guerra fue considerada como una buena apuesta, porque ¿qué resistencia podía ofrecer un país pequeño y atrasado como el Paraguay frente a Bolivia, país relativamente industrializado, predilección del capitalismo mundial por sus materias primas mineras, y cuyo ejército fue entrenado por altos oficiales alemanes? Cuando se constató que Paraguay podía vencer al país, como ocurrió realmente, la humillación sufrida por las clases medias, sectores intelectuales y militantes radicales comunistas, inició un proceso histórico para disputar con rigor el poder del Estado, destituir a la oligarquía y aplastar al ejército.

La Guerra del Chaco marcará los siguientes veinte años después de 1935, porque muestra el fracaso de un grupo de intelectuales y políticos que creían viable una salida del país hacia el mar Atlántico. Durante las décadas de los años veinte y treinta, Paraguay consideraba posible encontrar petróleo en las arenas del Chaco boliviano; era un país pobre, sin mucha riqueza en recursos naturales, sin salida al mar como Bolivia, viendo la alternativa de alcanzar el desarrollo y éxito económico conquistando el Chaco a través de acciones expansionistas.

A esto también debe agregarse que la celebración de los tratados de Lima en 1929, donde Chile y Perú destruyeron las aspiraciones bolivianas para tener acceso al Pacífico, motivaron que algunos políticos nacionales propongan orientar todos los esfuerzos rumbo al Atlántico. Si los tratados de Tacna y Arica pusieron un cerrojo diplomático al país, cancelando una puerta en el Pacífico, hombres como Daniel Salamanca afirmaron con profunda convicción que el éxito boliviano radicaba en la conquista de territorios, abriendo senda hacia el río Paraguay. Bolivia ocuparía un supuesto país pobre y llegaría a una nueva ventana marítima. Tal abstracción teórica desató una guerra en medio de incertidumbres y ruinas militares permanentes. Los perdedores aparecieron en ambos bandos. Paraguay no encontró los yacimientos de petróleo y Bolivia no pudo imponerse frente a un enemigo que resultó ser más fuerte; por lo tanto, la política exterior

de la oligarquía minero-feudal se había deslizado por el precipicio de mitos y creencias sin subsistencia.

Durante la guerra, el presidente Daniel Salamanca se vio obligado a iniciar un proceso dinámico de movilización de masas, sobre todo campesinas, con el propósito de enfrentar a las necesidades militares. De esta manera, la movilización de tropas se convirtió en una cruzada nacionalista. Este intento por sublimar los sacrificios que demandaba una guerra, fomentó el fervor patriótico y el chauvinismo. Para muchos historiadores, como Roberto Querejazu Calvo o René Arze Aguirre, la Guerra del Chaco fue la primera guerra nacional boliviana y el primer esfuerzo verdaderamente abarcador de todo el país. El nacionalismo extremista germinó con mayor fuerza entre los intelectuales y profesionales de clase media que se habían convertido en críticos del régimen oligárquico cuya imposibilidad de brindar alternativas dinamizadoras a la economía y al Estado, aceleró un sentimiento de frustración con la guerra.<sup>29</sup>

Los profesionales y militares de clase media descubrieron a los otros pedazos del país en las masas indígenas y en la soledad de los campos de batalla donde la enorme mayoría de soldados rasos no sabían por qué ni para qué estaban allí. Por lo tanto, las concepciones integracionistas y el nacionalismo exaltado se transformaron en banderas de una nueva generación de intelectuales y militares de rango medio que habrían de llegar a disputar el poder después de derrocar al presidente Salamanca.

La Guerra del Chaco puede ser considerada solamente como un *acelerador* de la situación revolucionaria a partir 1936, en la medida en que el propio Estado boliviano había demostrado, mucho más antes del conflicto bélico, los indicadores de descomposición. La depresión de 1929 marcó una llaga difícil de sanar ocasionando una baja del 60 por ciento en los precios del estaño, reduciendo las exportaciones en un 70 por ciento para 1933. En realidad, el período que va de 1929 a 1933 presentó los indicadores más desastrosos para el modelo liberal del estaño, pues las exportaciones bolivianas disminuyeron de 47.087 a 14.957 toneladas; los precios de los artículos domésticos experimentaron un alza, los salarios de los empleados públicos se contrajeron y creció el desempleo; la deuda pública se hizo ingobernable y en julio

de 1931 el país tuvo que declararse en mora, ingresando en la lista internacional como una nación financieramente no confiable.<sup>30</sup>— La crisis del Estado oligárquico ya no podía responder, ni a las demandas políticas internas de un país desarticulado y acosado por los desequilibrios regionales, ni tampoco acomodarse a las nuevas reglas del juego internacional.

El estancamiento de las exportaciones mineras, de la agricultura y de la incipiente industria durante la década de los años 40 tenía un hilo conductor común: la falta de capitales de inversión. “El capital, sin embargo, sólo puede ser invertido en una economía donde el trabajo, la tierra y hasta el dinero mismo pueden ser comprados y vendidos en mercados donde la oferta de bienes y servicios, a un determinado precio, es igual a la demanda, a dicho precio”<sup>31</sup>—. El país no estaba en condiciones de modernizarse para atraer la inversión de capitales y, de pronto, toda estrategia política terminaba aplacada por una insistente sentencia: la destrucción del orden oligárquico terrateniente y feudal.

En 1942, un intento de solución a la crisis económica fue la formulación del *Plan Bohan*, elaborado por una misión norteamericana cuyo objetivo fue proponer un programa de desarrollo económico consistente en abrir la zona de Santa Cruz para producir azúcar, arroz, carne, algodón, etc., con el propósito de sustituir las importaciones de estos productos. La creación de este nuevo polo de acumulación, recién tuvo lugar con la Revolución de abril, pues el Plan Bohan fue truncado en su ejecución por la profunda crisis de Estado que asfixió al país a partir de 1945.

El desastre del Chaco desencadenó el nacimiento de nuevas concepciones polarizantes, entre las que destacaban los planteamientos revolucionarios comunistas y el nacionalismo, a través de un Estado totalizador. De esta manera, el nacionalismo boliviano encontró eco en sectores del ejército descontentos con la oligarquía, provocando, además, un antiliberalismo extremista. Al libre mercado se opuso el sueño de la planificación; a las libertades individuales, la organización corporativa; a las demandas descentralizadoras y exigencias regionales que persistían después de la guerra del Chaco, se opuso el Estado fuertemente centralizado.

Frente a la crisis económica, la oligarquía estañífera optó por negociar intercambios desiguales con el mercado internacional, cediendo ante la presión norteamericana, y manteniendo un Estado gendarme afincado en el occidente del país. Las visiones extremistas postularon recuperar el poder del Estado para los bolivianos con un fuerte énfasis centralista y un nuevo ingrediente: que sea capaz de abarcar e integrar a todo el país. Si bien el centralismo no era algo nuevo dentro del debate político, sí lo fueron las tesis nacionalistas que presionaban para entronizar un Estado autoritario.

Tal como lo afirma el historiador James Dunkerley, “la época de la posguerra fue testigo de una explosión de sentimiento popular, aquel que es tan inherente a las crisis políticas (...). En este caso se trataba de un sentimiento muy específicamente determinado de traición, sufrimiento compartido, visión maniqueísta de cobardía y heroísmo, división generacional y desplazamiento ideológico mezclados por el trauma colectivo de la derrota en el Chaco. Estos elementos (...) se combinaron para erosionar la hegemonía liberal y su sentido más amplio del orden de cosas, construyendo la matriz dentro de la cual cobraron forma las nuevas ideas políticas nacionalistas radicales”<sup>32</sup>.

Estos son los antecedentes que se levantan como telón de fondo para desatar la revolución que destruyó las viejas estructuras de poder. Por lo tanto, la legitimidad política del Estado liberal y del gobierno oligárquico quedó completamente debilitada a partir de 1946. Sin embargo, como se verá más adelante, la Revolución Nacional no pudo articular inmediatamente un nuevo poder estatal, pues éste se vio rebasado por una serie de caudillos y caciques, cuya personalidad se impuso, en gran medida, con mayor preponderancia sobre la recomposición de un nuevo orden cultural, económico y político.

La crisis del Estado que enfrentó la oligarquía tuvo un rasgo distintivo fundamental: un sistema político cuya legitimación radicaba en la ausencia de participación y en el inmovilismo económico. Las razones que alentaron esta actitud radical en las élites gobernantes, descansaban en una definitiva falta de crecimiento económico que pudiera democratizar la distribución de la riqueza minera y en un manifiesto rechazo para incorporar a la población dentro de una

comunidad Nación-Estado. Teóricamente, el Estado era soberano en todo el país pero el verdadero control estatal terminaba generalmente al interior de los límites urbanos. En consecuencia, uno de los prerrequisitos para la relativa estabilidad política del sistema fue la pasividad y marginalidad de gran parte de la población no ciudadana, en la medida en que se descartó por completo el concepto de ciudadanía imperante en las democracias occidentales de Europa o Norteamérica, el cual exigía amplias bases sociales de legitimación del Estado y una participación política con derechos plenos.

En el caso boliviano, las élites que habían surgido a comienzos del siglo XX, mostraban una continuidad lineal y sumamente drástica entre riqueza, raza, poder político y participación. Dichas élites se conectaban con lo que vino a denominarse el sistema nacional, construido sobre la base del sistema estañífero y sustentado en la aquiescencia de los Tres Grandes barones del estaño. Las decadentes élites que organizaron su poder en torno al control terrateniente, habían sido arrinconadas hacia el sistema local, de raíz feudal y colonialista.

En este sentido, el sistema político no reconoció otra forma de legitimidad que proseguir con el *método censitario* para la acción y participación políticas; es decir, la base ciudadana solamente tomaba en cuenta a los varones que sabían leer, escribir y poseían cierto linaje, propiedades como tierras o importantes puestos administrativo-burocráticos dentro del Estado, alcanzando a mostrar ante la sociedad un monto determinado de renta. Este modelo censitario descartaba la acumulación de rentas provenientes de ser empleado/a doméstico/a.

El Estado así concebido, tendió a confundirse con el sistema nacional y fue progresivamente sometido a una pugna de facciones entre las élites ligadas al mundo terrateniente, aquellas relacionadas con la minería del estaño y otras comunicadas con los partidos políticos liberales, republicanos y conservadores de comienzos de siglo. Esta estructura social estuvo compuesta por un grupo amalgamado con intereses estañíferos, donde la antigua oligarquía del sur estaba siendo desplazada por un grupo originado en la clase profesional y administrativa urbana. El ejemplo más notable de esa nueva dinámica fue Simón I. Patiño, un mestizo pobre y despreciado que creó el imperio estañífero más poderoso del mundo.

La consolidación de los Tres Grandes barones del estaño dio lugar al surgimiento de una presión de intereses privados y corporativos para definir el rumbo que debía tener la política y la orientación del Estado boliviano. Aunque no puede decirse que los Tres Grandes impusieron, desde un comienzo, sus aspiraciones sobre un Estado marioneta, su poder determinó el rumbo de una serie de decisiones que ya no podían responder a otro tipo de demandas sociales, pues todo estaba restringido a los intereses económicos de una minoría, desconocida y ajena para los indígenas de hacienda, así como para las regiones que no eran funcionales al proyecto económico del eje minero.

La exclusión sistemática generada por el propio Estado, la crisis de legitimidad que enfrentaba el sistema político y la lucha de facciones entre la élite gobernante para acceder a puestos importantes o para generar su propia riqueza a costa del Estado sobre la base del patronazgo o el clientelismo político, fue muy bien aprovechada por la injerencia empresarial de Patiño, Aramayo y Hochschild. Esta nueva élite representaba un auténtico grupo de intereses moderno que buscaba su vinculación estratégica con el mercado mundial del estaño, sin atender mucho a su necesidad de participar directa o indirectamente en el manejo del aparato estatal<sup>33</sup>.

Asimismo, muchos profesionales jóvenes, sobre todo abogados e ingenieros mineros, comenzaron a conformar un estamento funcional ligado a la nueva élite minera, por lo que surgió una sub-élite que fue logrando ascender en la escala social en la medida en que defendía los intereses privados del sector minero de los Superbarones. Otros, en cambio, querían conquistar puestos burocráticos en la administración pública que cumpliesen un papel efectivo para satisfacer al poder económico de los magnates del estaño.

Consolidado el poder económico de las empresas privadas pertenecientes a Patiño, Hochschild y Aramayo, importaba muy poco cualquier debate ideológico sobre la modernización del país, la ampliación democrática de la ciudadanía política o la liberación mercantil de fuerza trabajo indígena en las haciendas. El Estado perdía pertinencia, a medida que el sistema económico adoptaba una forma definida: vocación exportadora, monoprodutora y articuladora de un espacio geográfico exclusivamente occidental, con una cabeza política en La Paz. Los

barones del estaño fijaron el control definitivo, tanto de la riqueza como de su posición social, creándose con ello un problema de circulación y ascenso de nuevas élites, tanto horizontal como verticalmente.

A comienzos de la década de los años treinta surgió un factor de importante trascendencia para que los barones del estaño influencien más decididamente en el aparato del Estado anquilosado, porque en 1930 fue firmado un acuerdo mundial entre todos los países productores de estaño, asignándose a cada país una cuota de producción, y a los distintos gobiernos el poder de distribuirla al interior de sus respectivos territorios. Con esto, el gobierno boliviano asumía mucho poder y responsabilidad para el control de los asuntos internos del empresariado estañífero. En este momento, fue entonces cuando se inició una abierta y estrecha vinculación de los magnates del estaño con el gobierno. Sin embargo, esta presión fue solamente para cumplir un objetivo estrictamente empresarial, orientando todo tipo de decisiones en materia de política económica hacia la maximización de ganancias productivas. No interesó para nada la modernización del Estado ni su apertura democrática o su mejoramiento institucional.

En consecuencia, el sistema político no tuvo ninguna alternativa de crecer fuera de la lógica extractiva y económica del estaño, o más allá de la política señorial de exclusiones sistemáticas. La torta económica también dejó de expandirse pues era privilegio de los barones del estaño y del sector de mineros medianos y pequeños relacionados con las grandes empresas. Los elementos del poder económico –la propiedad de tierras y minas sobre todo–, tendían a permanecer invariablemente en pocas manos, lo cual acumuló conflictos, no solamente para quienes aspiraban a ascender (clase media profesional y pequeños propietarios fuera del sistema minero), sino también para grupos superiores; es decir, para facciones de la misma élite gobernante que no podían generar una base autónoma de riqueza sino era colonizando el Estado y siendo funcionarios de la burguesía estañífera. La base económica mostró rasgos estáticos y el mapa político no permitía ninguna circulación democrática de élites.

El Estado había perdido su esencia nuclear, ser el regulador de las relaciones sociales y estructurador de una legitimidad que se extienda por todo el límite geográfico que tiene un país.

Su acción se reducía a sentar soberanía dentro de los márgenes del sistema nacional: la esfera de influencia del empresariado minero. Esto ahondó también la desazón del sistema local de las haciendas, cuyas aspiraciones regionales vieron con rencor su exclusión del debate político y de la toma de decisiones históricas. Todo era, desde aquel momento, facultad y atribución del modelo productivo minero.

Desde la perspectiva regional y de los micro-poderes municipales, la crisis del Estado tuvo especiales connotaciones. El cambio más significativo entre 1936 y 1937, “(...) consistió en introducir la figura de un alcalde rentado, electo por mayoría absoluta de votos por un Colegio Electoral designado por dos años por el Departamento Consultivo del Municipio en cuestión (...) los alcaldes se tornaban así en figuras centrales de la nueva Municipalidad, ya que se hallaban encargados de todas las funciones que correspondían a los antiguos Consejos y Juntas Municipales”<sup>34</sup>. Es a través de estas acciones compensatorias que las élites regionales intentaron poner un dique de contención frente a la destrucción del Estado nacional oligárquico, cuya descomposición fue aminorada por los municipios con mayor capacidad administrativa al interior de las ciudades que iban creciendo y complejizándose. Al mismo tiempo, dichos municipios pretendían rearticular las demandas regionales de todos los departamentos y de las áreas rurales, generando una lógica política más circunscrita a los intereses de la ciudad o la región, antes que su sometimiento automático al sistema nacional donde las decisiones ya estaban tomadas y cerradas.

Luego de la Guerra del Chaco, el presidente Germán Busch, quien asumió la presidencia entre el 17 de julio de 1937 hasta el 23 de agosto de 1939, convocó a una Convención Nacional en 1938 con el objetivo de sancionar una nueva Constitución Política y dar otra orientación jurídica al funcionamiento del Estado. En dicha Convención se cambiaron los basamentos liberales de la vieja Constitución de 1880, introduciéndose el concepto de responsabilidad social del Estado, de tal suerte que, de ser considerado un mero gendarme liberal, éste fue elevado al grado de protector y regulador de la sociedad civil, así como de la economía nacional. Uno de los resultados inmediatos de esta medida fue marginar, de hecho, toda demanda regional específica,

negándose cualquier forma de descentralización por considerársela como atentatoria a la integridad nacional. Asimismo, se mantuvo, como fue la práctica desde los años 20, la elección de un alcalde nombrado directamente por el presidente de la República.

Al comenzar la tumultuosa década de los años 40, los intereses nacionales debían ser la prioridad por encima, inclusive, de la viabilidad de una democracia de corte directo como eran las demandas locales del municipio. El nacionalismo integrador que fomentó la defensa de un Estado centralista, condenaba también al asambleísmo inútil que podía florecer en la democracia municipal, descartándose la posibilidad de politizar a las regiones. Empero, el poder municipal sobrevivió hasta 1942, época en la que éste definió claramente su organización central: por un lado, presentaba un ámbito ejecutivo, rentado y nombrado por el presidente; por otro, existía un nivel legislativo y fiscalizador expresado en la Asamblea del Concejo Deliberante, nombrada por voto popular y con un trabajo ad honorem.

La crisis del Estado oligárquico entró en una fase de transición e incertidumbre, perfilándose, sin embargo, hacia un Estado autoritativo en sus funciones para hacerse cargo de toda la sociedad como una comunidad cohesionada. Al tratar de encontrar una salida a la crisis del Estado, durante la década de los 40 se intentó doblegar al poder regional, municipalista y descentralista. Pero el municipio pervivió como una alternativa local para hacer frente a la crisis nacional, peleando por plantar su propia identidad y mejorando su estructura burocrática a través de la instauración de ámbitos ejecutivos y legislativos muy similares a los del Estado central. Así, la nueva fisonomía del Estado boliviano durante la postguerra, trató de conjugar el principio de soberanía popular –buscando recuperar legitimidad con los gobiernos militares autonombrados como socialismos o nacionalismos de Estado, desde David Toro y Germán Busch, hasta Gualberto Villarroel– con el principio de eficiencia administrativa en las municipalidades.

La Convención Nacional de 1945 llevada a cabo por el presidente Villarroel reintrodujo el debate de los municipios y el poder de las regiones. Se mantuvo la división entre ejecutivo y legislativo para hacer eficaces las tareas de toda Alcaldía; una vez más el alcalde era elegido por

el presidente pero de una terna presentada por el Concejo Deliberante elegido por voto popular. Después del derrocamiento de Villarroel en 1946, el país había ingresado en una fase de guerra civil, sobre todo debido a la efervescencia revolucionaria nunca antes vista en las minas. La violencia, el concepto y la práctica de la revolución en esta época, denominada el sexenio –1946 a 1952– se convirtieron en algo que debía definirse mediante el poder, la destrucción del Estado y el empleo, con mayor frecuencia, de la fuerza. Durante el sexenio, la oligarquía intentó apaciguar los enfrentamientos y estallidos revolucionarios volcando la mirada hacia los poderes locales, pues el Estado como institución nacional estaba en constante deslegitimación y acoso por parte de partidos políticos radicales como el Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); de esta manera, el presidente Enrique Hertzog (1947-1949) sancionó otra modificación constitucional donde respetaba la división entre ámbitos legislativo y ejecutivo para los municipios y donde el poder municipal solamente podía descansar en los electores. El Consejo y las Juntas Municipales debían ser elegidos por voto directo para una gestión de dos años y, a su vez, elegir al Alcalde como máxima autoridad local que se extendía virtualmente hacia toda la región.

Las reformas electorales de Hertzog pronto cambiaron de rumbo, pues cuando se trataba del poder central, la manipulación del voto y la presión de la oligarquía para no incorporar a nuevas fuerzas sociales fueron una marca que iba a extenderse hasta las elecciones presidenciales de 1951, año en que el MNR obtuvo la primera mayoría relativa. El régimen oligárquico anuló aquel proceso electoral, reavivando el descontento local, regional y nacional hacia un sistema político de exclusiones políticas, desatándose la insurrección del 9 de abril de 1952.

El inacabado proceso de unificación de las nociones de República, Estado, Nación, Región y Pueblo, que entraron en una profunda crisis durante los primeros treinta años del siglo XX, chocaron permanentemente con la mentalidad restringida y excluyente de una oligarquía, que si bien logró mantenerse en el poder hasta 1951, estuvo asediada por la inestabilidad política, pues ésta fue la revelación de ausencias hegemónicas e incapacidades de liderazgo orgánico de las fuerzas sociales que, si en unos casos no acabaron de morir con la llegada de la Revolución

Nacional, en otros casos tampoco terminaron de nacer como tales, en la medida que el poder del Estado quedó atrapado en una disyuntiva: reconocer a los poderes locales y regionales como la materia prima para refundar la República, u homogeneizar todo desde la acción del Estado-Nación abarcador.

La Revolución de abril dio una respuesta radical instalando un poder central y enalteciendo el mito del Estado totalizador como el marco de control para una nueva etapa histórica. En Bolivia, el poder regional siempre fue inestable, pues durante los primeros cincuenta años del siglo XX, las diferentes sociedades regionales no lograron afianzar su hegemonía, pues cuando parecía lograrse una democratización entre poder estatal y regional, éste fue transitorio, dejando amplios márgenes para un redespiegue autoritario que buscaba imponerse desde el Estado.

### **La Revolución Nacional y las fases del nuevo Estado**

La Revolución Nacional boliviana que tuvo lugar entre el 9 y 11 de abril de 1952, puede ser conceptualizada como una situación de guerra interna, “(...) cuyas consecuencias son: a) redistribución de la capacidad de influencia de los grupos en los mecanismos autoritarios de una sociedad; b) exclusión de todo acceso futuro al poder para aquellos grupos que previamente gozaban de un alto grado de autoridad; c) redefinición de los conceptos y principios de autoridad de la sociedad; y d) redefinición de las metas que generalmente persigue la autoridad gubernamental”<sup>35</sup>.

La crisis del Estado oligárquico desembocó en una situación ingobernable donde la tradicional élite del poder no podía resolver su crisis de legitimidad mediante los valores y modelos ideológicos imperantes durante el régimen liberal que había nacido a principios del siglo XX. Por esto mismo, existía una profunda crisis ideológica de los grupos de poder mineros y terratenientes, los cuales no planteaban alternativas viables de cambio social o económico. En consecuencia, dicha crisis ideológica se convirtió en una crisis de autoridad entre 1936 y 1950, ya que las grandes masas se habían desprendido definitivamente de las ideologías tradicionales.

La vieja élite en el poder se transformó en una élite intransigente que buscaba aliviar cualquier crisis política a través de la violencia. Las bases sociales del régimen se negaron a reconocer la autoridad de los sucesivos gobiernos oligárquicos de José Luis Tejada Sorzano (1934-1936), Carlos Quintanilla (1939-1940), Enrique Peñaranda (1940-1943), Tomás Monje Gutiérrez (1946-1947), Enrique Hertzog (1947-1949), Mamerto Urriolagoitia (1949-1951) y Hugo Ballivián (1951-1952). Un interregno de gobiernos reformistas bajo el mando de las logias militares que conformaron el grupo de interés Razón de Patria (RADEPA), nacido después de la Guerra del Chaco, fueron los regímenes de David Toro (1936-1937), Germán Busch (1937-1939) y Gualberto Villarroel (1943-1946), quienes tampoco mejoraron la insuficiencia hegemónica de los liderazgos presidenciales. Esta ausencia de alternativas factibles de gobierno condujo a una irremediable incapacidad para construir un orden político.

Por otra parte, la Revolución de abril estalló en momentos donde era muy débil la mediación entre el Estado y la sociedad civil, de tal manera que los grupos radicalizados, comunistas y nacionalistas, organizados en las principales ciudades de Bolivia como La Paz y Cochabamba, comenzaron a enardecerse para asediar directamente al poder estatal, hecho que alcanzó su clímax con la movilización armada de mineros, fabriles, universitarios, artesanos y clase media. Los enfrentamientos del 9 al 11 de abril vencieron al ejército y la policía, capturándose armamento y declarándose rápidamente el poder popular cuya expresión más viva fueron las milicias obreras, que después se extendieron hacia la conformación de milicias campesinas, constituyéndose lo que bien denominó el historiador James Dunkerley, como una verdadera rebelión desde las venas más profundas de la sociedad boliviana.

La movilización de masas bajo el comando del MNR y de los mineros que habían fundado la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), organización obrera con una formación política definida y sumamente compacta, impulsaron la necesidad de reorganizar el Estado, en función de *utilizarlo* para fomentar el desarrollo económico, distribuir democráticamente la riqueza, democratizar la participación política y liberar al campesinado de la explotación feudal, en medio de un comportamiento revolucionario que exigía, de inmediato,

la nacionalización de las minas y la reforma agraria como las metas que instaurarían una nueva época.

Al analizarse los antecedentes políticos de la Revolución Nacional, siempre surge la pregunta en torno a ¿por qué fue el MNR el partido hegemónico durante y después de la insurrección? ¿Dónde quedaron los objetivos e iniciativas radicales marxistas que apuntaban hacia una revolución más extremista en busca del comunismo? Al respecto, es importante anotar que fue el MNR quien toma la iniciativa de crear la FSTMB en junio de 1944, pues en aquel momento era un socio menor durante el gobierno del presidente Gualberto Villarroel. Aun a pesar de que el patrocinio del partido entre 1944 y 1950 no alcanzó una fase crucial echando raíces profundas en el movimiento obrero, el MNR se valió de éste para sustentar una nueva base de legitimidad en el primer gobierno revolucionario de Víctor Paz Estenssoro (1952-1956), éste aceptó incorporar a cuatro ministros, como cuota de representación obrera al interior de su gabinete, y se cobijó detrás del respaldo dado por las milicias obreras para frenar las tendencias derechistas del propio MNR que se negaban a ejecutar las reformas estructurales como nacionalizar las minas y dar paso a la reforma agraria<sup>36</sup>.

El MNR fue acumulando capital político a través de su fuerza verbal y de la propaganda parlamentaria de un grupo de destacados intelectuales jóvenes veteranos de la Guerra del Chaco, quienes buscaban convertirse en una contra-élite desde su época de conspiradores políticos durante el gobierno del presidente David Toro. Esta nueva generación aumentó sus adeptos corporativistas a través de una amplia orientación anti-oligárquica. Su nacionalismo exacerbado los llevó a cuestionar al Estado en su conjunto y a plantear un análisis de la realidad, valiéndose del marxismo como método de interpretación, así como llevando adelante un pragmatismo político, sobre todo a partir de la alianza de clases por intermedio de un proceso de movilización de masas donde destacaban: el endiosamiento del Estado como aquel factor principal para transformar la sociedad y la economía desde arriba; una tesis racial que enaltecía la homogeneización de la cultura nacional a consecuencia del mestizaje; el desarrollo de la noción

de Pueblo a partir del policlasismo, y el tributo incondicional hacia una noción abstracta como el Estado-Nación.

Para uno de los fundadores del MNR como Augusto Céspedes, los gestores de este partido eran “hombres jóvenes que casi todos por su situación económica correspondían a la modesta clase media, por su origen y particularidades intelectuales y espirituales representaban la más florida élite de la República”<sup>37</sup>. El núcleo del partido giraba en torno a Carlos Montenegro, Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo, Walter Guevara Arze, José Cuadros Quiroga, Germán Monroy Block, Fernando Iturralde, Raúl Molina Gutiérrez, Jorge T. Lavadenz, Alberto López, Rafael Otazo, Rigoberto Armaza Lopera, Rodolfo Costas, Augusto Céspedes, Alvaro Pérez del Castillo, Gastón Velasco, Alfonso Gumucio, Adrián Barrenechea, a los que, más tarde, se unirían Juan Lechín Oquendo y Ñuflo Chávez Ortiz.

Uno de los ideólogos más importantes del partido, Walter Guevara, afirmaba que en Bolivia era inviable una revolución de carácter comunista porque “si los obreros bolivianos siguieran ciegamente las consignas comunistas que reciben, debieran organizar la revolución contra la burguesía que los explota. ¿Quiénes explotan a la mayoría de los obreros bolivianos? Las grandes empresas mineras y algunas empresas ferroviarias cuyos beneficiarios no viven en Bolivia. ¿Contra qué burguesía podría entonces dirigirse su revolución? ¿Pretenden alcanzar a los accionistas que viven en Londres, Nueva York o Buenos Aires? [Por lo tanto], se puede y se debe nacionalizar las minas, pero ello sólo es posible de hacer en escala nacional y no como una reivindicación de la clase obrera. Se trata de problemas que afectan a toda la Nación como un todo y no exclusivamente a una de sus clases. Por lo demás, la Revolución Nacional puede lograr en este caso lo que no podría ni siquiera plantear la revolución de clase”<sup>38</sup>.

Estas condiciones ideológicas y políticas convirtieron al MNR en un partido hegemónico, superando toda posibilidad de participación proveniente de otras fuerzas de izquierda o del conservadurismo derechista como aquel de Falange Socialista Boliviana (FSB), el partido más importante de oposición al MNR hasta la década de los 60. Sin embargo, lo que parecía ser una portentosa estrategia de convocatoria y convergencia masiva –como la alianza de clases o el

pragmatismo para adaptarse a las necesidades de cada coyuntura política— se convirtió después en el eje de su inestabilidad como partido dentro del Estado y en el manejo mismo del poder, puesto que “(...) las diferencias ideológicas y de orientación dentro del movimiento eran tan enormes, que los enfrentamientos que tuvieron lugar después de la insurrección fueron particularmente encarnizados. Esto se debió a una serie peculiar de circunstancias que, después de 1946, hicieron del MNR una especie de imán que atrajo a todas las tendencias opositoras, tanto de derecha como de izquierda, reformistas como revolucionarias. Al extremo de que, en 1951, el movimiento fue una mezcla heterogénea de orientaciones y posiciones contradictorias”<sup>39</sup>.

El MNR nunca fue un partido unificado, sino una verdadera máquina burocrática contradictoria. La tendencia del líder, Víctor Paz Estenssoro, siempre aconsejó moderación para no deslizarse hacia el socialismo, al mismo tiempo que hizo innumerables negociaciones de emergencia en el ámbito diplomático con los Estados Unidos, cuyo objetivo era despejar las dudas sobre una revolución comunista en Bolivia. Por otra parte, la influencia obrera, a la cabeza de Juan Lechín Oquendo, tenía muy claro que las reformas estructurales debían ser arrancadas a cualquier costo, aunque no existiera una claridad estratégica sobre el curso posterior de la política económica en torno a la nacionalización de las minas o la modernización industrial boliviana. Los dirigentes obreros plantearon una posición muy cercana a la Tesis de Pulacayo, donde —en términos políticos— debía apoyarse la revolución burguesa para que el desarrollo capitalista sea evidente y completo, porque después era inevitable su superación, fruto de las contradicciones insuperables del imperialismo y de la crisis mundial del sistema capitalista. Estos términos filosófico políticos no pudieron lograr una actitud concertadora con las otras tendencias.

El panorama final desembocó en cambiantes y vacilantes realidades tácticas que obligaron al MNR a adaptarse a las tumultuosas condiciones políticas de la Revolución. Asimismo, el partido no fue otra cosa sino una organización autoritaria con un alto grado de violencia, cuyos componentes debían ser administrados con mucho utilitarismo político para

lograr un desarrollo equilibrado en medio de tanta presión popular y crisis política. Con estos propósitos pero, ante todo, para que el MNR monopolizara el poder, las tendencias de Paz Estenssoro, Siles Zuazo, Guevara Arze y del mismo Lechín Oquendo, estaban dispuestas a realizar todo tipo de ajuste y concesiones que la realidad táctica demandara, para después distanciarse de muchas áreas conflictivas, pero siempre luchando por mantener la situación dentro de ciertos límites definidos por el núcleo dirigente del MNR. Las nuevas élites políticas que capturaron el aparato del Estado durante la revolución eran íntegramente militantes del MNR, además de representar fracciones regionales bien definidas, provenientes de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Para realizar una interpretación política de las reformas estructurales llevadas a cabo durante la Revolución Nacional, plantearemos las fases identificadas por el sociólogo René Zavaleta Mercado; dichas fases constituyen los ciclos del nuevo Estado que nació en 1952<sup>40</sup>:

1. **Fase hegemónica de masas.** Donde el proletariado minero lideró la revolución, el ejército de represión fue el mismo pueblo armado que presiona sobre la cúpula del MNR para llevar adelante el carácter de las medidas radicales, cerrando el paso, definitivamente, a toda posibilidad de resurgimiento de la agonizante élite minera terrateniente. Además, durante esta primera fase, la Revolución Nacional procuró articular un país cultural e ideológicamente, a condición de fortalecer una identificación con el partido revolucionario: el MNR, y con lo que postulaban sus principales dirigentes e intelectuales, entre los que se destacaron aquellos que representaban el ala izquierda del partido: Juan Lechín, Germán Butrón y Ñuflo Chávez. Si bien se propugnó el reconocimiento de una Nación, los acontecimientos objetivos obligaron al partido a apaciguar el proceso, solamente como un medio para evitar que se desate una guerra civil prolongada que tendía a radicalizar todavía más las conductas con las masas convertidas en milicias obreras y campesinas.

De esta manera, se tuvo que reordenar el poder del Estado, establecer un nuevo principio de legitimidad para las nuevas autoridades, burocracias y élites triunfantes, cuidando

también que las masas no ingresen en un peligroso estado de desenfreno. Sin embargo, en este esfuerzo el propio Estado se vio debilitado por dos razones: primero porque la radicalización revolucionaria impidió identificar cuáles serían los nuevos parámetros políticos de reforma estatal; segundo, porque el MNR trató de identificarse con el mismo Estado, utilizándolo como espacio de manipulación, represión y patrimonialismo, razón por la cual tampoco hubo ocasión de reformar al Estado dentro de los marcos de una nueva estructura institucional, pues todo estaba atrapado al interior de cálculos pragmáticos y acciones prebendales.

2. **Fase semi-bonapartista del poder.** Donde el modelo estatal concebido por el MNR y la coyuntura política efervescente entre 1952 y 1956, cae presa de la fragmentación y el caudillismo con un fuerte peso de distintas *personalidades*. Así, la Revolución Nacional se vio obligada a rechazar toda presión regionalista o demandas departamentales específicas. El regionalismo representaba la amenaza de muchos notables locales para recuperar su dominación tradicional que estaba siendo destruida por las medidas revolucionarias. La concesión de autonomía local o la negociación con las demandas regionales conllevaba el riesgo de devolver, en ciertas regiones, el poder a una clase política desplazada. El fuerte centralismo que exigió la Revolución del 52 se mantuvo hasta la caída del MNR en 1964, profundizándose con los gobiernos militares, cuya única razón de poder fue la violencia para articular las regiones al Estado.

### **Reordenamiento del Estado y centralismo político después de 1952: : Hasta dónde llegaron las reformas estructurales**

El triunfo de la Revolución demandó rápidamente la nacionalización de las minas, aunque el núcleo histórico del MNR, conformado por Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo y Walter Guevara Arze, se había manifestado a favor de una transición que evitara una confrontación directa con los barones del estaño. Por lo tanto, en una primera instancia el partido se negaba a extremar medidas, sobre todo porque estaban conscientes de la dependencia internacional respecto de los Estados Unidos, país que era visto como la fuente financiera más importante y

como aquel apoyo táctico para el largo plazo en función de conseguir capitales de inversión y ejecutar la modernización económica, diversificándola. Víctor Paz y Walter Guevara se rehusaron a ser identificados con políticos comunistas y a convertir la revolución en una república de soviets; al mismo tiempo, Paz Estenssoro sabía que si no contaba con el apoyo de las milicias obreras, podía ser rebasado por el ala derechista y conservadora del partido, lo cual tendería hacia una guerra civil de peligrosas consecuencias debido a posibles enfrentamientos violentos entre el movimiento obrero y grupos conservadores de clase media. Desde el inicio de la primera gestión presidencial de Paz Estenssoro (1952-1956), el liderazgo del MNR favoreció una decidida orientación del régimen más compatible con el multilateralismo emergente, cuya cabeza era el poder norteamericano, y con las fuentes de financiamiento que aquél prometía<sup>41</sup>. Si bien Paz Estenssoro no buscaba medidas radicales, utilizó el Estado y sus recursos como un espacio para otorgar concesiones y controlar facciones, inclusive a costa de poner en riesgo la futura estabilidad económica que el proceso de modernización y desarrollo necesitaban.

Contradictoriamente, el MNR, después de la insurrección victoriosa, justificó su existencia y liderazgo político, no solamente a través de la revolución armada, sino fundamentalmente en referencia a la *continuidad* de la legitimidad constitucional. En las primeras declaraciones de los líderes del partido se hizo una constante mención al derecho del MNR de asumir el poder porque había sido el vencedor de las elecciones en 1951; tal derecho habría sido usurpado por la *oligarquía*, desatándose la revolución. Sin embargo, esto expresa claramente cómo el MNR, una vez en el poder, trataba por todos los medios de equilibrarse entre radicalización y pragmatismo para lograr estabilidad; este vaivén también debilitó al Estado como institución y tuvo serias consecuencias cuando intervino en la economía para hacerse cargo del desarrollo, degenerando en corrupción e ineficacia.

La justificación constitucional para el ejercicio del poder a la cual apeló el MNR hacía ver que “en el ámbito político formal, *no hubo idea de ruptura radical con el pasado*; y el hecho de que el gobierno revolucionario no redactara una nueva Constitución hasta 1961 no fue mera coincidencia. Por consiguiente, aunque el nuevo gobierno expresó una intención revolucionaria

–o cuando menos reformista– hacia las esferas sociales y económica, basaba su autoridad en normas políticas tradicionales y en la Constitución vigente”<sup>42</sup>—. Al mismo tiempo, la tendencia centrista del MNR aspiraba a construir una Nación-Estado moderna y desarrollada, postulando la creación de una burguesía capitalista protegida o estimulada desde el Estado. Hubo un deseo explícito por parte de Paz Estenssoro de ser el conductor de dicha tarea, empleando un pragmatismo sin límites para ejecutar su planteamiento económico.

Dentro del partido, cada vez adquirieron mayor notoriedad las tres grandes tendencias que marcaron toda confrontación política hasta la caída del gobierno en 1964. La primera puede ser catalogada como ala izquierdista, liderada por Juan Lechín, jefe máximo de la FSTMB, cuya conducta política era abiertamente revolucionaria y con una cercanía muy fuerte hacia el movimiento obrero, sobre todo hacia el sector minero; la segunda ala fue denominada pragmática y conciliadora, donde destacaban las figuras de Víctor Paz, Hernán Siles y Walter Guevara; la tercera ala fue considerada como aquella tendencia derechista que, sin un liderazgo específico, presionó sobre el presidente para evitar los excesos comunistas de la FSTMB.

El movimiento obrero, sin embargo, poseía las armas en la mano, lo que equivalía a tener el poder real para convertir sus doctrinas radicales en cambios efectivos de largo alcance. Con este contenido se fundó la Central Obrera Boliviana (COB) el 16 de abril de 1952, bajo el mando de un ministro obrero en su secretaría ejecutiva: Juan Lechín. La COB articuló a todos los trabajadores del país: obreros mineros, fabriles, artesanos, profesionales, técnicos e inclusive estudiantes universitarios y campesinos. En realidad, fue este poder real parido por la sociedad civil quien determinó romper con la cultura tradicional de los barones del estaño y con la dominación terrateniente en el área rural. Las reformas estructurales llegaron a ejecutarse porque el movimiento obrero agrupado en la COB *extirpó* al gobierno la Ley del Sufragio Universal, la Nacionalización de las Minas el 2 de julio de 1952 –fundándose, además, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) el 2 de octubre del mismo año– y la Reforma Agraria, declarada el 3 de agosto de 1953.

Durante esta época el poder de la COB y de los mineros era tal que también consiguieron ingresar a un *co-gobierno* con Paz Estenssoro de 1952 a 1956, poniendo en práctica un poder de veto en el directorio de la empresa estatal COMIBOL. Cuando ésta se creó, los sindicatos mineros representaban verdaderos centros de poder, cuyo respaldo fundamental descansaba en las milicias asentadas en los campamentos mineros. Quienes realmente llevaron el liderazgo durante las reformas estructurales fueron los dirigentes del sindicato y el control obrero que, poco después, se extendió hacia el control campesino. De hecho, dicho poder sindical en los ámbitos locales era de tal magnitud que podían actuar independientemente de la COB y del MNR si así lo deseaban, aún a pesar de haber jurado lealtad al partido y al presidente. Por consiguiente, la transformación estructural más inmediata en la configuración del poder y en el modelo de gobierno después de la Revolución Nacional, fue el surgimiento contundente del sector obrero como un núcleo clave de poder. La COB concentró una base de apoyo superior a la del partido del que oficialmente formaba parte, lo que dejó traslucir que el MNR asumió oficialmente el poder y la principal responsabilidad del gobierno estatal; en cambio la COB se constituyó en un actor político sin rival capaz de iniciativa y veto con relación al poder central. Es decir, tuvo poder de gobierno y una parte importante de la responsabilidad en el carácter y orientación del manejo económico, sobre todo en cuanto al intervencionismo estatal desde COMIBOL<sup>43</sup>. Una vez alcanzadas las reformas estructurales, la COB representó al verdadero gobierno de los obreros en todo Bolivia y, por lo tanto, empleó su poder para manipular también la economía nacional, de tal manera que cualquier movilización sindical o huelga, rápidamente adquiriría un contenido político global, afectando seriamente a la estructura económica en su conjunto.

Empero, la radicalidad de los sindicatos mineros y el carácter de las reformas estructurales no dieron lugar a una COB totalmente homogénea y monolítica. Todo lo contrario, esta poderosa institución no tenía mucha unidad, cayendo víctima de dubitaciones teórico-ideológicas en torno a los postulados marxistas, trotskistas y maoístas. Sus discusiones políticas solían referirse a los problemas de transición hacia el capitalismo y a la maduración de condiciones burguesas para

después desarrollar aquella auténtica conciencia de clase que les permitiese –casi automáticamente– conquistar la siguiente fase de una revolución proletaria. Esto tal vez explique por qué la COB no se apoderó directamente de la Revolución de abril como propugnaron algunos sectores trotskistas ligados a Guillermo Lora, entonces importante líder y teórico trotskista minero. Las contradicciones de la COB siempre terminaban en una disyuntiva: apoyar al MNR mientras se consoliden las condiciones capitalistas o asumir una iniciativa política independiente hasta las últimas consecuencias. Tal disyuntiva sería una especie de marca constante en las acciones mineras durante los treinta años posteriores a la Revolución.

Desde 1952, el ambiente político en Bolivia dio como resultado dos tipos básicos de conflicto. En el primero tuvo lugar una lucha ideológica donde el tema central apuntaba hacia los problemas del desarrollo y el futuro de la realidad económica en Bolivia; dentro de esta lucha, la clave del conflicto fue quién habría de jugar el *papel principal* en la redefinición y reconstrucción de la economía y toda la sociedad. Esta fue la hoguera que ardía en la división entre izquierda, centro y derecha al interior del MNR, así como durante las mortíferas luchas entre caudillos revolucionarios que proliferaron en Santa Cruz, en el campesinado cochabambino y en las áreas mineras cuando las milicias obreras desencadenaban las tensiones del poder entre 1952 y 1964.

El segundo tipo de conflicto político fue una lucha respecto de las angustiosas demandas sobre *recursos económicos* para financiar los cambios estructurales; lucha en torno a qué, cuándo, cómo y, nuevamente, quién. La obtención de recursos cayó también en el agujero de la distribución inmediata de prebendas revolucionarias. “El conflicto ideológico, la movilización, un volumen mayor de demandas y un excedente distribuible limitado constituyeron los primeros problemas que encaró la política post insurreccional”<sup>44</sup>.

La COB enfrentó graves problemas en torno a la posición que debía adoptar de cara al MNR y frente a la tentación de arrebatarse la revolución a este partido. Sin embargo, las amenazas contrarrevolucionarias obligaron al núcleo del MNR a propender, tácticamente, hacia la izquierda cuando se trataba de asustar a la oposición con los desfiles de milicias obreras y

campesinas; de esta manera, la COB mantuvo su posición de veto y control obrero en las minas aunque no supo desplazar al MNR definitivamente del poder, tal vez por lo que el investigador Jorge Lazarte denominó como el carácter *mixto* de la COB. Es decir, fue un actor social y político al mismo tiempo. Como actor social, la COB era aglutinante, contestataria y mediadora, pero como actor político debía plantear un proyecto alternativo de sociedad que en los hechos significaba el socialismo. Fue esta doble faceta en su identidad –casi ambigua en el momento de capturar el poder en vivo y directo– lo que impidió a la COB saltar hacia el socialismo durante el proceso revolucionario, en la medida en que su carácter de actor social también la obligaba a negociar espacios y demandas con sectores de clase media, campesinos y otras élites. El papel de la COB como actor social evitó un comportamiento totalmente intransigente a favor de una dictadura del proletariado a como dé lugar.

Durante esta fase, caracterizada como una hegemonía de masas acaudilladas por la COB, el MNR logró viabilizar su política económica tratando de aislar las amenazas obreras para impulsar una modernización capitalista. Así, todo apuntó hacia el alumbramiento de una *burguesía nacional* bajo la *protección del Estado*, y hacia la identificación de otras fuentes de explotación de recursos naturales más allá de la minería estañífera. Las decisiones políticas se tomaron identificando al petróleo como otro eje económico, y mirando a la región de Santa Cruz como el polo de desarrollo, funcional a la modernización estatal entre 1952 y 1964. Paz Estenssoro fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como la empresa estatal que debía ser financiada, inicialmente por el Estado a través de flujos económicos provenientes de COMIBOL.

El nuevo modelo económico utilizó a la economía minera como el basamento para contentar, tanto a las demandas radicales del movimiento obrero con poder de veto crucial y, a su vez, para subvencionar la instalación de yacimientos petroleros, potenciando un polo regional de desarrollo en el oriente boliviano. Sin embargo, “la temprana falta de rentabilidad de COMIBOL fue probablemente determinada por la política económica general del MNR, diseñada más para impulsar la diversificación, especialmente a favor de la industria petrolera, que para revivir

aquella del estaño (...). Con el gobierno movimientista, más de 100 millones de dólares fueron transferidos de COMIBOL a YPF. La diversificación era correcta y muy deseable en teoría, pero pésimamente administrada en la práctica”<sup>45</sup>.

La COB y el movimiento sindical minero utilizaron su facultad de co-gobierno y veto político en la administración de COMIBOL, explotando las subvenciones estatales a su favor cuando así lo determinaban sus congresos políticos. En un momento se despidió a la totalidad de los mineros pagándoseles beneficios sociales, para después recontratarlos nuevamente bajo el consentimiento de dos ministros cobistas como Germán Butrón y Juan Lechín, cuyo vaivén para satisfacer al movimiento obrero trataba de equilibrarse con las decisiones del MNR por asumir una visión tecnocrática de la economía.

Asimismo, es importante indicar que ambas acciones políticas, tanto de la COB como del MNR, no habrían sido posibles si estos actores no hubieran colonizado el aparato estatal como realmente lo hicieron. El Estado se convirtió en la llave maestra para financiar los excesos revolucionarios, estimular a la sociedad civil para que viva a costa de aquél, reprimir a la oposición política, y conducir el proceso modernizador mediante “planes de desarrollo” que fomentaron el intervencionismo estatal en la economía hasta el límite de lo absurdo.

El *modelo económico* de la Revolución Nacional se estructuró de la siguiente manera:

1. La nacionalización de la gran minería y la Reforma Agraria crearon las bases económicas que posibilitaron redistribuir el ingreso de forma tal, que este aspecto llegó a constituir un objetivo muy codiciado, sobre todo por el ala centrista del MNR. La redistribución debía ir junto a la creación de una burguesía nacional, razón por la que el Estado constituía el eje del proceso económico y político para orientar, en el largo plazo, el poder y la propia revolución.
2. En gran medida, se siguieron las directrices establecidas por el Plan Bohan de 1940. El planteamiento de Walter Guevara<sup>46</sup>—entonces Ministro de Relaciones Exteriores pero, en el fondo, artífice de la política económica modernizadora del gobierno de Paz Estenssoro— fue dar prioridad al desarrollo de la agricultura comercial, relegando el

desarrollo industrial basándose en la instalación de hornos de fundición para minerales. Los requerimientos financieros de la nueva política económica no fueron plenamente satisfechos por el crédito externo, por lo que la única forma de financiar la importación de maquinaria, insumos y materias primas, necesarias para la sustitución de importaciones, era a través del excedente que generaba la minería estatal. Las reducidas posibilidades de generación de divisas –en el corto y mediano plazo– por parte de la agroindustria, confirmaron todavía más que la minería era quien debía producir las divisas y cubrir los servicios de la deuda externa.

Roberto Jordán Pando, ex responsable de la Junta Nacional de Planeamiento en el período de elaboración del Plan Decenal (1962-1971), afirmó que entre 1952 y 1961, Bolivia no tuvo acceso al mercado internacional de capitales, sino hasta 1961, que es cuando los Estados Unidos, dentro del marco de la Alianza para el Progreso, aceptaron conceder financiamiento por 80 millones de dólares.<sup>47</sup>—

3. El modelo económico tenía dos finalidades. Primero, la ejecución de un estilo de desarrollo, afincado en la sustitución de importaciones y en la incorporación del departamento de Santa Cruz al conjunto de la economía nacional. Segundo, la redistribución del ingreso. Sin embargo, recién en 1962 pudo plantearse –como objetivo en cuanto a política social– elevar el nivel de vida de la población<sup>48</sup>—. Para lograr la sustitución de importaciones era fundamental captar el excedente minero y estimular la generación de empleo a través del intervencionismo estatal.
4. Los principales instrumentos de política económica giraban en torno de políticas cambiarias, políticas tributarias y transferencia de utilidades.
5. Dentro de la estrategia de transferencia de utilidades, a la COMIBOL se le asignó la función de financiar el proceso de diversificación económica. La distribución y el uso del excedente minero fueron dirigidos hacia tres canales: inversión directa, construcción de infraestructura básica, y financiamiento de créditos para el desarrollo. Dentro de esta lógica, los dólares generados por la minería eran sistemáticamente distribuidos desde el

Estado hacia ciertos grupos empresariales que, supuestamente, fortalecerían la nueva agroindustria; sin embargo, tales dólares sirvieron al mismo tiempo para que el MNR satisfaga muchas ambiciones económicas de sus dirigentes más importantes o de aquellos cuadros partidarios que tuvieron una actuación central para consolidar el poder autoritario del partido y la revolución.

Las divisas entregadas desde el gobierno pronto se convirtieron en una política económica populista y corrompida, pues muchos grupos favorecidos, incluyendo los empresariales, vendían las divisas, compradas a muy bajo costo dentro del Estado, a precios exorbitantes aprovechando una política cambiaria flexible o sometida a los vaivenes de la hiperinflación que comenzó a desarrollarse durante la ejecución de las reformas estructurales. La creación de fortunas era inmediata, pero el MNR estaba convencido de que tales actitudes favorecían también la acumulación de capital y riqueza, necesarias para construir una burguesía moderna, supuestamente, con la suficiente capacidad para desarrollar la estructura económica que el Estado estaba apadrinando.

6. Las principales inversiones directas se realizaron en el sector petrolero y en la construcción de infraestructura caminera. Las inversiones estatales en YPFB fueron importantes, pues entre 1952 y 1956, las divisas alcanzaron a 42,7 millones de dólares.
7. En materia de apertura regional, fue importante construir la carretera Cochabamba-Santa Cruz, además de las construidas en el norte de este departamento. Estos proyectos de infraestructura fueron financiados con crédito externo. La concesión de créditos de desarrollo fue dirigida, principalmente, hacia la agricultura cruceña.
8. Para favorecer al sector industrial se otorgaron créditos administrados por el Banco Central con tasas internas diferenciales. La industria se benefició porque las compras estatales le dieron preferencia, con el ánimo de fortalecer a una burguesía revolucionaria.
9. Finalmente, el modelo económico de la Revolución estaba afincado estratégicamente sobre un proteccionismo de largo plazo que debía posibilitar el funcionamiento de un

nuevo estilo de desarrollo. El proteccionismo fue la principal herramienta para modificar la estructura productiva.

Al rastrear las políticas revolucionarias y el conjunto de relaciones entre política económica e intervencionismo estatal, es importante afirmar que todas las medidas fueron escogidas por el liderazgo político de la Revolución: el MNR y la COB. Este liderazgo tenía inusuales oportunidades frente a las que no hubo casi ninguna restricción política o técnica. Por lo tanto, no fue difícil para dicho liderazgo comportarse como un benevolente guardián social. La elección de las políticas económicas fue dictada por los mitos, creencias y temores de aquel liderazgo político, detrás del cual frecuentemente existía el consentimiento de la sociedad civil boliviana que reconocía en tal liderazgo a una élite modernizante.

Los conflictos de la política post insurreccional fueron la lucha ideológica respecto a cómo diseñar la modernización del país, y la redistribución de riqueza desde el Estado. Estos conflictos se resolvieron por medio de una estrategia impulsada por el grupo centrista-pragmático del MNR: neutralizar los factores de presión provenientes de la COB en momento de crisis y radicalización, aceptando la subida de salarios y entregando *subvenciones* mediante el sistema de pulperías, incluso corriendo el riesgo de descapitalizar a COMIBOL y al propio Estado. Dicho centro pragmático consiguió amplio respaldo del campesinado, pagando, a su vez, el alto precio de convivir con un *caudillismo campesino* que, para finales de 1953, estaba ampliamente armado<sup>49</sup>. La conciliación de Paz Estenssoro entre 1952 y 1956, así como las negociaciones de Hernán Siles, presidente de Bolivia entre 1956 y 1960, también mantuvieron seguidores en los centros urbanos, lo cual no sólo precisaba de medidas realistas para redistribuir la riqueza en una situación de crisis, sino que alentaba permanentemente una imagen populista donde los favores clientelares se canalizaban al calor de un *Estado patrimonializado*.

Así se fue construyendo el mito del *Estado Totalizador*, convertido en un padre filantrópico al que había de extraérsele, por la fuerza o la negociación, los recursos escasos del modelo de acumulación que, finalmente, se transformaron en la razón de ser de cualquier discordia política, movilizándose fácilmente a las masas hacia acciones violentas para conseguir cualquier cosa del

Estado. El Estado que nació de la Revolución Nacional oscilaba entre las presiones internas que buscaban darle una orientación prebendal y reformista, y las acciones para acomodarse a las exigencias internacionales determinadas por los Estados Unidos y por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) quienes miraban vigilantes los desenlaces, insuficiencias y extremos de la modernización boliviana.

Después del triunfo de la Revolución Nacional, las masas con fusiles pronto reclamaron un *poder articulador* que democratice la distribución de riqueza, nutriendo el mito del Estado Nacional Benefactor. En este caso, el mito se transformó en un deseo colectivo personificado en los líderes de la revolución: Paz Estenssoro, Juan Lechín, Ñuflo Chávez, José Rojas, Miguel Veizaga, los hermanos Sandóval Morón en Santa Cruz, Ruben Julio en Pando y parte del Beni y, posteriormente, representado en los caudillos militares como René Barrientos, Alfredo Ovando o Juan José Tórrez. La personalidad de estos caudillos se convirtió en otra de las coordenadas fundamentales durante los conflictos por la dominación, de tal manera que el vínculo entre grupos, facciones y personalidad constituyó el problema más trascendental para el manejo del poder en Bolivia después del 52, convirtiéndose, además, en aquel objetivo que debía ser controlado en diferentes regiones, paralelamente al proceso de recomposición estatal.

Fue esta mezcla entre caudillos ambiciosos, aparato estatal disponible, actitud intervencionista en la economía, corrupción y deseo frenético de modernización, lo que, paradójicamente, también fue debilitando al Estado Totalizador aún a pesar de que éste trataba por todos los medios de reconstruirse con mucho poder y abundante autoritarismo violento.

Los mitos políticos nacidos de la Revolución emprendieron la tarea de cambiar a los hombres y a toda la cultura nacional, para así poder regular y determinar sus actos. Estos mitos hicieron lo mismo que la serpiente cuando trata de paralizar a sus víctimas antes de atacarlas, sin ofrecer ninguna resistencia seria. De pronto, el Estado, política, economía y toda la sociedad boliviana estaban vencidos y dominados antes de que se percataran de lo que realmente había ocurrido y del futuro costo que había que pagar.

Los medios habituales de opresión política no bastaron para producir este efecto, sino que se complementaron con el deseo de toda una nación por *autoconvencerse* de que con la Revolución podían alcanzar un nuevo Estado industrializado que llevaría a toda la sociedad hacia la modernización de estilo europeo o norteamericano. “El nivel de cultura política anterior a 1952 (...), fue reemplazado por un sistema, en el cual la conciencia política crítica fue transformada en la capacidad de identificarse con las metas y prácticas del Estado y en el cual las marchas multitudinarias suplían el genuino diálogo político. [Los distintos gobiernos desde la Revolución de abril hasta su descomposición militar de finales de los 60 y toda la década del 70], estaban marcados por una combinación híbrida de antiimperialismo retórico y autoritarismo práctico, que tampoco fue cuestionado por sus sectores izquierdistas, (...) lo que imprimió al régimen el estigma permanente de totalitario y despótico”<sup>50</sup>.

En la matriz de dominación creada por el modelo revolucionario, “(...) el Estado tendrá la conducción negociada de los procesos de acumulación y comunicación, interviniendo tanto en el mundo de la producción como en el de la cultura. El modelo se dirigió a que el Estado sea percibido como un ámbito de integración y compromiso, capaz de actuar por encima de los intereses de las diferentes clases y grupos sociales”<sup>51</sup>. Por lo tanto, el Estado Totalizador operaba como una estructura organizadora y distribuidora de servicios, a la par que dirimidora de conflictos reivindicativos, conquista caudillista y distorsión militar que fomentó las dictaduras militares en los 60 y 70. De esta manera, el uso de sus facultades distributivas le permitía no solamente confirmar su capacidad legitimadora para imponerla sobre la sociedad boliviana, sino ampliarla hacia una función que producía toda una *cultura nacional* identificada con el Estado, donde se satisfacían las demandas sociales de diferentes fuerzas que concurrían al compromiso con la revolución, prebendalismo, clientelismo y modernización.

### **Estado Totalizador y persistencia de conflictos regionales**

Tanto el caudillismo como la irrupción del Estado Totalizador fueron los efectos políticos de aquella coyuntura que precipitó una mayor disgregación del poder, en un período convulsivo marcado por fisuras entre el MNR, la COB y el movimiento campesino que, sin una

participación directa en el poder, también hizo tambalear las decisiones políticas al autoperibirse como una milicia de ajusticiamiento popular. Durante el segundo gobierno de la Revolución, Hernán Siles intentó revertir la dispersión del poder a través del nombramiento directo de interventores para dirigir los principales comandos del partido.

El resultado fue una centralización del poder mucho más fuerte entre 1956 y 1960, no sólo para controlar el aparato estatal, sino también para poner en marcha un programa de ajustes macro-económicos cuyo objetivo principal fue vencer la hiperinflación que socavó al país desde 1952. El Plan Estabilizador de 1956, sacramentado con el nombre de un alto funcionario del FMI, John Eder, conjugó “(...) los intereses del gobierno boliviano abocado al desarrollo del capitalismo de Estado, con los intereses estadounidenses de robustecer al régimen boliviano como una alternativa reformista al socialismo. La política de asistencia jugó un papel central en este proceso. La reforma agraria había ocasionado desarticulaciones en el suministro alimentario, lo que condujo a una dependencia de las donaciones por parte de los Estados Unidos, que se sumaron a la asistencia financiera para cubrir los déficits fiscales y la asistencia técnica”<sup>52</sup>. La administración de Siles tenía como misión superar la crisis económica y desplazar definitivamente a la COB del co-gobierno, además de patrocinar un burocratismo irreversible al interior del Estado patrimonializado, en tanto que se buscaba concentrar el poder, cada vez más en manos de la dirigencia nacional del MNR.

El lugar de mayor tensión entre autoridades centrales y locales fue Santa Cruz, donde imperaba un fuerte regionalismo. El MNR se negó a otorgar poder a las regiones y municipios de todo el país, fomentando la afiliación incondicional para enaltecer el poder del MNR como partido monopolístico, lo cual equivalía a converger nuevamente en el Estado central.

Las pugnas interregionales se atenuaron con algunas acciones para diversificar la economía, sobre todo porque Santa Cruz y Beni ingresaron a formar parte de una estrategia nacional de desarrollo. Sin embargo, se mantuvo latente una reivindicación política que reclamaba poder autónomo en los ámbitos regional-municipales, pues todo hacía ver que las

políticas económicas de la Revolución Nacional eran una estrategia que se orientaba hacia la consolidación del Estado burocrático centralista.

Para 1956, el Estado revolucionario se había convertido en el actor central de cualquier proceso de cambio. Además de ampliar sus actividades hacia diferentes sectores productivos a través de las nacionalizaciones, se reservó el derecho de tomar cualquier decisión respecto de las orientaciones del desarrollo por medio de mecanismos altamente centralizados y nada participativos, imponiendo su hegemonía a distintos grupos sociales y a las diferentes regiones.

Este Estado Totalizador definió quiénes iban a ser los polos de crecimiento y los de estancamiento, reorganizó el espacio geográfico, la orientación de las inversiones, construcción de caminos y apertura de mercados. El resultado político fue la identificación de un nuevo eje de desarrollo que giraba alrededor de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz donde se reúne la actividad económica, política y social más dinámica hasta el día de hoy. Opuesto a dicho eje se presentan los departamentos con menos posibilidades para insertarse dentro del modelo estatal del 52.

La posibilidad de poner en práctica otros cambios radicales como la descentralización para otorgar poder a las regiones, hizo que el MNR desvíe todas las polémicas en torno a la construcción del Estado Nacional y la unidad, ésta debía adquirir mayor preponderancia política antes que cualquier presión proveniente de los poderes locales, a los cuales se negó identidad plena porque, tanto el MNR como la COB y el mismo campesinado, terminaron por afianzar el centralismo del Estado Totalizador. Además, “(...) el regionalismo representaba, en algunos casos, un intento de notables locales para recuperar su dominación tradicional amenazada por las medidas, a veces de corte revolucionario, tomadas por el gobierno central. La concesión de autonomía local conllevaba el riesgo de devolver en ciertas regiones el poder a una clase política desplazada; [por lo tanto], (...) la Revolución de 1952, se propuso llevar a término la construcción de la nación y el fortalecimiento del Estado central, apoyada en el pueblo, definido como unidad abstracta, al margen de especificidades sociales, culturales o regionales, cuyo fin era combatir bajo la conducción del partido revolucionario a los adversarios de la nación en el plano interno y externo”<sup>53</sup>.

El resultado de esta concepción política fue consolidar el eje de dominación ubicado en el centro geográfico del país. En este eje, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz representan los polos de mayor atracción para la población y la economía; al mismo tiempo, es en este eje donde tienen lugar las presiones por el control de las orientaciones del desarrollo desde 1952 hasta el presente, y donde está el mayor peso específico en la participación regional respecto del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Durante la consolidación del Estado Totalizador, fueron muy nítidos los siguientes elementos constitutivos de un nuevo modelo de dominación post-revolucionario:

1. Instauración de una élite económica y política que modernizó al país en dos sentidos: primero, dotándole de una estructura productiva capitalista, con una economía diversificada y con un Estado que protegiera y estimulara la formación de una burguesía nacional que operaba sin restricciones al constituirse un importante sector capitalista de Estado; segundo, articulando, cultural e ideológicamente a una Nación que permitiera reproducir un país homogéneo y controlado en todos sus departamentos; de aquí proviene la estrategia política para negar independencia al conjunto de poderes regionales porque, además, el intento ideológico de homogeneización representaba un mecanismo de control sobre el caudillismo que se había transformado en bonapartismo regional; es decir, en aquella *personalización del poder* al interior de los espacios locales.
2. Ampliación del área territorial donde tenía lugar la influencia estatal. El Estado se convirtió en una fuerza de articulación nacional mediante la integración económica y política de grandes zonas que antes eran periféricas como Santa Cruz y Beni.
3. Expansión de la legitimidad estatal mediante el uso de la violencia, diversos mecanismos autoritarios, y prebendalismo estatal. Dicha expansión de legitimidad se tradujo en la incorporación del campesinado al funcionamiento del sistema político.
4. Reconstitución del aparato represivo del Estado, con la creación de un nuevo ejército para neutralizar el poder de las milicias obreras y campesinas.

5. Constitución y desarrollo de un núcleo burocrático estatal que se convirtió en un caldo de cultivo para el caudillismo que terminó por corromper a gran parte de los líderes nacionalistas, derechistas e izquierdistas, ligados a la administración de diferentes gobiernos entre 1952 y 1982.

### **Del Estado totalizador revolucionario al Estado neoliberal**

Las insuficiencias del Estado revolucionario se avivaron con mucho esplendor durante los gobiernos militares que surgieron después de la caída del MNR en 1964, llegando a una crisis inaguantable durante la transición democrática del gobierno de Hernán Siles Zuazo con la Unidad Democrática y Popular (UDP) entre 1982 y 1985. Este año marca el final de toda una época insurreccional que nació en 1952. Desde que la transición democrática tuviera lugar, Bolivia confrontó nuevos problemas políticos: destruir las huellas dejadas por la Revolución Nacional, poner en funcionamiento los ajustes estructurales y emprender un difícil equilibrio entre democracia representativa y economía de libre mercado. Estas nuevas condiciones provocan hoy día permanentes desencuentros entre el Estado y la sociedad civil, lo cual tiene un enorme influjo sobre el tipo de democracia que podría consolidarse en el próximo milenio, o también sobre un posible fracaso de la misma en el largo plazo.

La crisis del Estado del 52 muestra que éste se volvió progresivamente incapaz de “(...) promulgar regulaciones para la vida social que sean eficaces a lo largo de sus jurisdicciones y de sus sistemas de estratificación. Las provincias o distritos situados en la periferia de los centros urbanos nacionales, normalmente más duramente afectados por las crisis económicas y dotados de burocracias más débiles, crearon (o reforzaron) sistemas locales de poder que tendieron a llegar a extremos de conducción personalista, abierta a toda suerte de prácticas violentas o arbitrarias”<sup>54</sup>. El Estado Totalizador de la Revolución acabó siendo víctima de sus propios sueños omnipotentes, pues a pesar de su impulso político radical, no supo protegerse del patrimonialismo que infectó con prebendalismo y corrupción sus proyecciones futuras, revelándose también incapaz para solucionar la persistente pobreza y modernización incompleta o deforme en Bolivia.

Hoy día, toda estrategia apunta hacia el desmantelamiento del Estado del 52, porque la crisis del Estado desencadena, al mismo tiempo, la crítica del mismo. El neoliberalismo que se implantó con las reformas estructurales desde 1985 no sólo denunció el estatismo, sino que condenó toda intervención estatal como consustancialmente nefasta. Sin embargo, este ataque olvida que el

impulso estatal a la modernización industrial, agraria, educacional, etc. que pudo conquistarse con la Revolución de abril, creó las bases de cualquier estrategia de desarrollo hasta la fecha; y, sobre todo, el actual neoliberalismo olvida que la intervención del Estado respondió a una voluntad mayoritaria que es el criterio legítimo de la acción política en democracia, voluntad que se reflejó abiertamente en las políticas post-insurreccionales entre 1952 y 1964<sup>55</sup>.

De lo que ahora se trata es de la reforma del Estado democrático, a partir de una crítica a los efectos perversos del Estado del 52. Dicha crítica deberá tomar en cuenta tres elementos centrales para su desarrollo:

1. La dimensión del Estado como conjunto de burocracias capaces de cumplir con sus obligaciones con una eficiencia razonable, por lo que será importante la refundación de un Estado *magro*; es decir, un conjunto compacto y menos poderoso de órganos públicos con la suficiente capacidad de crear bases firmes para la democracia, resolviendo progresivamente las desigualdades sociales, y generando un crecimiento económico que sobreviva ante los retos de la economía mundial. Como las políticas neoliberales presionan para empujarse al Estado, es necesario decir que el antónimo políticamente recomendable de grande no es pequeño, sino magro<sup>56</sup>.
2. Una segunda dimensión tiene que ver con la eficacia de la ley. La eficacia del Estado de derecho deberá conquistar una nueva cultura ciudadana de respeto al individuo libertario, con derechos plenos a la participación política, a la fiscalización del poder y a la representación; de lo contrario, la eficacia de la ley seguirá siendo perforada por el autoritarismo, los sobornos y la corrupción que expanden procesos de “privatización de los espacios públicos”, donde el funcionario político cree tener entre manos una concesión susceptible de ser usufructuada para beneficio personal. El resultado inmediato de este fenómeno es la posible neo-feudalización de la soberanía estatal, del poder y la política, pues aún con la democracia representativa y el liberalismo económico, podría evaporarse la dimensión pública del Estado si existe la alternativa de colonizar el aparato estatal después de las elecciones.

3. Otra dimensión problemática para la reforma del Estado es su eficacia simbólica, es decir, la credibilidad en el alegato de que el aparato estatal orienta sus decisiones buscando cohesión y bien común, algo que se logró con la ideología del Nacionalismo Revolucionario, aún a pesar de su ruina y posterior degeneración. El actual Estado neoliberal pierde habilidad para producir acción hegemónica en beneficio de la integración social. ¿Qué estrategia política plausible podría cohesionar a una sociedad fuertemente heterogénea y diferenciada, de modo que la diversidad de valores, intereses y etnias pueda desarrollarse como pluralidad, fortaleciendo a la democracia representativa y evitando conducir a la desarticulación social?<sup>57</sup>—.

Estas tareas políticas, todavía pendientes a las puertas del siglo XXI, estimulan las amenazas de expansión de lo que el investigador argentino Guillermo O'Donnell, denominó como *democracias delegativas*, las cuales se definen por “(...) una concepción y práctica del poder Ejecutivo que presupone que éste tiene derecho, delegado por el electorado, de hacer lo que le parezca adecuado para un país (...), las democracias delegativas son inherentemente hostiles a los patrones de representación normales en las democracias establecidas, a la creación y fortalecimiento de instituciones políticas y, especialmente, a lo que se denomina responsabilidad horizontal; [es decir], al control cotidiano de la validez y la legalidad del Ejecutivo por parte de otros organismos públicos que son razonablemente autónomos del mismo (...). Una democracia delegativa tiende a despolarizar la población —excepto durante los breves momentos en los cuales demanda su apoyo electoral— y actualmente coexiste con períodos de severas crisis económicas”<sup>58</sup>—.

Las democracias delegativas parecen caracterizar y convivir con los intentos neoliberales por reducir el tamaño y los déficits del Estado como burocracia que, como un efecto no deseado, también van destruyendo el Estado como ley y a su legitimación ideológica. Para una democracia delegativa, la relación conflictiva entre mercado y Estado es visualizada como aquella tensión de *suma cero*, donde el avance de un elemento, necesariamente implica el retroceso del otro. Por el momento, quien ha ganado el mayor número de partidas en el tablero

neoliberal contemporáneo ha sido el mercado que pone en permanente jaque mate al Estado democrático boliviano, erigido sobre los restos del Estado Revolucionario del 52.

La actual democracia boliviana puso en marcha procesos de reforma y modernización de su sistema político, obteniendo resultados loables; es decir, posibilitó la reforma en las reglas del juego democrático mejorando su sistema electoral, Constitución Política o ley de partidos políticos. Sin embargo, ningún conjunto de reglas alcanza para redefinir las prácticas concretas de una cultura política donde el Estado no consigue volver a sintonizarse con la sociedad civil, y donde el sistema presidencialista de gobierno pretende perpetuar la lógica de las democracias delegativas<sup>59</sup>.

Efectivamente, el Estado del 52 ya es un recuerdo de cara hacia el siglo XXI, pero si queremos revertir los actuales obstáculos para la consolidación de nuestra democracia, será fundamental repensar el concepto mismo de Estado en Bolivia, de orden colectivo democrático y plural, así como de acción política racional. Una reforma del Estado debería apuntar, no a más o menos Estado, sino a otro Estado que cultive la eficacia, legitimidad y respaldo ciudadano, donde se consiga una reconversión productiva, susceptible de competir internacionalmente y de ofrecer el mayor bienestar a la población. Por lo demás, las lecciones provenientes de intentos épicos como aquellos que dejó la Revolución del 52 señalan claramente que el peor vicio fue pensar en términos absolutos y fundamentalistas. Por lo tanto, sería un despropósito cruzar el puente del fundamentalismo estatal de hace 50 años, hacia el fundamentalismo contemporáneo del mercado.

### **Los desafíos en el mediano plazo: ¿problemas del desarrollo regional o problemas del desarrollo nacional?**

El desenvolvimiento de las transformaciones estructurales en Bolivia después de la Revolución Nacional definió un modelo de desarrollo que fomentó la inequidad en el desarrollo de las diferentes regiones de Bolivia, y desalojó la posibilidad de una auténtica democratización y un uso racional de los recursos económicos. Si bien el Estado Totalizador inauguró una nueva etapa histórica, no logró manejar la heterogeneidad social, regional y étnica de todo el país, pues

rápidamente fue urgido a mirar la crisis que tenía lugar en las regiones que demandaban autonomía relativa. Las desigualdades regionales pervivieron a pesar de las transformaciones estructurales y los esfuerzos del Estado Nacional.

Las reivindicaciones regionales no solamente irrumpieron desde los departamentos afectados por el modelo económico de la Revolución, sino que brotaron inclusive en aquellas zonas donde los gobiernos revolucionarios de 1952 a 1964 invirtieron enormes cantidades de capital como Santa Cruz. No es que solamente Chuquisaca, Pando, Beni o Tarija se vieron en una situación de desventaja por la superioridad del eje central compuesto por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, sino que la identidad nacional, después de los sacudones revolucionarios fue naciendo de hechos políticos, como la influencia del Estado Totalizador, así como de las demandas por mayor poder regional y por reconocimiento étnico en espacios geográficos que exigían ir más allá de la Nación.

Así nacieron los *movimientos sociales regionales* que son entendidos como una acción del conjunto de clases que conforman una sociedad regional, reivindicando y luchando durante un largo período de tiempo por metas de desarrollo regional, modernización e identidad cultural o política en contra del Estado central. Luego de la Revolución, los conflictos políticos tuvieron diferente significación e intensidad, pues no solamente posibilitaron una pugna entre la COB, la nueva élite partidaria del MNR o sectores conservadores que resurgieron con el ejército, sino que también brotaron los conflictos regionales que se expresan en la oposición región-nación. Dicha oposición plantea relaciones de enfrentamiento entre identidades regionales particulares y la identidad nacional homogénea que propugnó la Revolución.

Los conflictos políticos y sociales provenientes de las regiones, combinaron un reconocimiento al poder central del Estado Totalizador, con una exigencia por satisfacer sus demandas locales, lo cual implicaba la necesidad de una ejecución de políticas estatales, cada vez más *consensuada*; no solamente por el poder que tenían algunos caudillos locales, sino porque la Revolución Nacional se encontró con que los problemas del desarrollo están íntimamente ligados a procesos transformación, donde el papel de los *intereses regionales* es muy importante.

Después de la Revolución, Bolivia dejó de ser un país no vertebrado con zonas aisladas para convertirse en un sistema nacional interdependiente, ya que existen zonas cuya dinámica económica o productiva está subordinada a la de otras, pero con un permanente problema: el aparato estatal reprodujo nuevamente un conjunto de desigualdades y desequilibrios regionales a pesar de las reformas estructurales.

El relacionamiento entre las diferentes regiones se presentó como un obstáculo para imponer un control absoluto por parte del Estado Totalizador, razón por la que el núcleo de su modelo de desarrollo terminó siendo insatisfactorio para el conjunto de los poderes regionales. Por ello mismo, actualmente los principales actores están representados por las Asambleas Departamentales, Comités Cívicos, Prefecturas y Municipios, cuyo protagonismo apunta hacia la **planificación descentralizada**.

Sin embargo, a pesar del enorme potencial democratizador que trajeron los movimientos sociales regionales, también es importante afirmar que existen especiales conflictos al interior de las mismas regiones, como los que actualmente están ocurriendo entre las provincias y su sede departamental porque las capitales de departamento, por ser centros urbanos de dinámica económica y política más intensa, tienden a acaparar los beneficios que reciben del Estado central, ya sea a través de impuestos, la coparticipación tributaria o los recursos naturales explotados en su mismo territorio.

Las implicaciones e intereses que arden silenciosamente en las regiones, aparecen con mayor fuerza por intermedio de los municipios, tanto urbanos como rurales. Sin embargo, está por verse de qué manera y en qué medida estos municipios podrán llegar a una feliz convivencia con las Prefecturas, apostando también por un desarrollo integral en todos los departamentos. El desarrollo regional de los nueve departamentos de Bolivia, depende de las voluntades políticas que los actores y los movimientos sociales regionales desenvuelvan. Éstos deberán replantear qué significa el desarrollo y la modernización en cada uno de sus departamentos, cultivando, a su vez, recursos de poder y autogobierno, más allá de las influencias históricas que dejaron la Revolución y el Estado Totalizador. Se trata, en última instancia, de que una agenda estratégica para la descentralización permita construir sólidos **poderes regionales** en Bolivia.

Si compartimos las proposiciones del experto chileno en planificación regional, Sergio Boisier, los retos para impulsar una auténtica región radican en potenciar su capacidad de auto-organización, “transformando una comunidad inanimada, segmentada por intereses sectoriales, poco perceptiva de su identificación territorial y en definitiva, pasiva, en otra, organizada, cohesionada, consciente de la identidad sociedad-región, capaz de movilizarse tras proyectos colectivos, es decir, capaz de transformarse en un sujeto de su propio desarrollo”<sup>60</sup>. Si

la descentralización permite construir regiones que sean protagonistas de su propio desarrollo y de su propio poder, definitivamente impulsarían el resurgimiento de las regiones; en caso contrario, es posible que los vicios criticados en el poder central vuelvan a repetirse en micro-espacios de caciquismo regional.

¿Qué significa construir una región y dotarse de los recursos institucionales, humanos y financieros para descentralizar labores políticas, económicas y sociales? ¿Qué representa la descentralización para la gobernabilidad de nuestra actual democracia que apenas empieza a consolidarse, una vez dejado atrás el viejo Estado del 52? ¿En qué condiciones la descentralización será gobernable? ¿La representación de intereses regionales al interior de Prefecturas y Municipios sería manejable?

Durante la puesta en marcha de una descentralización con protagonismo regional, tanto el Estado central como el sistema de partidos tendrán como reto el *transferir e intercambiar* porciones de *poder y autoridad* con todas las regiones, impulsando, al mismo tiempo, cierto espíritu de unidad y soberanía nacional. De cualquier manera, también está por verse el nivel y grado de coordinación entre el Estado, regiones, partidos, asambleas departamentales y participación popular semi-directa.

Lo nacional y lo regional-departamental son dos procesos simultáneos e interdependientes. La polémica en torno a la identidad nacional boliviana está inserta en la dinámica de uno de los principales problemas del poder y la reforma del Estado en Bolivia: la relación conflictiva entre democracia, transformación social, superación de la pobreza y desarrollo regional.

Por otra parte, delimitar y conceptualizar a las regiones no se refiere a la identificación de los mapas de división político-administrativa departamentales, sino a detectar tres dimensiones: a) económica, donde se condensan las redes del mercado; b) político-institucional, que se orienta hacia las exigencias que demanda la consolidación democrática; y c) sociológica, donde debe ponerse atención a la diversidad multiétnica en Bolivia. Estos tres elementos hacen un *todo integral* donde la idea de desarrollo regional se asocia a un proceso de cambio socioeconómico

de largo aliento que debe ser capaz, además, de producir poder y decisiones cuya finalidad última es el progreso de las regiones descentralizadas.

La nueva vitalidad política que tendría nuestro país con polos de poder local como los municipios, así como con el poder regional de las prefecturas, promoverá la participación de actores sociales regionales quienes, a través de la descentralización, tendrán en sus manos la responsabilidad de imaginar y diseñar sus correspondientes proyectos políticos y culturales en cada uno de los departamentos de Bolivia. Con la descentralización, el desarrollo nacional dependerá de la confluencia de dichos proyectos regionales y de cómo éstos puedan convivir con el Estado central a largo plazo.

Durante la puesta en práctica de las principales políticas descentralizadas de desarrollo, habrá que buscar un conjunto de equilibrios macro-sociales desde el Estado central, combinados con estrategias que intenten corregir las desigualdades inter-regionales. Es posible que en esta búsqueda, la acción de organizaciones de base regionales, a través de su participación política, sea de vital importancia.

En este esfuerzo ya se dieron los primeros pasos con la promulgación de la Ley de Participación Popular, sancionada en abril de 1994 por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta ley intenta corregir la tradición vertical del Estado Totalizador, otorgando una descentralización económica y administrativa para fortalecer los municipios, sean urbanos o rurales. La Participación Popular pretende fortalecer el desarrollo de las economías de base campesina, a través de una diversidad de acciones de desarrollo rural que permitan canalizar demandas diferenciadas de los distintos sectores de la población rural, articulando estrategias productivas precisas.

A partir de una vinculación entre distintas estrategias de desarrollo rural y la Ley de Participación Popular, la planificación participativa municipal constituye un proceso de amplia movilización social para organizar y gestionar el desarrollo, enfrentar la pobreza rural, asignar y garantizar el uso eficiente de los recursos de inversión y la provisión de servicios, operativizando las políticas de equidad e integralidad para un desarrollo más equitativo.

La Participación Popular define al municipio como el espacio apropiado para conectar la representación popular con la administración pública del Estado central. En este sentido, se transfieren nuevas competencias a los municipios, junto con los correspondientes recursos financieros. La ley permite distribuir, de acuerdo a un cálculo per cápita, los recursos de coparticipación para corregir las pasadas desigualdades en la asignación de recursos de gasto e inversión. Así se eliminaron las Corporaciones de Desarrollo –viejos órganos burocráticos del Estado Totalizador que se fundaron en la década del 60– para que sean las Prefecturas quienes se concentren en la administración de las regalías departamentales, debiendo atender con esos recursos la inversión en infraestructura física, planificación regional y asistencia a los municipios con quienes debe concertar para articular un proceso de desarrollo regional de corto y largo plazo.

Los gobiernos locales deben demostrar su contribución eficaz para combatir la pobreza, promover un desarrollo integral y, sobre todo, someterse a la fiscalización y a examen directo, mediante un trabajo mano a mano con organizaciones populares. La descentralización administrativa junto a la Participación Popular puede ser efectivamente un instrumento para democratizar el poder, los recursos y las oportunidades globales en materia de desarrollo regional. Sin embargo, independientemente de la aprobación de nuevas leyes, se requiere mucha capacidad política para consensuar acciones entre todas las regiones, construyendo, asimismo, una voluntad nacional que haga gobernable y plausible la descentralización dentro de los marcos de una reforma del Estado en Bolivia.

El éxito de la descentralización en Bolivia está fuertemente ligado a las previsiones por lograr una institucionalidad regional para la ejecución de políticas. El desafío radica en cómo reproducir al Estado desde las regiones, no al Estado Totalizador y autoritario que rigió el patrón de acumulación y cultura política a partir del 52, sino reproducir a *otro* Estado eficiente que ejecute políticas específicas de desarrollo para todos los grupos sociales de distintas regiones. Es decir, se requiere de la organización y preparación de una estructura institucional departamental, junto con una compacta voluntad política que reciba las competencias del nivel central; aquí, las Prefecturas, necesariamente, deberán modernizarse y aspirar a la máxima eficacia, pues uno de sus objetivos será insuflar de vitalidad regional a los departamentos, estableciendo instituciones estratégicas. La descentralización, como parte de una reforma estatal, obliga a que las Prefecturas ejecuten inversiones productivas de largo aliento para los departamentos, actuando con un amplio criterio de justicia substantiva, evitando todo tipo de privilegios y promoviendo un sentido de globalidad.

La descentralización en Bolivia exige fortalecer y racionalizar al máximo la administración prefectural generando una capacidad institucional regional sostenible, tanto desde el ámbito público como privado. El nivel deliberativo de las Asambleas Departamentales deberá forzar a que sus representantes tengan una amplia capacidad planificadora y negociadora, evitando repetir las calamidades del Estado Central; es decir, verborrea inútil y favoritismos que tiendan a congelar cualquier logro solamente para las ciudades principales.

Una vez descentralizado el país, es importante preguntarse ¿cuál será la estrategia prefectural en materia de modernización institucional? ¿Cuáles podrían ser los planes de inversión en el

mediano y largo plazo? ¿Cuáles serían los instrumentos operativos y las estrategias regionales de desarrollo sostenible que podrían ejecutar los poderes regionales?.

Actualmente, la matriz institucional de cualquier departamento muestra un conjunto de instituciones aisladas e inorgánicas entre sí, ejecutando programas que en la mayor parte de los casos se superponen o contradicen, repitiendo acciones sin evaluación de resultados, concentrando los beneficios en las ciudades-capital y generando grandes vacíos o pequeños remiendos en los lugares alejados. Las Prefecturas todavía no poseen mecanismos institucionales que garanticen la unidad de acción y una autoridad con capacidad de dirección que organice al conjunto departamental. El peligro inmediato de estas deficiencias es la irracionalidad en el uso de los recursos financieros e institucionales del sector público, y la persistencia de un Estado central que no puede corregir los desequilibrios interregionales.

El proceso de descentralización tendrá que enfrentar un conjunto de metas sobre la base de estrategias realistas. Por ahora el clima es incierto pues no sabemos cómo reaccionarán los actores sociales y políticos una vez que asuman a conciencia una verdadera reforma estatal para superar años de malos hábitos heredados de la Revolución Nacional. Tampoco sabemos cuán solvente será un consenso político entre el gobierno central, sistema de partidos en su conjunto, comités cívicos, etnias, organizaciones populares y gobiernos locales ¿Cuán serias y viables serán las políticas de desarrollo y modernización regional? Nuestro país cambiará profundamente con una descentralización que otorgue *poder* y decisiones políticas autónomas para las regiones, ya que desde la instauración del Estado del 52 hasta el advenimiento de la democracia, en Bolivia siempre está presente la posibilidad de un nuevo liderazgo regional con amplias posibilidades de generar inéditas sociedades regionales-departamentales.

El desarrollo regional en Bolivia debería concebirse como un proceso de cambio social sostenido e incremental, cuya finalidad última es el progreso de sus regiones. Más concretamente, el desarrollo regional presupone crecimiento económico dentro de un marco estratégico nacional, y que las Prefecturas de departamento, así como los municipios, se esfuercen por lograr:

1. Mayor autonomía decisional.

2. Creciente capacidad regional de captación y reinversión del excedente.
3. Creciente proceso de inclusión social.
4. Creciente percepción colectiva de pertenencia regional.

En este sentido, las regiones podrían organizar a sus agentes sociales e institucionales para proyectar un horizonte político que posibilite a cada región jugar un nuevo papel en el desarrollo boliviano, fomentar la producción para la exportación, invertir en capital humano, lo que significa fortalecer las escuelas, colegios y universidades, prever el uso adecuado de los recursos naturales y, lo más determinante, modernizar las instituciones públicas y privadas con el propósito de consolidar un proceso transformador para la eficacia institucional, competitividad y profundización democrática.

### **La Revolución Nacional como el péndulo que baila entre la búsqueda y el derrumbe de la modernidad**

Durante dos siglos hemos vivido bajo un modelo y al calor de un concepto muy unificado del mundo, de la sociedad y del individuo. Este modelo, que podemos llamar *iluminista*: el modelo de la modernidad, afirmaba que el mundo está dominado por leyes racionales que la ciencia era capaz de descubrir.

La sociedad debía ser creada por este afán de conducta racional que inspira los ideales de libertad e igualdad, lo que significaba un concepto político en el sentido aristotélico. La idea clásica entendía que la sociedad real, lo que a veces llamamos la sociedad civil, es el mundo de la desigualdad, el mundo de la tradición, el mundo del privilegio. El pensamiento moderno, empezando con los grandes filósofos políticos como Maquiavelo, Hobbes, Rousseau nos enseñó que por encima, y en gran parte *contra* esta sociedad civil, había que crear una *sociedad política* sobre la base de la soberanía popular. La sociedad civil se asentaría, entonces, en el principio del individualismo universalista<sup>61</sup>.

La idea apunta a destruir las estructuras anteriores, convirtiéndolas en una tabula rasa para después construir un orden social racional a través del cual se logre un desarrollo también racional a través del aprovechamiento del conocimiento, de los recursos naturales y humanos.

Todos éstos constituyen objetivos que irían a la par con la individualización de la existencia personal y la liberación de todos los aspectos de la personalidad.

Así se va imponiendo el racionalismo en la visión del universo. Racionalismo en la visión de la sociedad, racionalismo en la visión de individuo. Éste tiene que construirse a través de un *esfuerzo* y mucha *disciplina*, dos palabras que todavía se emplean en la vida escolar, cuyo resultado inmediato sería, finalmente, el triunfo de la razón sobre las pasiones. Educación dura, más bien represiva, para formar esta imagen de hombre racional. Este aspecto es esencial: la unidad en la visión del mundo cuyo eje es el racionalismo.

Otro aspecto importante, tal vez tan importante como el primero, es una visión que podemos llamar *revolucionaria*, pues insiste en la discontinuidad. No hay continuidad entre el mundo tradicional y el mundo moderno.

Los primeros países pioneros en la construcción de la modernidad, es decir, Holanda que vino primera en casi todos los campos, Inglaterra, Francia o Estados Unidos, empezaron su vida moderna a través de una revolución que a veces era una guerra de independencia o la instauración de un nuevo orden.

El mundo Latinoamericano ha recibido esta visión de Francia o Estados Unidos. Visión dura que indica que el mundo moderno se crea a través de una ruptura, de una lucha social entre los agentes del progreso y de la razón y otros agentes que son: o defensores de la tradición u obstáculos a la racionalización.

Por supuesto, hubo dos grandes escuelas de pensamiento y de acción. Para algunos el hombre educado con responsabilidades económicas y con propiedades era más racional y tenía que superar las resistencias tradicionales de los trabajadores. Para otros, los adultos racionales eran quienes debían superar las debilidades de los niños que se masturban. Los hombres racionales debían dominar a las mujeres histéricas y, por lo tanto, los europeos tenían que dominar el resto del mundo considerado salvaje.

Así se tiene una visión conflictiva y brutal, visión que ha determinado una separación cultural completa entre lo que aparece por el lado de la razón y lo que parece oponerse a ella.

Esto es esencial, primero establecer una vinculación fuerte entre la *unidad* en la visión del mundo de los racionalistas; y segundo, establecer el carácter combativo, militarizado y de defensa de la razón contra aquellos que aparecen, por diferentes motivos, como enemigos de la razón.

En la Revolución Nacional del 52, lo que se impuso fue una modernidad que pretendió llevar adelante su propia concepción iluminista de transformación. La revolución nacional puede muy bien entenderse como un acto político donde el iluminismo no es otra cosa que la mezcla entre mestizaje, integración nacional y alianza de clases.

En el pensamiento sociológico, eso se ha traducido a través de un pensamiento clásico muy evidente durante siglos, el cual consideraba lo siguiente: una transformación en la definición del bien y del mal que antes estaba impuesta por la tradición o que se suponía venir de una ley divina. Esta definición fue transformada por el pensamiento social que dijo: lo que es bueno es aquello útil para la colectividad, para el funcionamiento y fortalecimiento de aquel mundo racional. Lo que es malo, es aquello disfuncional porque es egoísta o irracional.

Esta concepción moderna ha afirmado con una fuerza muy grande que el ideal del individuo es un ideal social. Entonces se pensó, por lo menos, en dos grandes concepciones: la visión de una sociedad de ciudadanos y, más tarde, la visión de una sociedad de trabajadores. Se trata en realidad de la misma apreciación con dos tipos de sociedades distintas porque en el caso de los ciudadanos, la idea se refiere a una sociedad buena que se identifica con su auto-creación como sociedad de ciudadanos.

Las palabras que se emplearon, y que todavía se emplean, son la Nación y la República. La Nación se entiende, no en el sentido de colectividad con la misma experiencia histórica, sino como comunidad de ciudadanos libres. Este concepto de Nación se expande en la Inglaterra del 1688 y Francia 1789.

La sociedad de los trabajadores significa una sociedad identificada con su actividad, con su capacidad de creación y transformación. La liberación del individuo y su autorrealización en este modelo clásico racional se da en términos de *función cumplida*.

La idea de ciudadanía y la idea del trabajo se unen en el concepto de *pueblo*, que abarca el concepto de Nación y República. Así nace un nuevo orden *autocreado*. Una sociedad libremente creada. Este es el modelo clásico que también supone, a nivel puramente sociológico, el tema básico de la correspondencia entre las normas institucionales de una sociedad y las motivaciones interiorizadas por los individuos.

Una sociedad funciona bien cuando los individuos han interiorizado las normas de la sociedad y cuando las normas de la sociedad corresponden a demandas, después, institucionalizadas. Por esto se habló clásicamente de socialización, para definir la educación, sea familiar o escolar, y para controlar que todo marche bien en favor del sueño racional.

### **La modernidad se hizo añicos de todos modos**

El mundo de la modernidad como modelo se ha derrumbado. Este derrumbe podría ubicarse en tres campos. Primero, el campo propiamente intelectual: la historia de las ideas. Durante la segunda mitad del siglo XIX hubo una transformación profunda. Qué se dijo o descubrió: básicamente que entre el individuo y la sociedad no hay, ni paralelismo, ni complementariedad, sino *oposición*.

Son dos las grandes figuras intelectuales que han introducido esta revolución cultural, uno en cierta manera discípulo del otro. Estos dos hombres son: Frederic Nietzsche y Sigmund Freud. Freud es más conocido y más orientado hacia lo que fueron los desarrollos del pensamiento. El punto de partida de Freud es la existencia de una oposición fundamental entre el mundo del deseo y el mundo de la realidad, entre la libido y la ley. Entre el *Id* y el *super ego*.

Expresiones que son, a la vez, muy nietzscheanas. Por ejemplo, Nietzsche combate a su enemigo central que es el cristianismo, diciendo que la moral cristiana quiere subordinar el individuo a la colectividad, mientras que la voluntad de poder es su opuesto y hay que liberarla.

Esto representa una transformación brutal, pues anima a un inmenso movimiento intelectual y cultural que se llamó el pesimismo cultural, dominando en Viena a fines del Siglo XIX.

La sociología, a través de Emilio Durkheim y Max Weber, contribuyen a este debate. Durkheim afirmó que la modernidad significa no solamente progreso sino también un profundo

desarraigo, anomia, suicidio..., crisis de los fenómenos que vemos todos los días. Weber termina su libro famoso sobre la formación del capitalismo y el espíritu protestante diciendo: el mundo moderno, el mundo secularizado, es como una *jaula de hierro*. Así se llega a la visión de un mundo quebrado y lleno de contradicciones, muy lejos de la visión optimista del siglo XVIII o de los positivistas del siglo XIX.

La segunda transformación: si se mencionó el concepto de Nación anteriormente fue porque precisamente en este momento, el concepto de Nación cambia de contenido. A partir de 1848, durante las revoluciones de Europa central la idea franco-británica de la comunidad de ciudadanos libres será reemplazada por la idea de la herencia histórico-cultural.

A fines del siglo XIX, en Alemania, Francia y después durante el siglo XX, es la idea de tradición histórico-cultural que busca imponerse, insistiéndose en la especificidad de una raza o de una nación, de una etnia o de un pueblo, no importan aquí las palabras.

El tercer elemento importante. A partir de este momento dejamos de vivir en una sociedad de producción. Entramos poco a poco en una sociedad de consumo, incluso si no tenemos mucha capacidad de consumir. Seamos pobres o ricos, vivimos en una sociedad económica que no está más dirigida por la idea tayloriana racionalista, sino por la demanda.

El mundo va transformándose en un conjunto de sociedades de consumo y mercado; sin embargo, entonces, hoy día el concepto de producción, tan dominante en la primera mitad del siglo XIX, simplemente se derrite y pierde importancia frente a la idea del mercado mundial. Aquí se retorna nuevamente al pesimismo cultural, a la transformación del concepto de Nación y a la decadencia del concepto de sociedad industrial. El resultado inmediato no es otra cosa que el fin y la ruptura del modelo moderno racionalista-iluminista.

### **¿Hacia donde brincan las astillas del derrumbe?**

Durante este último medio siglo, la tendencia fundamental de nuestro mundo ha sido, concretamente, la descomposición progresiva y agobiante del modelo racionalista. Así observamos la famosa globalización del mundo, ¿qué significa esto?<sup>62</sup> Significa, a nivel más profundo, el triunfo de lo que Max Weber anunciaba hace 100 años como la *racionalidad instrumental*<sup>63</sup>.

Hay que entender claramente que el concepto de racionalidad instrumental se opone al concepto anterior de racionalidad substantiva, cuya visión desde el siglo XVII e incluso desde el pensamiento griego, era la referencia a un modelo racional en su contenido. Un mundo racional debía ser un mundo científico.

Ahora bien, la racionalidad instrumental significa que los principios propugnados por aquélla pueden ser utilizados, tanto para construir bicicletas, para organizar una red de prostitución o para eternizar el narcotráfico. Es decir, el contenido no importa más, sino que se trata de adaptar, racionalmente, medios a fines sin pronunciarse nunca con un sentido crítico sobre los fines. Que hoy vivamos para sufrir las consecuencias de una industria de paz o una de guerra, no tiene nada que ver con los principios de la organización racional-instrumental de la producción.

Otro resultado de mayor importancia es que toda aquella imagen de la interiorización de las normas racionales por parte de los individuos también desaparece, el mundo es un mundo instrumental, una burbuja de signos. Entonces un mundo dominado por el consumo de los medios de comunicación de masas que no tienen nada que ver con las orientaciones de los actores; éstos ya no tienen más capacidad de interiorización de las normas en beneficio del hombre ideal, racional y científico, pues todo se convierte en una relación instrumental.

Lo que claramente estamos observando es el retorno de las definiciones del actor que pensamos desaparecidas desde el comienzo de la modernidad. Vuelven los nacionalismos pero también, y aún más, vuelven las religiones y vuelven las definiciones étnicas particularistas y excluyentes.

Durante tres siglos se ha afirmado y enseñado que la modernidad era definir a un ser humano *por lo que hace* y no *por lo que es*: carpintero, científico o tecnócrata de acuerdo con los parámetros que obedecía a la sociedad de trabajadores. Pero nos negábamos a definirlo como hombre, mujer, blanco, negro o indio.

Precisamente en el momento actual aquellas definiciones supuestamente modernas que catalogaban a los hombres por su función en una sociedad de producción se destruyen, tomando

su lugar las definiciones que afirman la identidad: yo soy hombre, mujer, homosexual, heterosexual, blanco, negro, indio<sup>64</sup>. Yo soy de tal o cual secta, de tal o cual región, de tal o cual Nación en el sentido ruso o alemán de la palabra.

El mundo de hoy es un mundo que ha perdido cualquier principio de integración. Habitamos el planeta de las cosas y del consumo, el mundo de la instrumentalización, el mundo de las identidades múltiples que ya no tienen nada en común.

Ahora, el mundo está dividido de dos maneras: culturalmente y socialmente. Socialmente es lo más sencillo; cuando uno habla de globalización, significa que hay integración de los mercados mundiales, lo cual es cierto, pero esto no significa de ninguna manera que todo el mundo participará de igual manera en este mercado, todo lo contrario.

En América Latina se han elaborado desde hace 30 ó 40 años conceptos como dualización, heterogeneidad estructural o marginalidad. Estos conceptos tienen ahora un valor universal y se puede hablar en cualquier parte del mundo de dualización, de heterogeneidad estructural, no de la misma manera, pero analíticamente es posible hablar de heterogeneidad estructural en Nueva York, París, San Pablo o México<sup>65</sup>.

Las sociedades nacionales cultivaron durante largo tiempo la idea de que era posible llegar a ser, poco a poco y con algunos obstáculos, sociedades modernas con un grado creciente de integración. En América Latina y Bolivia todos hemos vivido, desde la revolución mexicana, la revolución nacional del 52, la generación del 20 y desde la reforma de Córdoba hasta los años sesenta, con este convencimiento que ahora parece convierte en algo ridículo.

Lo que estamos presenciando es exactamente lo contrario; por esto es fundamental introducir un nuevo concepto que no es parte del vocabulario nuestro o del vocabulario sociológico. En consecuencia, es útil emplear la noción de *desmodernización* para entender este proceso de desmoronamiento. La desmodernización es un concepto que no es juicio moral, sino más bien descriptivo ya que asistimos a la “separación creciente entre el universo de la objetividad y el universo de las subjetividades”<sup>66</sup>.

Los actores se vuelven privados, las corrientes económicas, incluso en el mundo cultural, se vuelven abstractas, es decir, universales. Lo social, así como lo político tienden a desaparecer; en este sentido, lo nacional tiende a diluirse.

Nos encontramos, incluso al interior de la experiencia de cada uno de nosotros, con que hasta las seis de la tarde trabajamos en CNN, y después de las seis vamos a una secta religiosa, cosa común: Estados Unidos, Brasil o India. Hay un mundo de la vida privada y subjetiva con su propia visión porque ya no hay modelos sociales. La vida privada, sexual y familiar, puede definirse, y se definen más y más, fuera de cualquier tipo de normas a las que antes se aspiraba en el modelo racionalista.

Es impresionante la desaparición sumamente rápida de las normas sociales porque, por un lado, hay un mundo de la vida privada que también es un mundo de las culturas, de las herencias, de los idiomas, de las familias, de las memorias y, por otro lado, se encuentra aquel fantástico movimiento de intercambio de bienes, servicios, informaciones, mensajes y símbolos.

La postmodernidad, que tiene una fuerza grande en su lucha contra el historicismo, afirma: entre la creación cultural por un lado, y una situación social, económica, un grado de desarrollo económico, un nivel de riqueza, de urbanización, por el otro, no hay más relación. Entonces estamos en una situación similar a la ocurrida a fines del siglo XVIII, un período super-barroco que llamamos más bien *kitsch*, donde aquellos elementos creados en varias culturas pueden ser reinterpretados y apropiados por nosotros si nos gusta.

Sin embargo, parece difícil aceptar esta visión, aunque no puede negarse que es una realidad. El país que mejor corresponde a esta visión es, seguramente, los Estados Unidos que son, a la vez, el país central en el manejo de los mercados mundiales y el país del multiculturalismo más extremo, el país de las autopistas y de los ghettos.

La comunicación puede darse por medio de las redes del mercado o por la violencia. Esto representa la destrucción y desorganización más extrema de la sociedad que también la vemos en todos los países del mundo.

Existe otra alternativa de análisis y esta es el segundo gran modelo que se observa en el mundo actual. Hay una tendencia voluntarista muy semejante a lo que fue el nacionalismo modernizante de los siglos XIX y, en parte XX, tendencia que se convierte en más y más autoritaria; es decir, yo Estado movilizo una identidad cultural y recursos culturales como fuerza de desarrollo económico, entonces consigo homogeneidad y homogeneización, obtengo la idea de una cultura nacional que es el tema predominante en los nuevos países industriales de Asia.

El peligro obvio es el autoritarismo y la creación de un régimen político que, finalmente, considera el desarrollo económico como un instrumento para la creación o la defensa de su propio poder. Así, podemos llegar a la situación más extrema y más escandalosa: la de la limpieza étnica que se practica en Serbia y Bosnia. Aquí se masacra, se viola, se exilia a cientos de miles de personas, sencillamente porque no pertenecen al grupo supuestamente étnico que quiere formar su Estado nacional máximo.

El problema nuestro es, si no aceptamos el modelo nacionalista-cultural y autoritario de violencia, cómo enfrentar al mercado junto con el multiculturalismo. La pregunta central es: ¿cómo podemos rearticular un mundo desarticulado, cómo podemos lanzar puentes entre el mundo de los mercados y el mundo de la experiencia, el mundo vivido?

No hay una solución institucional propiamente social. El mundo racional que describí al comienzo no lo podemos crear nuevamente, no vamos volver a conocer la enciclopedia y las esperanzas kantianas del siglo XVIII. La única manera de revincular lo que ha sido separado es concentrarse en el nivel de la vida personal, ¿qué significa esto?

El ámbito de la vida personal significa la única experiencia en la cual yo puedo revincular y rearticular mi herencia cultural con mi participación en el mundo técnico-económico. En este mundo *desmodernizado*, roto, dividido en dos, la fuerza de recomposición es el afán, el deseo, el trabajo de cada uno de nosotros para construir una vida personal y una existencia individualizada; es decir, una vida que represente la síntesis única entre una cultura y un papel o participación en la vida tecno-económica.

Este es un primer punto que se refiere a la problemática del sujeto, lo cual significa la capacidad de un individuo –y tal vez también la capacidad de un grupo o una colectividad– para construir una experiencia rearticulante.

Por ejemplo, un tema más y más omnipresente en todos los países plantea cómo combinar la participación individual en la vida económica con la defensa de una identidad étnica o sexual. Yo soy trabajador emigrado, turco en Alemania, Argelino en Francia, Paquistaní en Inglaterra, etc. ¿Cómo se puede participar en esta actividad técnica y mercantil? Tener un trabajo, comprar mercancías, tomar el metro, etc, y a la vez, cómo mantener una identidad.

Este es un tema nuevo pues el modelo clásico lo rechaza ya que afirma: usted tiene que olvidarse del mundo tradicional, desnudarse, tomar una ducha y entrar al mundo racional. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer es pasar algunos años en una escuela, bastante racionalista, autoritaria y científica.

Ahora, posiblemente lo más humano sea algo totalmente distinto. Nuestra meta no es ni que cada uno se encierre en su cultura, ni que todos renunciemos a nuestra cultura para vivir un mundo globalizado, más o menos americanizado, sino que tengamos las oportunidades más reales posibles para ser culturalmente una cosa, y técnica o económicamente otra cosa. Para evitar cualquier malentendido, debo decir que no se trata de una meta o una visión estrechamente individualista.

Esta situación es una rearticulación que no se reduce, ni a un etnicismo cerrado, ni a un modernismo económico demasiado abierto. Es la posibilidad de crear una nueva sociedad reorganizando y reconstruyendo la identidad.

Este análisis está centrado en el sujeto personal y en la libertad personal y, a la vez, en una doble lucha contra la dominación por el mercado, y contra la dominación ejercida por una comunidad cerrada en su tradición.

Otro elemento muy vinculado al primero es el tema del universalismo, tema que también significó la dominación del centro racional contra la periferia irracional, la periferia de mujeres,

niños o trabajadores. Y la palabra que se puede emplear para indicar la transformación total es: la recomposición del mundo.

Esto es fundamental ya que tampoco se trata de borrar el pasado para preparar el porvenir, todo lo contrario. Un país moderno es un país que sabe manejar la diversidad. Ésta no debe ser entendida en el sentido de las diferencias absolutas, es decir, o hay blancos o hay indios. Manejar la diversidad significa reconocer que cada individuo, cada grupo social, nacional y étnico es, en sí, un esfuerzo por *combinar* universalismo y particularismo.

El problema no es escoger el universalismo contra el particularismo o el particularismo contra el universalismo; lo que estoy diciendo corresponde exactamente a lo que se discute en el momento actual en Beijing.

No se trata de tener una visión puramente economicista y liberal; por ejemplo, liberar a la mujer puede significar también transformarla en una mercadería, en un mercado brutal. Tampoco se trata de aceptar la especificidad de una cultura mediterránea, asiática o aymara que domine a la mujer porque así lo manda la tradición específica de la historia. Se trata de buscar una vinculación entre un principio universalista y un principio de diversificación.

El debate entre el concepto de igualdad y el concepto de equidad tiene mucho que ver con este análisis. El concepto de equidad significa *igualdad de oportunidades*, es decir, se tiene que tomar en consideración la situación de alguien, según su cultura, y al mismo tiempo, reconocerle la igualdad.

Esta visión no está centrada en el individuo socializado. Es una visión centrada en su propia libertad a través de los métodos y las garantías institucionales de la democracia, la misma que no existe sin pluralismo y diversidad. Así se busca, entonces, la libertad del sujeto personal, su diversidad y garantías para el pluralismo, la conciencia de solidaridad, es decir, que todos seamos iguales en el sentido que todos somos gente que intenta construir su vida a través de una revinculación entre memoria cultural y una actividad cada vez más globalizada.

**El momento contemporáneo de modernización neoliberal: la trayectoria del gonismo**

Todavía existe un remolino de contradicciones y dudas para comprender en su real dimensión la crisis y caída de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre del año 2003. A pesar de haber dirigido el Estado con relativo éxito durante su primer gobierno entre 1993 y 1997, súbitamente todo se desmoronó porque su estilo de liderazgo mostró un serio agotamiento y el control de su propio partido fue víctima de tensiones internas que hicieron muy difícil el dominio coherente de la coalición de gobierno en la segunda administración presidencial, que comenzó con muchas expectativas en agosto de 2002. ¿Dónde están las raíces del hundimiento luego de mostrar la imagen de un reformista esclarecido desde 1990? ¿Cómo explicar que cuando Sánchez de Lozada asumiera con absoluta contundencia el mando del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), su energía política duraría solamente diez años?

Una vez que Sánchez de Lozada reemplazara al histórico Víctor Paz Estenssoro como líder del MNR en 1990, el caudillismo consubstancial a la cultura política en Bolivia reinsertó un nuevo culto a la personalidad y del apócope de Gonzalo: Goni, sobrenombre con que todos sus acólitos lo llamaban, se desgajó la denominación de una supuesta doctrina reformista: el *gonismo*, estandarte electoral y adjetivo que bautizaba a los nuevos dirigentes del MNR<sup>67</sup>. Los *gonistas* constituían una nueva tendencia de renovación que desplazaba a la doctrina histórica del nacionalismo revolucionario nacido en la década de los años cuarenta en el siglo XX. El *gonismo* se alineó también con el neoliberalismo económico y la presencia del empresariado privado en la política boliviana que declaraba abiertamente su deseo de convertirse en una élite destinada a controlar el poder.

La victoria lograda por el MNR en junio de 1993 con 35,6% de la votación nacional era, sin lugar a dudas, el símbolo de un éxito personal y de una sólida legitimidad. No sólo hizo brotar rencores disimulados en sus adversarios, sino también la sorpresa y esperanzas de gran parte de la sociedad civil, sobre todo de aquellos intelectuales y militantes de izquierda que después de haber perdido la brújula de la revolución fueron cooptados fácilmente por la doctrina del *gonismo* con el objetivo de llevar en alto las banderas del ajuste estructural de segunda generación, que para el caso de Bolivia tal segunda generación giraba alrededor de lo siguiente:

nuevas capacidades institucionales, alivio a la pobreza, participación y rendición de cuentas, establecimiento de un sistema regulatorio, efectividad de gobierno, reglas de juego claras para atraer inversiones externas y privatización de empresas importantes<sup>68</sup>. Sánchez de Lozada convenció con su proyecto de gobierno durante la campaña de 1993 y terminó llevando adelante un *Plan de Todos* con total holgura.

El treinta y cinco por ciento del total de los votos en la elección presidencial de 1993, fue el caudal electoral que acorazó al MNR con la mayoría absoluta: 69 representantes en todo el Congreso (17 senadores y 52 diputados); sin embargo, esta mayoría parlamentaria, por sí misma, no representaba el único aval para la implementación de las reformas *gonistas*, sino que debe agregarse la legitimidad internacional que le permitió financiar tranquilamente el *Plan de Todos*. Tanto la Reforma Educativa, como la Ley de Participación Popular y la Capitalización de empresas estatales fueron ampliamente solventadas y apoyadas febrilmente por los organismos multilaterales cuyos planes para aplicar reformas liberales de segunda fase después de los ajustes macroeconómicos en 1985, también coincidían con los planes de Sánchez de Lozada<sup>69</sup>.

El control parlamentario en 1993 tuvo un excedente más, pues el MNR logró un pacto de gobernabilidad con dos fuerzas políticas, en ese entonces importantes en el país: el Movimiento Bolivia Libre de Antonio Aranibar (MBL) y Unidad Cívica Solidaridad de Max Fernández (UCS). ¿Por qué no pudo el MNR convertirse en un partido hegemónico, capaz de generar un poder absoluto similar al del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano? ¿De qué manera el liderazgo de Gonzalo Sánchez de Lozada terminó destruyendo los viejos códigos ideológicos y las visiones del nacionalismo revolucionario como tendencia histórica y política en Bolivia? ¿Cuáles fueron los contrapesos para limitar las tentaciones del poder total que frenaron al MNR y cuál el contexto socio-cultural que no pudo ser influenciado por las reformas *gonistas*? Para las elecciones generales del año 2002, la candidatura de Sánchez de Lozada junto con Carlos D. Mesa Gisbert como Vicepresidente solamente lograron 22,5% de la votación nacional, lo cual obligó a conformar una coalición de gobierno sumamente grande y dispersa; es decir, esta vez ya no existía un *Plan de Todos* o programa de gobierno innovador que permitiera el

liderazgo incuestionable de Goni como presidente transformador o, por lo menos, como proposición alternativa para remontar las crisis de gobernabilidad provenientes de la guerra del agua en la ciudad de Cochabamba y los conflictos del movimiento sin tierra que se arrastraban del período anterior durante las gestiones presidenciales de Hugo Banzer y Jorge Quiroga entre 1997 y 2002.

Ni mayores reformas ni mejores planteamientos, sino solamente una ambición personalista por regresar al poder fue lo que caracterizó a Sánchez de Lozada que lideró una campaña internacional para desprestigiar a Banzer por su incapacidad de optimizar las reformas estructurales y por guiar una coalición de gobierno amorfa y fragmentada; sin embargo, una vez que Goni fue elegido presidente en agosto de 2002 cayó en similar desgracia porque sus aliados de gobierno como el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Nueva Fuerza Republicana (NFR) se repartieron de tal forma el aparato estatal que se hizo impensable la posibilidad de producir y administrar un conjunto de políticas públicas coherentes, pues cada partido caminó por su lado buscando réditos de corto plazo, fracturando una orientación clara y un mandato presidencial sólido.

El reto del *gonismo* fue simplemente detener la súbita irrupción del Movimiento Al Socialismo (MAS) con Evo Morales a la cabeza que terminó como el segundo candidato presidencial más votado en agosto de 2002; en este sentido, el posicionamiento de Sánchez de Lozada nació atrapado por la necesidad de impedir, a toda costa, el ascenso al poder del líder cocalero, antes que por una voluntad para articular un gobierno capaz de profundizar políticas importantes y ya establecidas como la Reforma Educativa, tremendamente cuestionada desde 1999; la Participación Popular, que para Goni no significaba la posibilidad de una mayor descentralización para el país y tampoco la conexión con gobiernos regionales autónomos como se plantearía después el año 2004; finalmente, su propia Capitalización desencadenó una tenaz oposición porque la comercialización de los yacimientos de gas cayó en un agujero de oscuridad y favoritismos hacia las empresas multinacionales, frente a una nueva ubicación de grandes sectores de la opinión pública que defendían la nacionalización de los hidrocarburos.

## **El camino hacia el poder**

La figura de Sánchez de Lozada nació y se desarrolló en un entorno plenamente democrático. El proceso político que tuvo lugar en Bolivia desde 1985 permitió al MNR ser un actor central en las negociaciones para articular gobiernos de coalición, de tal manera que el *gonismo* transmitió la idea de un liderazgo capaz de otorgar estabilidad al sistema, facilitar la implantación de consensos políticos y emitir signos de renovación para lo cual su acento inglés y mal uso del lenguaje español le dieron un toque pintoresco que hábilmente fue explotado como una novedad dentro de los medios de comunicación. A esto se suma que Goni estuvo convencido de considerar a las elecciones como una excepcional salvaguardia y el procedimiento mejor dispuesto para definir los límites y la titularidad del poder; en un comienzo Sánchez de Lozada fue efectivamente un líder demócrata pero quedó derrotado por su propia soberbia, anteponiendo egoísmos personales a costa de dejar intactas las raíces de la desigualdad en Bolivia para privilegiar solamente a los hombres poderosos de su entorno; mentalidad mezquina que demostró ser ineficaz para mantenerlo en el poder y convertirlo en un estadista de verdadera cepa liberal<sup>70</sup>.

Todos los partidos políticos, el sindicalismo y los grupos de presión de la sociedad civil, asumieron nuevas formas de hacer política, dejando atrás concepciones violentas de la misma porque todavía tenían legitimidad las condiciones de gobernabilidad y democracia pactada entre las principales fuerzas con posibilidades de llegar al poder. En este sentido, Sánchez de Lozada aprovechó el uso de la política, no como un escenario de guerra, sino como el tablado para la persuasión-manipulación y la permanente negociación, lo cual llevó a hacer uso de los llamados articuladores políticos donde sacaron la cabeza Carlos Sánchez Berzaín, apodado el *zorro* y Guillermo, *Chacho*, Justiniano; ambos recursos: negociación y manipulación, fueron los mecanismos más aptos para la incursión de Goni en el poder, de tal manera que el *gonismo* ingresó al sistema político dotándose de los mejores medios para influir dentro de la electoralización política y, por lo tanto, generó todas las circunstancias que entronizaron a la razón pragmática como el objetivo primordial para conquistar aliados o deshacerse de competidores incómodos dentro y fuera del partido<sup>71</sup>.

Este pragmatismo fue utilizado con maestría, tanto por el MNR como por el Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación (MRTKL). La presencia de Víctor Hugo Cárdenas como candidato en la fórmula del MNR en 1993 fue la expresión de una estrategia que ya no ponía en marcha intereses absolutos e irreconciliables, sino razones electorales acompañadas de una buena porción de cálculos para maximizar resultados con los menores esfuerzos o, en su caso, para minimizar pérdidas y maximizar logros en condiciones adversas<sup>72</sup>.

El MNR acaudillado por Gonzalo Sánchez de Lozada, dejó atrás para siempre la hiperideologización de la vieja guardia del partido; es decir, clausuró políticamente los últimos estertores del nacionalismo revolucionario, al mismo tiempo que persuadió a la sociedad de la posibilidad de combinar ajuste económico y modernización liberal, justicia social y desarrollo humano, privatización de sectores estratégicos de la economía y capitalización de beneficios que, supuestamente, llegarían a cada ciudadano mayor de 18 años; al mismo tiempo, la suerte del *gonismo* no fue echada en las elecciones presidenciales de 1993, sino en la convención movimientista de 1990, año en el que se eligió a Goni como el nuevo jefe nacional del partido y donde emergió un relevo generacional: el *gonismo* se impuso sobre el *movimientismo*. Con las nuevas líneas liberales establecidas para junio del año 1993, tenían muy poco que decir los viejos comodines como Walter Guevara Arze, Ñuflo Chávez Ortiz, Pérez Alcalá, Alfredo Franco Guachalla, Luis Antezana Ergueta, Álvaro Pérez del Castillo, Walter Costas Badani, Lidia Gueiler o Ciro Humbolt.

El nuevo estilo de convencer en política tuvo en Sánchez de Lozada a un símbolo partidario cuya oratoria se vio signada por el sentido del humor, la concisión en las propuestas del *Plan de Todos* y los cuestionamientos a la izquierda boliviana que cayó en la trampa del espíritu modernizador del *gonismo* dejándose absorber y convirtiéndose en un nuevo grupo de fieles impolutos. El *gonismo* rompió así con el dramatismo y la monumentalidad del discurso político tradicional; sus mensajes poco politizados y desideologizados, se complementaron con un equipo de asesores de formación tecnocrática que guardaba semejanzas con lo ya hecho por Paz Estenssoro durante su último gobierno en 1985. El colofón de la razón pragmática *gonista* en el MNR rezaba así:

gobierno con el MNR y aun a pesar del MNR que archivaba sus posiciones nacionalistas para asumir una identidad americanizada.

### **La ausencia de hegemonía**

Una serie de notas de prensa y augurios parcializados en favor del MNR entre 1993 y 1996, advirtieron sobre la posibilidad de que este partido se convierta en una fuerza política dotada de un proyecto hegemónico de largo aliento; mucho más después de que el MNR logró ganar en ocho de las nueve capitales de departamento en las elecciones municipales de diciembre de 1993 porque concentró el 34,5% de la votación nacional, un rotundo triunfo que luego se desvanecería para las municipales del año 2004 cayendo al 6,7%. De todos modos, al aprobar sus principales leyes, Sánchez de Lozada empezó a soñar con la posibilidad de prorrogarse como dominador del juego de reformas y, en este sentido, el *gonismo* se tiñó de una mentalidad presuntuosa que lindaba con la tentación de un predominio absoluto pues había comprado un gran número de los corazones de periodistas, élites intelectuales y empresarios.

La realidad fue más contundente que cualquier delirio y el *gonismo* no pudo convertir al MNR en un partido que recorriera los mismos caminos que el PRI mexicano. Esto no era posible por tres razones:

- Primero, debido al comportamiento electoral inestable de la ciudadanía; hoy existe una fuerte desideologización en la política lo cual hace que las fuerzas partidarias gocen de un estado gelatinoso que impide la cristalización masiva de lealtades y afiliaciones partidistas, este fenómeno muestra a una población electoral flotante y una lógica del interés clientelista en buena parte de los votantes, haciéndose difícil que un solo partido arrastre victorias fenomenales y consecutivas en las elecciones presidenciales a lo largo del tiempo<sup>73</sup>.
- Segundo, no hubo un proyecto explícitamente hegemónico en el *Plan de Todos*.
- Tercero, las características peculiares del sistema político boliviano tienen una tendencia donde solamente concurren mayorías relativas en el ámbito parlamentario; por lo tanto, es un sistema que no produce la hegemonía política de un partido, ni siquiera de una

coalición de fuerzas partidarias. Los pactos de gobernabilidad siempre han sido muy volubles y se disolvieron fácilmente cuando terminaron diferentes períodos presidenciales.

Aunque algunos sectores de la oposición que venían de Conciencia de Patria (Condepa) elevaron un grito de desesperación cuando criticaron la Ley de Participación Popular planteada por Sánchez de Lozada, no fue factible un dominio hegemónico, sino que muchos se confundieron, cegados por la ira, al pensar que la política de municipalización ejecutada por el gobierno *gonista* podía extender un control total del MNR hacia las bases de la sociedad, espacio donde tendría lugar un imaginario renacimiento de los viejos comandos movimientistas. Si bien el MNR y su alianza de gobernabilidad se convirtieron en un centro articulador de la política boliviana, éste fue un resultado lógico de todo el proceso electoral de 1993; la alianza MNR-MRTKL consiguió 36 por ciento de los votos, de manera que, en relación con la votación de los partidos restantes, era evidente que todas las alianzas y negociaciones para capturar la mayoría congresal tenían que girar alrededor del MNR.

De cualquier manera, nunca hubo una aspiración hegemónica del *gonismo* a partir del *Plan de Todos* que solamente funcionó como un proyecto de gobierno. La hegemonía constituye una *cadena total de legitimación*, capaz de abarcar muchas dimensiones de la vida colectiva, un verdadero equilibrio entre las acciones del Estado para imponer su autoridad y coerción, y donde la sociedad civil cree firmemente en la eficacia de las instituciones y en la dirección definida por los líderes políticos que detentan el poder. Así, se desemboca en un aparato de hegemonía centrado en las élites que mandan, desde donde brota toda una visión de país y de nación como un pacto general de dominación destinado hacia el largo tiempo<sup>74</sup>. En todo caso, la única hegemonía implantada en Bolivia fue aquella inyectada por el Consenso de Washington; es decir, el peso de las políticas de mercado bajo el control de los organismos financieros multilaterales<sup>75</sup>.

Ahora bien, una vez tomadas las riendas del gobierno, la alianza MNR-MRTKL reclutó un personal burocrático-estatal donde coexistió una mezcla bastante heterogénea de tecnócratas relacionados con Maestrías para el Desarrollo, un programa de postgrado instalado en la Universidad Católica Boliviana, funcionarios identificados con tendencias comunistas obsoletas, pasando por socialistas dubitativos y llegando, inclusive, hasta indianistas que postulaban volver a las formas políticas y sociales de organización de los ayllus andinos, especialmente en la Secretaría Nacional de Participación Popular. El *gonismo* simplemente consiguió convertirse en el centro umbilical que articuló las demandas y algunos temas centrales que, en aquel entonces, tenían efervescencia en la política boliviana.

La teoría del partido predominante en la escena política al estilo del PRI permite afirmar que una vanguardia partidaria puede imponer, por la vía estatal, un proyecto político de dominación. El *Plan de Todos* no era lo suficientemente consistente en todos los flancos de su estructura por lo que estuvo fuera de lugar hablar del MNR como un prototipo liberal del PRI en los años noventa; los éxitos del MNR residieron en la dramaturgia ante los medios de comunicación y las relaciones públicas porque sus dirigentes mostraron una singular viveza criolla para vender una imagen modernizadora a la comunidad internacional, tanto desde el ámbito gubernamental como desde el escenario de instituciones privadas productoras de ideas como la Fundación Milenio, propiedad del *gonismo*; por lo tanto, “las reformas del periodo 1993-1997 se destacaron en el fondo por su modestia (como la Ley de Participación Popular, que es un estatuto de municipalización) o por su carácter enrevesado y sospechoso (como la privatización de las grandes empresas estatales, que significó la venta de las mismas por la mitad del precio a empresarios de dudosa solvencia)”<sup>76</sup>. Todo esto se ejecutó con la aquiescencia de conocidos intelectuales de izquierda y aquellos cabecillas autodenominados progresistas que fueron cooptados con mucho dinero por el gobierno del MNR y encabezados claramente por Carlos D. Mesa Gisbert quien fuera luego Vicepresidente de Sánchez de Lozada en agosto de 2002, abandonándolo en circunstancias trágicas y turbias el 13 de octubre de 2003.

La fuerza de la coalición MNR-MRTKL en el escenario parlamentario no se tradujo en una energía de gobierno; es decir, en cierta capacidad de decisión dentro del marco de un tiempo apropiado porque el *gonismo* demostró una lentitud impresionante para tomar decisiones y acelerar ciertos cambios; su propia agenda de capitalización se quedó corta al no poder vender la empresa de Fundición Metalúrgica Vinto y casi fracasar la capitalización del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB)<sup>77</sup>. El potencial de rendimiento gubernamental fue afectado por la propia reestructuración del Poder Ejecutivo que, en un principio, dio la impresión de introducir mayor coordinación y racionalización para la toma de decisiones; la concentración del poder fue tal que no aumentaron los niveles de coherencia, eficacia y efectividad porque solamente tres Superministerios se atragantaron con la potestad acumulada como Desarrollo Humano, Desarrollo Sostenible y Capitalización sin conseguir delegar funciones a los secretarios y subsecretarios; es más, inclusive el propio Sánchez de Lozada, debido a su fuerte autoridad política dentro del gabinete, centralizó todas las atribuciones bloqueándose el desenvolvimiento de una actuación más eficiente, justamente por un exceso de personalismo, lo cual hizo que todas sus reformas se desgastaran como el árbol de la higuera que no florece pero produce algunos frutos dulces; es decir, mientras se suministren créditos internacionales<sup>78</sup>.

La Inversión Extranjera Directa (IED) fue auspiciosa durante el régimen de Sánchez de Lozada que aprovechó las favorables reglas de juego marcadas por la Ley de Inversiones y Capitalización, lo cual convirtió a Bolivia en el país andino que más inversión de capital extranjero recibió entre 1990 y 1998 (ver Cuadro 1). Sin embargo, dichas inversiones se orientaron especialmente hacia la explotación de materias primas como petróleo, gas, minerales y el usufructo de servicios, sin fortalecer la exportación de productos bolivianos con valor agregado. En todo caso, para algunos analistas económicos, los enormes volúmenes de capital externo no son buenos síntomas de desarrollo en los países pobres, sino la señal de una terrible debilidad en los mercados financieros y de capitales; el dinero fácil se transforma así en un lastre que perjudica al mayor dinamismo del comercio externo y la inserción más estratégica en los mercados, tanto de la región latinoamericana como del resto del mundo<sup>79</sup>.

**Cuadro 1. Flujos de Inversión Extranjera Directa como Porcentaje del PIB**

País	1960-1974	1975-1989	1990-1998
Bolivia	-1,3%	0,4%	4,6%
Perú	0,1%	0,3%	3,1%
Venezuela	-0,5%	0,1%	2,5%
Ecuador	1,4%	0,5%	2,5%
Colombia	0,5%	0,9%	2,4%
Argentina	0,2%	0,4%	2,2%
Brasil	0,6%	0,6%	1,2%
Chile	-0,2%	0,6%	5,1%
México	0,6%	0,8%	2,3%
Uruguay	0,0%	0,6%	0,5%

Fuente: Banco Mundial, **Indicadores del Desarrollo Mundial, 2000**.

Los créditos internacionales para financiar la Reforma Educativa y Participación Popular junto con la inversión extranjera, tropezaron con el eterno patrimonialismo estatal, de tal manera que el *gonismo* estuvo imposibilitado de modernizar el Estado, entendiendo a la modernización como una racionalización; es decir, la definición clara de medios y fines, los mismos que, a su vez, están adecuados con los objetivos y metas planteados por el programa de gobierno pero Sánchez de Lozada se contentó con la llegada feliz de recursos frescos sin dirigir la orientación lúcida de competencias y funciones en los ministerios. Hubo profusión de muchos reyes chiquitos y faltó coordinación solvente, lo cual no condujo al aumento de la eficiencia en las políticas públicas<sup>80</sup>.

Los ministerios se manejaron como feudos de la coalición gobernante y el trabajo tendió a ser disperso y heterogéneo sin construir un Estado con alta capacidad normativa, es decir,

legislativa, y con potestad de hacer cumplir las leyes que se dictaron en el campo económico. Si bien el Estado comandado por el *gonismo* fijó algunas pautas básicas para el desarrollo de la economía no tuvo la conciencia para redistribuir los beneficios del proceso económico.

En la medida en que nuestro sistema de gobierno es un *presidencialismo parlamentarizado* donde el Congreso posee la atribución de elegir al Presidente de la República y la legitimidad de éste proviene de los acuerdos y coaliciones parlamentarias, dicho sistema conduce a una gobernabilidad que está sujeta al fortalecimiento del parlamentarismo<sup>81</sup>; sin embargo, el *gonismo* hizo que sus famosas leyes de Reforma Educativa, Participación Popular y Capitalización sean impuestas sin una reflexión detenida y un análisis sobre sus riesgos y requerimientos en función de los intereses de largo plazo para el país. Todas las reformas fueron aprobadas por imposición, incluso valiéndose de un estado de sitio en 1995 y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo pasó por encima del Legislativo aprovechándose de su mayoría parlamentaria.

El Parlamento nunca estuvo a la altura de las exigencias políticas y fue despreciado por el *gonismo* que se deleitó con la superflua lógica de litigio en que terminaban las discusiones para analizar la Ley de Capitalización, siendo muy evidente que el Congreso no podía dar pasos contundentes dentro de la modernización del Estado para acompañar las reformas y careciendo, al mismo tiempo, de la capacidad de modernizarse a sí mismo.

En consecuencia, los asesores de la Fundación Milenio y del entorno de Sánchez de Lozada concluyeron que el Ejecutivo tenía la misión de asumir iniciativas para forzar sus planes; sin embargo, cuando solamente el Poder Ejecutivo se encargaba de conducir todas las riendas del poder al observar que el Congreso actuaba de manera débil y poco imaginativa dentro de la legislación, el proceso *gonista* dio lugar a una peligrosa asimetría para el proceso democrático que exacerbó el dominio del Poder Ejecutivo para opacar al Legislativo, desigualdad que se mantiene hasta nuestros días y no es una coincidencia que su Vicepresidente Carlos D. Mesa Gisbert, quien reemplazó a Sánchez de Lozada en el poder cuando éste dimitió, actuara con el mismo desdén, esforzándose por desprestigiar y anular al Congreso Nacional entre enero de 2004 y mayo de 2005. El Parlamento tiene el deber constitucional de complementar y conciliar

iniciativas claves para el funcionamiento del Estado y la democracia, porque su función legislativa es más que la mera fiscalización; algo que el *gonismo* siempre descartó<sup>82</sup>.

### **El comienzo de las dudas**

Cuando se afirma que la democracia significa una certeza en las normas e incertidumbre en los resultados, las fuerzas políticas se encuentran en el terreno de la indeterminación, del azar y la casualidad; es decir, existe un conjunto legítimo de reglas de juego que norman las conductas partidarias otorgando una institucionalidad sólida y confiable al sistema político democrático pero donde el simple gusto y sabor de los partidos, así como las ciegas ansias del poder, deben someterse fielmente a los resultados inciertos al final de las elecciones. Así se impone la soberanía de la ley que declara posible el recambio pacífico de un gobierno (nacional o municipal) por los votos de la mayoría; en este sentido, cualquier elección es, en gran medida, una especie de *Juicio Final*.

Esta situación se impuso, como un balde de agua fría, sobre el MNR a través de los resultados municipales de diciembre de 1995. Perdió las elecciones en ocho de las nueve capitales de departamento; algo similar le ocurrió en el ámbito rural donde la posición más expectable era el segundo lugar; por ejemplo, sólo ganó en dos provincias tarijeñas: Méndez y O'Connor, mientras que no pudo imponerse en ninguna provincia de Pando, obteniendo también resultados insustanciales en las provincias de Potosí y Cochabamba. En las principales ciudades obtuvo solamente 23 concejales, mientras que en 1993 vencía como la primera fuerza nacional al ganar en ocho capitales con un caudal de 391.029 votos, cifra que representaba 46 concejales en las capitales de departamento.

Las elecciones municipales de 1995 mostraron a un MNR todavía popular ante los ojos de los intelectuales de la gobernabilidad, aunque convertido en un partido sin vocación hegemónica, o con ansias de una hegemonía, pero sin rostro. Su máquina partidaria había fallado en la organización de campañas para las capitales de departamento y en la promoción de liderazgos regionales; la deficiencia fundamental fue la falta de un jefe de partido en ejercicio con el

suficiente tiempo para seguir de cerca una estrategia electoral y con la capacidad para concertar los enfrentamientos entre algunos dirigentes de la élite política al interior del MNR.

En aquel entonces, Sánchez de Lozada era, al mismo tiempo, jefe nacional en ejercicio de su partido y presidente del país; sin embargo, su liderazgo centralista y autoritario no pudo involucrarse completamente en la dirección política de los procesos electorales. Desde la expulsión de Eudoro Galindo, las pugnas internas entre Carlos Sánchez Berzaín, Germán Quiroga, Edil Sandóval, Guillermo Bedregal, Guillermo Richter y el propio Juan Carlos Durán, mostraron que era imprescindible la presencia de un jefe conciliador que pueda, mediante un trabajo permanente, convocar a la unidad buscando también compromisos con dirigentes medios y bajos en función de la renovación partidaria para el fortalecimiento de nuevas figuras; sin embargo, el *gonismo* se negó a abrir originales espacios para fichas alternativas de liderazgo. El voto castigo por las promesas incumplidas de los 500 mil empleos, no representaba una explicación del todo valedera. Las razones se encontraban al interior del propio *gonismo*. El MNR, que llegó al poder promoviendo el liderazgo del binomio Sánchez de Lozada-Víctor Hugo Cárdenas, revelaba en diciembre de 1995 que no tuvo tiempo de gobernar para la modernización interna; es decir, no pudo reproducir otros líderes –propios y no de alquiler– que se proyecten hacia la conquista de 311 noveles municipios puestos en juego en aquellas elecciones municipales; un esfuerzo descomunal para cualquier partido, pero también una prueba de fuego que trataba de llegar hasta el último nervio del cuerpo humano nacional, lo cual exigía flexibilidad, democratización auténtica y un permanente proceso de autocrítica para aprender de los errores.

La puesta en marcha de los cambios *gonistas* no estuvo acompañada de centenares de rostros movimientistas que den la cara en función de construir liderazgos alrededor de las reformas. Líderes que convenzan, seduzcan, convoquen y, sobre todo, movilicen mediante un agotador trabajo bien capacitado; por el contrario, fueron notorias las figuras conflictivas y perturbadoras que promovieron buena parte de las hostilidades con la opinión pública y distintos sectores sociales; es el caso del maquiavélico Sánchez Berzaín, la imagen sospechosa de Germán

Quiroga, la retahíla de sofismas con Guillermo Bedregal o las poses de figurín en Guillermo Justiniano y Fernando Illanes.

Los resultados electorales también evidenciaron que los partidos políticos competían en un mercado abierto de ideas y opciones, donde hubo una distribución desigual de recursos políticos sin una inclinación básica, permanente y preestablecida hacia alguno de ellos; por lo tanto, la desacumulación electoral del MNR y el *gonismo* conllevaron, efectivamente, a una desacumulación política con miras a las elecciones presidenciales de 1997. ¿Quiénes serían los líderes presidenciables?, ¿cuál su viabilidad?, ¿cómo hacer que el partido movilice alternativas creíbles y rostros confiables? El ritmo propio que adquirieron los más de 300 municipios con la Participación Popular, así como las asambleas departamentales, fueron hechos políticos fundamentales que destruyeron las viejas lógicas de *bunker* y aparatos privilegiados de las élites partidarias, sea en el MNR o en cualquier otra organización política.

### **La renuncia de Blattmann y el choque entre liderazgos**

La renuncia de René Blattmann, ex Ministro de Justicia de Sánchez de Lozada, como aspirante presidencial del MNR en febrero de 1997, dio mucha tela para cortar sobre la confrontación entre lo que se denominó *gonismo* contra *movimientismo*. El sorpresivo alejamiento de Blattmann después de haber funcionado apenas veintidós días como candidato, marcó la controversia acerca de la viabilidad y aceptación real que tienen los candidatos independientes dentro de las estructuras partidarias de cualquier sigla política. El tropezón del MNR pudo haber afectado a cualquier otro partido en Bolivia; sin embargo, el fenómeno Blattmann mostró el núcleo de lo que son las tensiones, a veces irreconciliables, entre el liderazgo del político profesional y el liderazgo del político independiente, si es que a éste le cabe –y lo convence– el calificativo de político.

El *gonismo* había elegido a Blattmann porque parecía ser el más apto para ocultar las insuficiencias y cola de paja del partido. Además, tenía cierto prestigio al vender la imagen de un abogado que hizo algo por terminar con la retardación de justicia en el país. Al mismo tiempo, la no realización de una convención nacional movimientista a finales de 1996, hizo que Sánchez de

Lozada conceda una bendición unilateral para lanzar a Blattmann sin un consenso unificador al interior de todo el MNR. Todo resultó siendo un revés porque el flamante candidato independiente se negaba a capitalizar las virtudes del paquete de reformas *gonistas*, posiblemente por incapacidad para aguantar los esfuerzos de una campaña electoral, siendo muy sorprendente ver cómo un elegido de Sánchez de Lozada podía darse el lujo de rechazar la postulación y negarse a ser identificado con los supuestos cambios trascendentales.

Para los asesores de campaña todo estaba dispuesto y, ciertamente, resultaba inexplicable que Blattmann renuncie a las posibilidades de llegar al poder y seguir canalizando las ofertas de financiamiento externo; de esta forma, el *gonismo* se desmoronó desde su interior, mostrando que sus reformas no fueron lo suficientemente *internalizadas* por uno de sus mismos protagonistas como un conjunto de transformaciones posibles y deseables para Bolivia. El razonamiento vulgar de los operadores políticos y sus frías actitudes instrumentales terminaron por espantar a Blattmann, forzando la elección de otra ficha política, aún sabiendo que podían quedar en ridículo ante la opinión pública en pleno proceso electoral, como realmente sucedió.

Los problemas fueron más allá de un error de cálculo cometido por el MNR, pues la candidatura independiente expresó los síntomas de incomodidad con la política ya que Blattmann, en un abrir y cerrar de ojos, se desentendió de su liderazgo; asimismo, el abandono indicaba que el *gonismo* no conseguía mantener una linealidad de mando y manipulación sobre sus propuestas, las instrucciones partidarias y el control de su candidato. ¿El liderazgo político independiente fue otra mala creación del *gonismo* o el indicio de que Sánchez de Lozada no tuvo nunca el control total de su propio partido? El prestigio de las reformas importó muy poco porque predominaron las tácticas reduccionistas y rencillas entre personalidades pues la cúpula del MNR intentó, en múltiples ocasiones, contrarrestar el estilo de Goni tratando de politizar todas las relaciones con el Presidente, exigiendo la movimientización del aparato estatal y buscando imponer la lógica del poder; estas actitudes tenían, además, un objetivo fundamental: aniquilar el ascenso de las pretensiones independientes dentro del partido—<sup>83</sup>.

El *gonismo* buscó evaporar las condiciones estrictamente políticas de sus colaboradores, desvinculando a sus independientes de toda regulación partidaria; es más, Goni creyó en los independientes por el carisma profesional y tecnocrático sin buscar ninguna relación con la profesión de político ya que, teóricamente, el liderazgo independiente de Blattmann iba a transmitir las dotes de su oficio respectivo: abogado justiciero. En este sentido, se dio por sentado que el líder independiente, precisamente porque tenía carisma en su profesión, tendría también las suficientes guirnaldas de trigo limpio para convertirse en un personaje público y saltar así a la política, sobre todo si se gozaba del aval con que Goni protegió a algunos independientes.

La línea dura de los burócratas del MNR, expresada en Guillermo Bedregal, Juan Carlos Durán, Edil Sandóval y Germán Quiroga, consideraba que el liderazgo del político profesional debía ser, ante todo, el eje central y una prerrogativa partidaria, negándose a aceptar que al independiente le baste con haber sido cantante o cómico popular, juez conspicuo o deportista brillante para transformarse en líder político. Blattmann reveló el conflicto entre la ética de los principios del independiente moralista —que junto con una estrategia de campaña, iba a vender las bondades populistas del *gonismo*—, y la ética de los privilegios para el conjunto de políticos profesionales del MNR, sin asumir nunca nuevas visiones de modernización, un programa de gobierno que corrija los desaciertos de las reformas *gonistas* o planteamientos sobre “mecanismos deliberativos y consultivos para construir compromisos y consensos sobre las políticas de Estado de largo plazo”<sup>84</sup>; es decir estrategias institucionales que necesitaba el país en función de perfeccionar las condiciones de la gobernabilidad democrática.

### **El fracaso del MNR en las elecciones de 1997**

Los resultados electorales de julio de 1997 pusieron al MNR contra la pared y bloquearon todas sus aspiraciones de continuar con un liderazgo que le permita proseguir con las reformas *gonistas*. El MNR fracasó, tanto en los albores para la selección de candidatos presidenciales, como en su estrategia de campaña, impregnada de una polarización ineficaz y con un programa de gobierno carente de identidad; no ganó en ningún departamento de Bolivia, mientras que en

1993 había triunfado en ocho; las elecciones presidenciales de 1997 lo arrinconaron hacia el segundo lugar en cuatro departamentos de los nueve y apareció en el tercer puesto a nivel nacional en cuanto a número de parlamentarios.

Las pugnas internas terminaron por crear condiciones preelectorales inciertas desde la renuncia de René Blattmann, lo cual encendió la mecha para una profunda crisis de legitimidad del partido ante la sociedad. El MNR no pudo convencer al país que las reformas *gonistas* eran suficientes para reproducirse en el poder; las candidaturas de Juan Carlos Durán y Percy Fernández jamás pudieron personificar el carisma y representatividad que tuvo el binomio Sánchez de Lozada-Víctor Hugo Cárdenas.

Por otra parte, la gestión gubernamental del MNR entre 1993 y 1997 estuvo, inevitablemente, signada por una personalización del poder en el Presidente de la República. Este hecho ensombreció la posibilidad de encontrar un sólido candidato que reemplazara la imagen de Sánchez de Lozada para las elecciones presidenciales. La personalización del éxito en la aplicación de las reformas y en la conducción partidaria del MNR, conformaron una caja de resonancia donde todo crujido emanaba de la imagen y convergía en el liderazgo de Goni.

La incertidumbre ante el temor de no saber cómo sustituir al líder y asegurar la continuidad en el gobierno después de 1997, se convirtió en una pesadilla infernal para la cúpula y los mandos medios del MNR. Ya desde 1995 nadie sabía cómo fabricar un nuevo candidato que tuviera los perfiles *gonistas*. Las sombras de la personalización pronto se trastocaron en fantasmas, acabando por fracturar el sentido corporativo del partido y acentuando la división; mientras el *movimientismo* intentaba conducir la maquinaria partidaria en función de la victoria en las elecciones presidenciales, el *gonismo* tenía como principal horizonte de visibilidad la aplicación final de los reglamentos que necesitaba la Ley de Capitalización; sin embargo, *gonismo* y *movimientismo* no pudieron romper el cerco tendido por la individualidad de Sánchez de Lozada que se había convertido en Yo, el supremo, herencia mesiánica que se arrastraba desde Víctor Paz Estenssoro.

Cuando Paz Estenssoro dejó la jefatura oficial del partido en 1990, los medios de comunicación dictaminaban la sentencia *después de mí el diluvio*, aludiendo al desconcierto en que caería el MNR para superar el atávico patriarcalismo en la conducción política. Nadie intuyó que aquella sentencia iba a sellar la suerte del propio Goni para 1997. La presunta modernización del MNR en absoluto cimentó sus propias condiciones de renovación quedando anquilosada bajo el sello de una estructura incapaz de ir más allá del jefe que gobierna el rumbo de las élites partidarias<sup>85</sup>.

El primer subjefe del partido, Guillermo Bedregal, criticó a Sánchez de Lozada acusándolo de haber abandonado al partido por dedicarse exclusivamente a los asuntos del Estado; para Bedregal y su entorno palaciego, Goni jamás debió haber funcionado como jefe nacional del MNR y Presidente de la República simultáneamente. Pero, inclusive con Bedregal en la jefatura nacional en ejercicio, el MNR tampoco hubiera podido escapar de la personalización del poder ligada al liderazgo de Goni como encarnación del espíritu reformista.

Si bien la cúpula movimientista reconocía que Blattmann poseía una imagen representativa, se resistía a apoyarlo como un líder del partido, por lo que su candidatura fue bloqueada apenas se empezó a diseñar la campaña presidencial. El movimientismo quedó, entonces, aturdido ante dos alternativas: prorrogar el mandato presidencial de Goni como lo propuso el senador Guillermo Richter, o incorporar un candidato de repuesto que nacía ungido en el calor del tradicionalismo movimientista. Así prevaleció Juan Carlos Durán que puso en práctica una estrategia de campaña mecánica: hacer que la sociedad boliviana se identifique con las reformas ejecutadas durante la administración de Sánchez de Lozada y, por ende, lograr que la población también se identifique con el MNR.

El carácter de la candidatura de Durán nació del conflicto intrapartidario, mientras que la imagen de Goni en 1989 y 1993 recorrió un camino inverso: brotó del consenso. Goni tuvo una eficaz capacidad para crear su propia historia, escrita en los pasillos del gabinete económico y del Ministerio de Planeamiento de Paz Estenssoro. Este espacio configuró en Sánchez de Lozada una vocación para crear y gestionar instituciones estatales, simbolizando un modelo de

concertación, eficiencia y representatividad. Sánchez de Lozada fue la desembocadura remozada del proceso de recambio histórico que tuvo el viejo nacionalismo revolucionario entre 1985 y 1989<sup>86</sup>.

Juan Carlos Durán, en cambio, estaba anclado en una raíz diferente. Venía de los entresijos del Parlamento, un ámbito estrictamente político, de negociación perversa de lealtades partidarias, acostumbrado a los aquellarres, negociaciones secretas y enfrentamientos, igual que su gestión como Ministro del Interior en el último gobierno de Víctor Paz. Durán no pudo contrarrestar el estigma de líder político de segundo orden con el que fue visto por algunos sectores de la sociedad.

Es posible que el descalabro del MNR en 1997 tuviera mucho que ver con esta génesis diferente de liderazgo. Goni provino del escenario moderno de la economía y las élites empresariales, llegando a constituir una personalidad atractiva para la sociedad y el sistema político, mientras que Juan Carlos Durán no pudo aparecer como un líder que uniera al partido y fuera más allá del *gonismo*, pues su candidatura fue percibida como tradicional y sujeta a las rancias prácticas en el ejercicio de la política.

Durante la campaña, Juan Carlos Durán intentó mostrar la figura de un auténtico representante de las reformas estatales implantadas por el gobierno, electoralizó el Bono Sol, una renta para los ciudadanos de la tercera edad, polarizando en extremo el enfrentamiento con el ex presidente Jaime Paz, candidato del MIR; nada de esto sirvió para obtener un buen resultado electoral ni formar un cogobierno junto al ganador de las elecciones, Hugo Banzer. Fue una ilusión, o un exceso de arrogancia, pensar que algunos sectores de la población iban a convertir, de hecho, su apoyo a las reformas en un sostén electoral para el MNR<sup>87</sup>.

El carácter representativo de la candidatura de Juan Carlos Durán dependía de la efectividad gubernativa del MNR, de la provisión de resultados muy concretos pero, al mismo tiempo, estaba condicionado, como toda actuación electoral, por la interpretación de cambiantes e inestables estados de ánimo de la sociedad. La candidatura de Durán no se dio cuenta que

existe un inevitable divorcio entre la aplicación de políticas públicas y reformas estatales que Goni llevó adelante, y la cultura política de los ciudadanos.

El MNR creyó que podía traducir en torrente electoral algunos éxitos de la administración gubernamental pero tropezó con dos obstáculos:

- Primero, la tendencia de nuestra cultura política que se inclina fuertemente hacia la renovación de gobernantes, apostando así por un recambio de liderazgo y, por lo tanto, reproduciendo el beneficio de la duda contra cualquier candidato.
- Segundo, el autoritarismo de Goni concentró a su alrededor el éxito de las reformas, manteniendo al grueso de su equipo tecnocrático independiente de la estructura partidaria del MNR; esto ocasionó que una parte de las cúpulas movimientistas, entre éstas Juan Carlos Durán, apunten el faro hacia los salones del Poder Legislativo, sin poder, en muchos casos, difundir las reformas logradas o participar en ellas con el objetivo de dirigirse hacia un proyecto político de mayor alcance.

Asumido el fracaso electoral, volvió a hablarse del retorno de Goni para el año 2002. Y así fue, regresó como candidato pero sin articular ni modernizar su partido por medio de un liderazgo democratizador; pasó a la oposición con el fin único de desprestigiar todas las políticas de Banzer en los viajes que Sánchez de Lozada hizo al extranjero, sobre todo a Estados Unidos, sin ser un actor regulador para realizar un seguimiento a sus reformas. Se trató, en definitiva, de la imposibilidad de reconstruir la acción política de Goni que siempre desestimó el reconocimiento de los errores.

## **Política del avestruz y desprecio del compromiso**

Cuando Sánchez de Lozada encabezó la coalición de gobierno para agosto de 2002, no hubo nada innovador porque sus presentaciones públicas fueron la imagen pálida de un estilo incierto y su discurso político estuvo afincado en cuatro ejes fundamentales:

- La evocación de eficiencia empresarial para el manejo de los asuntos públicos y económicos, lo cual hizo que se autocalificase nuevamente como un empresario exitoso que podía revertir las crecientes críticas contra el modelo neoliberal en Bolivia.
- La defensa sin concesiones de las políticas de capitalización que habían ingresado en un interregno de incertidumbre e inercia durante las administraciones de Hugo Banzer y Jorge Quiroga; sin embargo, no ofreció nada para corregir algunas distorsiones, especialmente en lo referido a la explotación de gas natural, resistiéndose a realizar un referéndum sobre el destino de los hidrocarburos que estaban en manos de poderosas empresas multinacionales<sup>88</sup>.
- La exigencia de reglas de juego claras, estables e inmediatas para efectivizar las políticas de mercado pero sin proponer acciones destinadas al combate de la desigualdad como eje central para favorecer a los sectores más pobres.
- Las declaraciones si maquillaje para oponerse a la Asamblea Constituyente utilizando las habilidades discursivas de su Vicepresidente, Carlos D. Mesa Gisbert, que se reunió con diferentes sectores para convencerlos de la inviabilidad de tal mecanismo de consulta y deliberación.

En el fondo, la segunda presidencia de Sánchez de Lozada podría ser caracterizada como una práctica para mantener un bajo perfil y cultivar una serie de negociaciones secretas en lo referido a la venta de gas natural por medio del consorcio Pacific LNG; de esta manera, el *gonismo* se agotó como impulso reformador para adaptarse a una nueva lógica: la *política del avestruz*; en este sentido, era importante comprender cómo fue posible la evolución de distintas especies a lo largo de millones de años. Muchos animales fueron adaptándose a su medio ambiente, mientras que otros se extinguieron inevitablemente. Algunos mantuvieron una extraña ligazón con su género pero desarrollaron características anatómicas diferentes adoptando habilidades de otras especies. Este es el caso del avestruz, una enorme ave que habita en África y cuyo volumen corporal le ha privado de la capacidad de volar. Sin embargo, su acomodo al

ecosistema fue impresionante pues sus enormes patas le permiten correr tan velozmente que el vuelo se revela como algo innecesario.

El problema del avestruz es que, posiblemente, también esté destinado a desaparecer pues tiene limitadas capacidades para enfrentar el peligro. Frente a las amenazas de otros veloces depredadores que quieren comérselo, el avestruz hace una evaluación confusa de sus problemas. Inocentemente cree que evitando ver la dificultad, ésta ha desaparecido. Oculta la cabeza dentro de la tierra sin darse cuenta de que su cuerpo está a merced del perseguidor o que sus bellas plumas abiertamente llaman la atención provocando lo peor, es decir, aquello que el avestruz justamente quería impedir.

Las complicaciones del avestruz muchas veces también contagian al liderazgo político, de tal manera que cuando un líder evalúa sus posibilidades y límites en forma incompleta o desdeñosa, el resultado es una triste analogía: ejercer la política del avestruz. No advertir los problemas en su real dimensión, confundir la política a ejecutar con el instrumento, las exigencias de lo inmediato con el largo plazo, la cáscara con el contenido, minimizar los peligros y no prever costos políticos o económicos. ¿Cómo entender las fallas que ocasionaron el colapso del 12 y 13 de febrero de 2003, las amenazas de conspiración y el anquilosamiento en la reorientación estatal?<sup>89</sup>— ¿Por qué hubo un vacío de poder aquel fatídico febrero que culminó con la caída definitiva ocho meses después?

Una hipótesis para explicar la crisis del régimen de Sánchez de Lozada de febrero a octubre de 2003, radica en que el nacimiento de su gobierno descansó estrictamente sobre la coalición MNR-MIR-NFR; es decir, sobre objetivos partidarios de corto plazo y estrategias de gobernabilidad inconclusas, dejando de lado la necesidad imperiosa de proseguir con la reforma del Estado para gobernar por políticas que se conviertan en una actividad normativa en función de evaluar las mejores opciones de solución a los problemas públicos.

La gobernabilidad como acuerdo entre partidos se tornó incapaz de promover el cambio social y tampoco supo conciliar intereses entre el sistema político y los movimientos sociales, ni comprender lo que representa el fortalecimiento de la sociedad civil; típicamente, la

governabilidad llegó a convertirse en una ramplona política de avestruz. Los pactos de gobernabilidad confundieron la necesidad de obtener estabilidad que favorezca el ejercicio de la presidencia, con un asombroso proceso de neopatrimonialismo para controlar bancadas parlamentarias e impedir una oposición intransigente proveniente del MAS.

Sin embargo, los pactos nunca se articularon con el diseño de políticas públicas que busquen comprometer responsabilidades hasta obtener los productos de una auténtica modernización política. La gobernabilidad no pudo repensarse en términos de *gestión pública*, *compromiso* para el logro de resultados, *control social* de los grupos afectados por diversas políticas y fijación de *castigos* indispensables para quienes ejercían el poder al no reconocer que éste tiene prohibiciones<sup>90</sup>.

Resultó inconcebible observar cómo las cosas se descontrolaron cuando el *gonismo* copió la actitud del avestruz: no mirar el contexto global de los problemas, no hacer el esfuerzo por prever desastres, corregir tendencias erróneas, ni superar viejos hábitos que sólo ocasionaron distorsión y necesidad. Esconder la cabeza no fue sinónimo de cobardía, sino simplemente aquel torpe momento en que, por arrogancia o sentido de superioridad inexistente, se consideró viable la posibilidad de remontar el peligro.

En el análisis de la política del avestruz se aprecia que éste también tiene facultades sorprendentes como asimilar piedras y hasta desechos de metal. Su poderoso aparato estomacal es capaz de ayudarlo a sobrevivir en entornos donde la comida es escasa pudiendo procesar basuras increíbles. El *gonismo* tuvo que tragarse el vacío de poder pero no pudo digerir los traumas del 12 y 13 de febrero, volvió a tropezar con la misma piedra, no se comprometió con mayores reformas para correr con prontitud, aplicar inteligentemente las políticas, y la gestión pública de su gobierno no fue capaz de superar el elitismo y la megalomanía, una enfermedad profesional muy generalizada en los tecnócratas *gonistas*.

En medio del cúmulo de dificultades que constriñeron al horizonte político, el gobierno de Sánchez de Lozada menospreció algunas alternativas, una de las cuales era el Sistema de

Seguimiento y Evaluación a la Gestión Pública por Resultados (SISER) que funcionaba al interior del Ministerio de la Presidencia<sup>91</sup>.

En realidad, el SISER es un Decreto Supremo aprobado por el ex Presidente Jorge Quiroga el año 2001. Nació como parte de Programa de Reforma Institucional (PRI) que buscaba continuar una reforma estatal dirigida a lograr frutos objetivos. Cada ministerio estaba obligado a presentar un pliego de compromisos por resultados y el SISER rastrearía su cumplimiento cuantificando logros. Si algún compromiso no se cumplía, el sistema informático de la Dirección General de Gestión Pública del Viceministerio de Coordinación Gubernamental daría las señales para que se corrijan estancamientos hasta efectivizar lo comprometido.

El *gonismo* utilizó al SISER como un disfraz para ocultar la fragmentación de la gestión pública porque los partidos de la coalición cooptaron diferentes ministerios sin obedecer ninguna directriz presidencial. La gestión gubernamental se infectó de corrupción que nadie pudo limitar y todo se paralizó sin saber cómo responder, estratégicamente, a cinco problemas:

- Primero, el fraccionamiento del aparato estatal, que quedó bajo el control de diferentes partidos de la coalición, evitó la realización de un proceso eficiente de formulación, monitoreo, evaluación y retroalimentación de las políticas públicas.
- Segundo, el *gonismo* aún negaba una descentralización de la acción estatal, reproduciendo un Estado piramidal para controlar las prefecturas, que también fueron presa fácil del reparto partidario y la inmovilidad de la gestión pública.
- Tercero, no hubo un desarrollo de capacidades para la administración intergubernamental cuyo objetivo sea conectar al gobierno central con las regiones y municipios.
- Cuarto, el *gonismo* no visualizó ningún modelo de organización flexible para corregir la burocracia y encarar el cambio continuo.
- Quinto, no se quiso generar un nuevo estilo gerencial público.

Gobernar por políticas no fue una táctica durante la segunda presidencia de Sánchez de Lozada; por el contrario, se fomentó una teoría conspirativa de la sociedad después de la crisis de febrero

y ésta, a su turno, alimentó conspiraciones reales que estallaron entre septiembre y octubre de 2003. El fracaso se precipitó sin pensar siquiera en alcanzar una meta sencilla: diseñar y ejecutar políticas públicas consideradas como un *sentido común esclarecido y crítico* para no provocar influencias perniciosas. Los nuevos tecnócratas y políticos *gonistas* nunca comprendieron con claridad las políticas públicas como instrumentos para criticar o mejorar el sentido común y, por lo tanto, incumplieron todo lo ofrecido.

De pronto se esfumaron las razones valederas para administrar el poder a través de mecanismos democráticos, dándose lugar al Apocalipsis; de esta manera, se utilizó la represión sin medir las consecuencias futuras durante las protestas en El Alto a partir de agosto de 2003 y el aparato estatal se transformó en una máquina cuya legitimidad se sostuvo solamente con la violencia; el *gonismo* perdió su imagen democrática porque cuando irrumpe la violencia, lo importante no es el grado de intervención represora, sino las formas, los medios y las salidas concertadas para actuar con verdadera responsabilidad pero, en este caso, el avestruz *gonista* no pudo reconvertirse y sucumbió por extinción, ingenuidad e irresponsabilidad.

### **El péndulo desencajado: 2002, cincuenta años de la Revolución Nacional de 1952**

La memoria y el recuerdo, dos facultades que nos hacen mirar hacia atrás para comprender mejor nuestra historia o, por el contrario, para forzar el olvido, sobre todo cuando nos obsesionan el temor y la vergüenza de experiencias pasadas que no deseamos volver a repetir. Como un péndulo, nuestra conciencia se balancea entre los recuerdos de ayer y la información sobre el presente: claridad, confusión, angustia, rabia y perplejidad se convierten, finalmente, en un torbellino de sensaciones que se desencadenan sin cesar hasta el último de nuestros días.

Al pasar cincuenta años desde la revolución nacional de 1952, este evento significativo persiguió la segunda presidencia de Sánchez de Lozada porque obligó a contrastar, permanentemente, lo que entonces sucedió con los resultados de hoy, con la siembra contemporánea que se reflejaba en el espejo del modelo neoliberal. Obreros y campesinos armados, una vez tuvieron en sus manos la oportunidad de construir un país inédito. Sus sueños no tenían límites como tampoco sus ambiciones de poder. Como un volcán o la velocidad ardiente de un cometa imparabile, la

revolución otorgaba reforma agraria, nacionalización de minas, voto universal, reforma educativa y un proyecto político que, de golpe y sopetón, devolvía la dignidad a millones abriendo surcos para sembrar la modernización boliviana.

De nada sirve revisar nuestra historia para criticar destructivamente aquellas audaces medidas, cuya legitimidad descansó en los fusiles y el sentido de justicia de aquellas masas que resolvían en las calles, a puñetes o a bala, las deudas pendientes de la oligarquía que había administrado el país como una finca gigantesca. La pobreza, el pongueaje y la destrucción del desprecio de quienes tenían más sobre los que nada tenían, encontraban en la revolución una luz de alivio que, supuestamente, conduciría a una transformación sin parangón hasta ese momento.

Sin embargo, el ensueño duró poco y en el año 2002 Sánchez de Lozada precipitó la necesidad de criticar sin reservas las actitudes de las élites políticas y sindicales que, les guste o no, terminaron por convertir a la revolución en un péndulo desencajado que, hasta la caída del *gonismo*, ya no tronaba ni sonaba. La revolución inició un proceso que trató de golpear el péndulo hacia delante: crecimiento económico, los albores de una industrialización agresiva, integración territorial y articulación ideológica a través del nacionalismo. Lo que finalmente recogimos como cosecha seca e inservible fue el golpe del mismo péndulo pero esta vez hacia atrás: agresiones militares, ambiciones personales, egoísmos intolerantes, inestabilidad, despilfarro para comprar a transitorios aliados políticos, corrupción y nepotismo, que terminaron por arrojarnos en una crisis irremediable a comienzos de los años 80.

Hoy en día, las condiciones internacionales, políticas e ideológicas han sacudido tanto nuestras raíces que, como una hipocresía de la historia, quienes había acaudillado la revolución desde el poder destruían irreversiblemente todas y cada una de las consecuciones del proyecto desarrollista de 1952. Víctor Paz Estenssoro como iniciador del modelo neoliberal cristalizado en el Decreto Supremo 21060, Hernán Siles Zuazo y Juan Lechín Oquendo como actores del proceso anárquico durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), veían fracasar o, en todo caso, destruían con sus propias manos a partir de 1985 las expectativas y ambiciones que alguna vez prometían un destino distinto.

Después de cincuenta años, siglo XXI y año 2002, el *gonismo* confrontaba una Bolivia que todavía era víctima de un encierro indignante en la pobreza, exclusión y retardo económico. Carecía de recursos financieros y humanos propios, era altamente dependiente de la cooperación oficial para el desarrollo y la mayoría de su población veía con escepticismo o desconfianza la posibilidad de superar nuestros problemas en conjunto como una nación sólida.

Cincuenta años de esfuerzo y decepción<sup>92</sup>. Jamás tuvimos una guerra civil prolongada, un conflicto internacional que nos haga víctimas de bloqueos económicos o la tragedia de epidemias devastadoras; nunca nos cayó una bomba atómica como en Japón, tampoco soportamos una secesión como en Corea; no conocemos una explosión demográfica que condene a millones a la inanición como en China. Nada de esto, pero Japón, Corea del Sur, China, Tailandia, Malasia, Vietnam y algunos estados descentralizados dentro de India registran niveles de desarrollo envidiables, crecimiento económico, prosperidad y mayor equidad que Bolivia entre 1960 y los años dos mil.

Las actuales generaciones constantemente deben estudiar y seguir revisando las consecuencias de la revolución del 52, sus protagonistas, lo que todavía falta por investigar o revelar. Nuestra memoria no debe desfallecer a este respecto: recuerdo y reflexión, ansiedad y responsabilidad, el ritmo del péndulo debe ser re-equilibrado y puesto en su lugar para seguir adelante, aún a pesar de los magros resultados en materia de desarrollo, modernización, dignidad y justicia social en Bolivia; es decir, a pesar de la herencia inerte en que finalmente desembocó aquel experimento revolucionario y que el *gonismo* intentó olvidar sin siquiera sobrevivir más allá de los diez años. Ideal liberal o espuma superficial sobre aguas estancadas, Sánchez de Lozada se desvaneció en medio de explosiones de furia y violencia impune.

### **Conclusiones: ¿entonces hacia dónde va la búsqueda de un nuevo orden deseado?**

Más allá de la clásica oposición entre el modelo neoliberal y las fuerzas disidentes. Más allá de los conflictos con los movimientos sociales o la aparición de partidos políticos anti-sistémicos, en Bolivia existe una crisis, tal vez más grave que la de carácter económico. Se trata de un quiebre en el bloque de poder de las élites dominantes, cuya crisis es la pérdida de un horizonte

de largo aliento, junto a una total incertidumbre sobre su futuro papel en el actual modelo de libre mercado. El hundimiento del *gonismo* revela cómo las élites empresariales ya no son aquella clase social homogénea –por lo menos desde el punto de vista ideológico– que rearticuló su poder y gozó de privilegios desde 1985.

Cuando recordamos los fenómenos más dramáticos en los últimos veinte años de historia política en Bolivia, rápidamente salta a la memoria nuestra transición hacia la democracia en 1982. En realidad, parece ser más correcto indicar que existieron tres transiciones fundamentales. La primera transición fue el paso del autoritarismo militar hacia el gobierno de la UDP, reconociéndose la legitimidad del ex presidente Hernán Siles Zuazo. Lo más sobresaliente de este acontecimiento fue que las Fuerzas Armadas quedaron sin la más mínima posibilidad de participación política en el nuevo escenario democrático<sup>93</sup>.

La segunda transición se relaciona con la crisis hiperinflacionaria que destruyó a la UDP entre 1982 y 1985, lo cual dio paso a la llegada del Ajuste Estructural con el 21060, enterrándose al viejo capitalismo de Estado que dominó desde 1952. Esta transición económica nos enfrentaba con mayor radicalidad a la economía de mercado, procesos de competitividad mundiales y a la poderosa influencia de instituciones financieras internacionales. La tercera transición fue el desplazamiento de la política de masas y prácticas populistas, hacia la reconstrucción de un nuevo Estado que recupere su autoridad, basándose únicamente en la participación de las élites políticas y empresariales. Éstas habían diseñado el nuevo orden económico del 21060 junto con el pacto de gobernabilidad que sostuvo al gobierno del ex presidente Víctor Paz Estenssoro.

Entre 1981 y 1985, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), con Marcelo Pérez Monasterios, Carlos Calvo y Fernando Illanes como sus figuras más notorias, representaba el principal núcleo doctrinario para las reformas liberales y una reestructuración política dentro de cánones democráticos. Asimismo, David Blanco, Ronald Maclean y Mario Mercado Vaca-Guzmán armarían un grupo compacto al interior de ADN para conectarse con la asesoría económica del estadounidense Jeffrey Sachs. Paralelamente, las élites del MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada, Fernando Romero, Fernando Prado, Juan Cariaga, Guillermo

Bedregal y Roberto Gisbert, conformarían otro grupo para analizar el alcance y puesta en práctica de las principales medidas de *shock*.<sup>94</sup>—

Aquellas personas llegaron a convertirse en importantes ministros de Estado, además de constituir elementos clave en el mundo de los negocios. Estas élites no sólo lograron la viabilidad política del 21060, sino que se habían unificado en un bloque de poder con homogeneidad ideológica y privilegios, frente a los cuales poco podían hacer los trabajadores agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB) o el campesinado de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cuya influencia había sido desterrada del sistema político boliviano.

Si comparamos agosto de 1985 con el período 2005 después de veinte años del modelo neoliberal, se observa que el bloque de poder manifiesta ahora un agotamiento y serias discrepancias. Los enfrentamientos entre Carlos Calvo y Ronald Maclean, entre Jorge Quiroga y distintas fracciones de las élites empresariales en Santa Cruz, o la polarización entre Sánchez de Lozada y su propio partido MNR para burlar el juicio de responsabilidades por la represión en el momento de su derrocamiento, arrastra también a sus viejos socios, siendo afectado el grupo de empresarios leales a Jaime Paz Zamora que conformaron en algún momento la Nueva Mayoría en el MIR y, súbitamente, ven ahora inviable su propia supervivencia porque se marchitó un nuevo consenso de dominación; esta pérdida de consistencia explica plenamente la ruptura del empresario Samuel Doria Medina con Jaime Paz. En todo caso, aquellos ciudadanos actúan de manera aislada, con objetivos coyunturales y con metas cortas en función de las elecciones generales de diciembre de 2005. Así han perdido todo control sobre el horizonte económico de largo plazo para Bolivia porque no existe una versión rejuvenecida del 21060 para el siglo XXI.

La crisis económica hace mucho que tocó a sus puertas develando que las élites empresariales no pueden lograr, ni mayores volúmenes de productividad, generación de empleo, o innovación, ni mayor fortaleza para competir internacionalmente. Las élites no pueden suavizar la intensidad de una economía de mercado donde las tasas de interés y la política monetaria en el sistema financiero están sujetas a la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI), de

manera tal que sufren al ver amenazados algunos de sus privilegios para manipular concesiones en su favor. De pronto, su dependencia financiera saborea también el vinagre de las instituciones internacionales cuyas decisiones constriñen la capacidad de reacción de los empresarios bolivianos, sin siquiera contar con la Capitalización porque su presencia pesa muy poco. El *gonismo* prefirió a las grandes empresas multinacionales extranjeras.

Actualmente, la participación de Bolivia en el comercio mundial es del 0.0017%; es decir, nada<sup>95</sup>. La caída del *gonismo*, en el fondo, golpeó tremendamente a las élites quienes no saben qué hacer con el modelo económico imperante. No tienen unidad teórica, pues están carcomidas por la incertidumbre. Una vez afirman que ha llegado el fin de la ortodoxia liberal, como lo expresó el empresario y jefe del nuevo partido Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, pero en otras oportunidades tienen que agachar la cabeza para recibir los créditos de la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyo presidente, el boliviano Enrique García, ha expresado sutilmente en muchas ocasiones que no será posible romper las duras condiciones impuestas desde afuera y donde la integración comercial de toda América Latina marcha firme hacia márgenes de competencia más drásticos, caracterizados por la globalización y liberalización progresiva.

Las élites ya no tienen aliados en altas esferas de la academia norteamericana, como en algún momento fueron Richard Musgrave y Jeffrey Sachs, ambos profesores de la Universidad de Harvard. Actualmente, Sachs es uno de los activistas más importantes en Washington DC para aumentar la ayuda económica en favor de la lucha contra el Sida y la erradicación de enfermedades tropicales en África. Esto le permite estar al margen de las desastrosas consecuencias que su consejería generó en Bolivia y Rusia, dos países donde la pobreza galopante, corrupción y el retorno de la inestabilidad política han terminado por ahuyentar a este médico macroeconómico y financiero, cuyo prestigio parece estar mejor protegido si se involucra con campañas masivas de salud, antes que con una reorientación de la economía neoliberal en los países pobres.

El *gonismo* se agrietó y rompió amenazando con fracturar al bloque de poder de las élites como conjunto, poniendo al descubierto su falta de previsión, su negativa actitud excluyente en veinte años de ajuste, su incapacidad de auto-reforma y su ausencia de compromiso con los intereses nacionales más ecuánimes. Para la sociedad boliviana, el valor fundamental no es el futuro sino el presente; el futuro es un tiempo falso que fue aprovechado por las élites para decirnos que “todavía no era hora” de democratizar recursos, compartir riqueza y superar la pobreza; de esta manera, lo único que consiguió el *gonismo* fue negar la realidad y negarnos como país. Lo que todos queremos son transformaciones *ahora* porque el *gonismo* trató de ofrecernos un futuro incierto a través de sus reformas, favoreciéndose solamente a sí mismo y edificando un presente que acabó encarcelando los verdaderos cambios.

¿Hasta qué punto aparecerán nuevos elementos de reconstrucción y consolidación de nuestra modernidad, hasta qué punto, por el contrario, nuestra Nación seguirá dividiéndose entre un mundo fundamentalista indígena de identidades ancestrales y un mundo de mercados puros que destruyen diferencias y especificidades pero que no pueden ser auténticamente modernos en el pleno sentido occidental, económico y político?

Lo que hoy día importa es preparar el terreno para una nueva forma de hacer política y construir el desarrollo a través del análisis de la cultura del mundo moderno globalizado, incorporando constantemente las condiciones de reorganización de la vida social y política abierta hacia los excluidos, pues estas condiciones, en nuestro actual proceso de *desmodernización* se encuentran derrumbadas. La preparación de este terreno debería arrojar resultados que sobre todo beneficien a Bolivia con el logro de soluciones auténticamente humanas.

### **Bibliografía**

Albarracín, Juan. **El Poder Minero**, Urquiza, La Paz, 1972.

\_\_\_\_\_. **Bolivia : el desentrañamiento del estaño**, Akapana, La Paz, 1983.

Antezana Ergueta, Luis. **Historia secreta del MNR, 1943-1946**, vol. II, Juventud, La Paz, 1988.

Arguedas, Alcides. **Historia general de Bolivia (el proceso de la nacionalidad), 1809-1921**, Arnó Hermanos Editores, La Paz, 1922.

Arze Aguirre, René. **Guerra y conflictos sociales. El caso rural boliviano durante la campaña del Chaco**, CERES, La Paz, 1987.

Banco Mundial. **Bolivia, del padrinazgo al Estado profesional. Análisis de la situación institucional y de gobernabilidad en Bolivia**; Tomo I, Informe principal: La Paz, Informe No. 20115-BO, 25 de agosto de 2000, 65p.

Baptista Gumucio, Fernando. **Estrategia nacional para la deuda externa**; Siglo Ltda., La Paz, 1984.

Bedregal, Guillermo. **Presente y futuro de la política**, La Paz: Los Amigos del Libro, 1997.

\_\_\_\_\_. **La Comibol, una historia épica**, Los Amigos del Libro, La Paz, 1998.

Birdsall, Nancy and De la Torre, Augusto. **The Washington Contentious. Economic policies for social equity in Latin America**, Washington D.C.: Inter-American Dialogue, 2001, 84p.

Buci-Glucksmann, Christine. **Gramsci y el Estado**, Siglo XXI, México, 1988, 484p.

Boisier, Sergio. "La construcción social del regionalismo latinoamericano (escenas, discursos y actores)"; en: Revista del CLAD, Reforma y Democracia, No. 2, julio de 1994, p. 193.

Blanes, José (comp.). **El reto de la planificación descentralizada**, CEBEM, La Paz, 1991.

Campero Prudencio, Fernando. **Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia contemporánea**, La Paz: Harvard Club de Bolivia, 634p.

Castedo Franco, Eliana y Mansilla, H.C.F. **Economía informal y desarrollo socio-político en Bolivia. Transformaciones socio-culturales, erosión de la legitimidad estatal y perspectivas de lo informal**, La Paz: CEBEM, 1993, 349p.

Céspedes, Augusto. **El dictador suicida.(40 años de historia de Bolivia)**, Juventud, La Paz, 1987.

Dowse E., Robert y Hughes A. John. **Sociología política**, Alianza Universidad, Madrid, 1982, pp. 467-468.

Conaghan, Catherine M. "Reconsidering Jeffrey Sachs and the Bolivian economic experiment"; in: Drake, Paul W. (ed.). **Money doctors, foreign debts, and economic reforms in Latin America from 1890s to the present**, Wilmington, Delaware: Jaguar Books on Latin America, 1994, pp. 236-266.

Contreras C., Manuel E. “Bolivia en la década del treinta”; en: Los años de depresión, la crisis, la guerra del Chaco y la marcha al Oriente, Nueva Economía, La Paz, septiembre de 1999.

Chávez Corrales, Juan Carlos (coord.). **Las reformas estructurales en Bolivia**, La Paz: Fundación Milenio, Serie: Temas de la modernización, 1998, 604 p.

Dandler, Jorge. **Sindicalismo campesino en Bolivia. Cambios estructurales en Ucureña 1935-1952**, CERES, Cochabamba, 1983.

Dunkerley, James. **Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia 1952-1982**, Quipus, La Paz, 1987.

Drake, Paul W. (ed.). **Money doctors, foreign debts, and economic reforms in Latin America from 1890s to the present**, Wilmington, Delaware: Jaguar Books on Latin America, 1994, 270p.

Franzé, Javier. “La sociedad civil frente a la crisis de la política. Control y desentendimiento”; *Nueva Sociedad*, No. 134, Caracas, noviembre-diciembre de 1994, pp. 102-117.

Friedrich Ebert Stiftung, PNUD, Fundación Milenio. **Agenda nacional de gobernabilidad democrática**, PNUD-ILDIS-MILENIO, La Paz, 1997.

Gamarra, Eduardo. “Presidencialismo híbrido y democratización”; en: Mayorga, René Antonio (coord.). **Democracia y gobernabilidad. América Latina**, Caracas: CEBEM-ILDIS-Nueva Sociedad, 1992, pp. 21-41.

Gamboa Roacabado, Franco. “Víctor Hugo Cárdenas: el indio cartesiano”; en: **Itinerario de la esperanza y el desconcierto. Ensayos sobre política, sociedad y democracia en Bolivia**, La Paz: Muela del Diablo Editores, 2001, pp. 169-176.

García Argañarás, Fernando. **Razón de Estado y el empate histórico boliviano: 1952-1982. La economía política de la modernización boliviana**; Los Amigos del Libro-Mala Yerba Editores, Cochabamba, 1993.

Garretón, Manuel Antonio. “Política, cultura y sociedad en la transición democrática”; *Nueva Sociedad*, colección especial de 30 años, No. 180-181, julio-agosto y septiembre-octubre de 2002, pp. 199-220.

Geddes, Barbara. **Politician’s dilemma: building state capacity in Latin America**, California Series on Social Choice and Political Economy: University of California, Berkeley, 1994.

Guevara Arze, Walter. “Manifiesto a los campesinos de Ayopaya”; en: **Bases para replantear la revolución nacional**, Juventud, La Paz, 1988.

\_\_\_\_\_. **Plan inmediato de política económica de la Revolución Nacional**, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Bolivia, La Paz, 1955.

Hausmann, R, and E. Fernández-Arias. "Foreign Direct Investment: Good Cholesterol?" in: **Foreign Direct Investment versus other flows to Latin America**, Development Centre Seminars, OECD Publications, 2001.

Hopenhayn, Martín. **Ni apocalípticos, ni integrados. Aventuras de la modernidad en América Latina**, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 1994.

Jean Pierre Lavaud. "Hacia una interpretación de la inestabilidad política en Bolivia. (1952-1980)"; en: Estado y Sociedad, Revista Boliviana de Ciencias Sociales, Año 3, No. 4, La Paz, FLACSO, diciembre de 1987.

Kolakowski, Leszek. **La modernidad siempre a prueba**, Vuelta, México, 1990.

Labastida, Julio y del Campo, Martín (coord.). **Hegemonía y alternativas políticas en América Latina**, México: Siglo XXI, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, 1985.

Lazarte, Jorge. **Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia (historia de la COB 1952-1987)**, ILDIS, La Paz, 1988.

\_\_\_\_\_. "Los problemas de la reforma y la modernización del Estado en Bolivia"; en: ILDIS, Cámara de Diputados. **Debate sobre la reforma del Estado. Aspectos básicos de la reforma del Estado**, ILDIS, La Paz, 1991.

Lechner, Norbert. "El debate sobre Estado y mercado"; en: Nueva Sociedad, No. 121, septiembre-octubre de 1992.

\_\_\_\_\_. **Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política**, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 1990.

Lipset, Seymour Martin. "La posición central de la cultura política", El Diario, La Paz, 13 de agosto de 1990.

Lorini, Irma. **El movimiento socialista "embrionario" en Bolivia 1920 – 1939**, Los Amigos del Libro. La Paz.

Malloy, James. **Bolivia: la revolución inconclusa**, CERES, La Paz, 1989, p. 46.

Marramao, Giacomo. **Lo político y las transformaciones. Crítica del capitalismo e ideologías de la crisis entre los años 20 y 30**, Cuadernos de Pasado y Presente, 95, México, 1982.

Mansilla, H.C.F. "La tradición conservadora de los partidos políticos"; en: **El carácter conservador de la nación boliviana**, Santa Cruz de la Sierra: El País.

\_\_\_\_\_. “Una nota crítica sobre la revolución nacional de 1952”; en: **La cultura del autoritarismo ante los desafíos del presente. Ensayos sobre una teoría crítica de la modernización**, CEBEM, La Paz, 1991.

\_\_\_\_\_. “La marcha victoriosa de la racionalidad instrumental en América Latina”, en: **Autonomía e imitación en el desarrollo. Fragmento de una teoría crítica de la modernización**, CEBEM, La Paz, 1994.

Mayorga U., Antonio J. **Gonismo, discurso y poder 1985-1989**, Facultad de Ciencias Económicas y Sociología (FACES), Cochabamba: Universidad Mayor de San Simón (UMSS), 1996, 175p.

Mayorga, René. “Outsiders y kataristas en Bolivia: su rol en el sistema de partidos y la democracia pactada”; en: **Antipolítica y neopopulismo**, La Paz: Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (CEBEM), 1995, pp. 85-158.

Merilee S. Grindle and Pilar Domingo (ed). **Proclaiming Revolution: Bolivia in Comparative Perspective**, Cambridge, Mass.; London: David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard University; Institute of Latin American Studies, University of London, 2003, 424 pp.

Mittelman, James H. **The globalization syndrome. Transformation and resistance**, Princeton university Press, New Jersey, 2000.

O'Donnell, Guillermo. “Estado, democratización y ciudadanía”; en Nueva Sociedad, No. 128, noviembre-diciembre de 1993.

Pacheco, Mario Napoleón. “Apuntes sobre las transformaciones de la economía boliviana, 1986-1997”; en: Valdivia Urdininea, José (et. al.). **Reflexiones sobre el crecimiento económico**, La Paz: Fundación Milenio, Serie: Temas de la Modernización, 1998, pp. 77-109.

Pacheco Torrico, Napoleón Mario. “El *metal del diablo*: eje de la economía boliviana”; en La Economía Boliviana entre 1900 y 1930, Nueva Economía, La Paz, agosto de 1999.

Pacheco, Mario Napoleón y Lazarte, Jorge. **Bolivia: economía y sociedad 1982-1985**, CEDLA, Programa de Ajuste Estructural, Serie: Estudios e Investigaciones, La Paz, 1992.

**Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1962-1971**, La Paz, 1962.

Pérez Torrico, Alexis. “Economía boliviana (1890-1910)”; en: Bolivia a fines del siglo XIX, Nueva Economía, La Paz, julio de 1998.

Paz, Octavio. “El desarrollo y otros espejismos”; en: **El laberinto de la soledad. Posdata. Vuelta a El laberinto de la soledad**, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 284-320.

Phillips Mandaville, Alicia. "Incentives of the Bolivian political élite to promote pro-poor reform. Assessment report and program recommendations"; The National Democratic Institute for International Affairs, Working Paper, October 2004, pp. 18-36.

Portantiero, Juan Carlos. "La múltiple transformación del Estado Latinoamericano"; en: Nueva Sociedad, No. 104, 1989.

Reinaga, Fausto. **El pensamiento amáutico**, Ediciones Partido Indio de Bolivia, La Paz, 1978.

Rey de Marulanda, Nohra and Guzmán Julio. "Inequity, human development and social policy: the importance of 'initial conditions'"; Inter-American Development Bank, INDES Working Papers Series I-51, December 2003, pp. 12-30.

Rivera, Silvia. **Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechua de Bolivia 1900-1980**, CSUTCB-Hisbol, La Paz, 1984.

Roca, José Luis. **Bolivia, después de la capitalización. Una crítica al gonismo y sus "reformas"**, La Paz: Plural Editores, 1999, 269p.

\_\_\_\_\_. **Fisonomía del regionalismo boliviano**, Los Amigos del Libro, La Paz, 1980.

Romero Ballivián, Salvador. **Geografía electoral de Bolivia, así votan los bolivianos**, La Paz: CEBEM-ILDIS, 1993, 288p.

Rodríguez Ostría, Gustavo. **Estado y municipio en Bolivia**, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Secretaría Nacional de Participación Popular, La Paz.

\_\_\_\_\_. **Poder central y proyecto regional. Cochabamba y Santa Cruz en los siglos XIX y XX**, ILDIS-INADES, Cochabamba, 1993.

Romero Pittari, Salvador. "El nuevo regionalismo"; en: Estado y Sociedad, Revista Boliviana de Ciencias Sociales, Año 5, No. 6, La Paz FLACSO, primer trimestre de 1989.

Sanjinés, Javier. **Literatura contemporánea y grotesco social en Bolivia**, ILDIS-BHN, La Paz, 1992.

Soliz Rada, Andrés. **La fortuna del presidente**, La Paz: Los Amigos del Libro, 2004.

Touraine, Alain. **Crítica de la modernidad**, Fondo de Cultura Económica, Buenos aires, 1992.

Urioste, Miguel F. de C. **¿Valió la pena? Cuatro años de gobierno**, La Paz: Huellas, 1997, 115 p.

Vásquez-Machicado, Humberto. **Los precursores de la sociología boliviana**, Don Bosco, La Paz, 1991.

Vial, Joaquín. “Foreign investment in the Andean countries”, Center for International Development (CID), Harvard University, Working Paper No. 85, January 2002, 33p.

Villegas, Carlos. **Privatización de la industria petrolera en Bolivia. Trayectoria y efectos tributarios**, La Paz: Plural Editores, CIDES-UMSA, 2003, 134p.

Wallerstein, Immanuel. **El capitalismo histórico**, Siglo XXI, México, 1989.

Zavaleta Mercado, René. “La revolución democrática de 1952 y las tendencias sociológicas emergentes”; en: **Clases sociales y conocimiento**, Los Amigos del Libro, La Paz, 1988.

[www.commandingheights.com](http://www.commandingheights.com), disponible.

1 Cfr. Sanjinés, Javier. **Literatura contemporánea y grotesco social en Bolivia**, ILDIS-BHN, La Paz, 1992.

2 Se entiende por **capitalismo extractivo** aquella estructura económica que se orientaba hacia el mercado mundial de minerales y estaba bajo el control de un conjunto de empresarios privados propietarios de capital y medios de producción, quienes contrataban fuerza de trabajo obrera, otorgando un salario y estableciendo relaciones sociales de producción desiguales, en la medida que el objetivo final de los empresarios mineros era la obtención de altas tasas de ganancia y su conexión con otras economías transnacionales, dentro del capitalismo internacional como sistema-mundo. Cfr. Wallerstein, Immanuel. **El capitalismo histórico**, Siglo XXI, México, 1989.

3 Sobre los avatares y las contradicciones del desarrollo presentes en toda América Latina, consultar el siempre actual: Paz, Octavio. “El desarrollo y otros espejismos”; en: **El laberinto de la soledad. Posdata. Vuelta a El laberinto de la soledad**, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 284-320.

4